# El ciclo electoral boliviano 2020-2021

## De la crisis de 2019 a los comicios de 2021



**Salvador Romero Ballivián**

El ciclo electoral boliviano 2020-2021:
De la crisis de 2019 a los comicios de 2021

Salvador Romero Ballivián

# El ciclo electoral boliviano 2020-2021

## De la crisis de 2019 a los comicios de 2021



*El ciclo electoral boliviano 2020-2021*
1ª edición, La Paz: FES Bolivia, septiembre de 2022
300 ejemplares

Friedrich-Ebert-Stiftung en Bolivia (FES Bolivia)
Av. Hernando Siles 5998, esq. calle 14, Obrajes
Tel: (591 2) 275 0005
https://bolivia.fes.de/
La Paz, Bolivia

Coordinación editorial: José Luis Exeni Rodríguez
Edición: Víctor Orduna
Diagramación: Enoé Aliaga Flores
Diseño de cubierta: Rafael Loayza
Apoyo coordinación: Camila Pemintel Cano



Depósito Legal: 4-1-2328-2022
ISBN: 978-9917-605-67-6

Producción: Plural editores
300 ejemplares

*Impreso en el Estado Plurinacional de Bolivia*





# Índice

## Índice de mapas, gráficos y cuadros

# Presentación

*Jan Souverein**

El ciclo electoral 2020-2021 fue uno de los más intensos y complejos de la historia democrática en Bolivia. Se produjo en medio de un escenario de crisis múltiple (político-institucional, sanitaria –por la pandemia del Covid-19–, socioeconómica), de polarización y de incertidumbre. Fue un ciclo, además, marcado por la disputa en torno a procesos previos (referéndum constitucional 2016 sobre la reelección, inéditas primarias para binomios presidenciales en 2019 y elecciones generales 2019, declaradas sin efecto legal). Materia importante, pues, para el análisis y el debate público.

Existen algunos estudios, ensayos y publicaciones que abordan diferentes aspectos de las elecciones generales 2020 y de las elecciones departamentales, regionales y municipales 2021. Se analizan, en particular, los resultados de ambos comicios, sus causas e implicaciones. Se plantean también lecturas comparadas entre ambos momentos y respecto a procesos anteriores, considerando a las organizaciones políticas, las autoridades y representantes electos, así como el comportamiento electoral. Asimismo, hay un debate sobre los antecedentes, las condiciones y el contexto en el que se realizó este ciclo.

---

* Director de la FES Bolivia.

El libro que el lector tiene en sus manos propone un análisis del ciclo electoral 2020-2021 que va más allá del propio ciclo, pues lo sitúa en una mirada más larga, en torno a cambios y continuidades relevantes de la dinámica electoral boliviana. Constituye, por ello, un valioso aporte para entender la disputa política considerando no sólo variables electorales, sino también sociales y territoriales. Si bien se trata de una mirada más bien académica, se nutre también del lugar protagónico que tuvo el autor, Salvador Romero, como presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante ese difícil período.

Al respecto, cabe destacar que, a diferencia de las fallidas elecciones del 2019, cuya integridad fue cuestionada por amplias partes de la población y por varios actores políticos importantes desde antes de su realización, los comicios del 2020 y 2021 se realizaron en condiciones técnicamente incuestionables y sus resultados fueron reconocidos por todos los actores relevantes, incluidas las misiones nacionales e internacionales de observación electoral. Ello demuestra la inmensa importancia de contar con un organismo electoral sólido, autónomo e imparcial como garantía de procesos electorales transparentes y confiables que se constituyen en un requisito indispensable para la democracia y la estabilidad política y social.

Queda entonces a su consideración este libro que en sus cinco capítulos expone de manera detallada el contexto de las elecciones 2020 (incluida la disputa por la fecha de la votación), las candidaturas en competencia, los ejes de la campaña electoral, un valioso análisis de los resultados (entre la coyuntura y factores estructurales de largo plazo) y datos específicos sobre los comicios subnacionales. En ese marco, como señala el autor, se proponen algunas "reflexiones sobre el vínculo entre el ciclo electoral y los desafíos de la democracia boliviana".

Estamos seguros de que esta publicación contribuirá de manera sustantiva al análisis de la democracia y los procesos electorales en Bolivia, y será de utilidad para pensar lecciones y desafíos con miras al próximo ciclo electoral.

Septiembre de 2022

# Prólogo

*Salvador Romero Ballivián*

Hay obras de coyuntura que, de pronto, aspiran a ofrecer un poco más que el análisis somero de un período corto. Es el caso de *El ciclo electoral boliviano 2020-2021: De la crisis de 2019 a los comicios de 2021*.

Durante casi tres lustros, a partir de la publicación, en 1993, de la primera edición de *Geografía electoral de Bolivia*, estudié los procesos electorales bolivianos, combinando los enfoques geográfico, sociológico y político, ya fuera en un artículo largo en *Opiniones y análisis*, la publicación periódica de Fundemos, o en un libro corto. Me alejé de esa costumbre tras concluir mi mandato de vocal de la Corte Nacional Electoral (CNE) en 2008, cuando mi vida profesional se enrumbó cada vez más fuera del país. Mi propia mirada se amplió para abarcar la reflexión sobre las elecciones en América Latina, como titulé un libro síntesis editado en 2021.[1]

Aceptar el nombramiento como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a fines de 2019 supuso un nuevo y profundo anclaje en el país. Quizá fue la primera semilla de este libro. Luego vino la pandemia, que obligó a un freno brutal de las tareas preparatorias de la elección convocada para el 3 de mayo de 2020, y la cuarentena

1 Salvador Romero Ballivián, *Elecciones en América Latina*, La Paz: IDEA-TSE, 2021.

nos confinó en nuestras casas. Cada uno debió lidiar de la mejor manera que pudo con ese encierro. Angustiante situación tanto para quienes viven de actividades cotidianas o tienen responsabilidades empresariales como para quienes enfrentaron la prueba en soledad. Estresante también para quienes las nuevas circunstancias imponían formas de vivir para las cuales no estaban preparados, así como para aquellos que se veían sujetos a condiciones de espacio u otras difíciles.

Hice parte de los privilegiados. Los asuntos electorales exigían mucha atención, enfrentados a desafíos inéditos y a delicadas gestiones políticas para asegurar los comicios competitivos y libres que requería la democracia para afianzarse. Aun así, dejaban tiempo libre. En el silencio de la ciudad de La Paz, en la acogedora y cómoda biblioteca de mi casa, de vista al jardín, empecé un libro corto, de investigación y análisis sobre la elección de 2020. Como lo repito con frecuencia, a veces para excusarme de pasar así una tarde del fin de semana, a cada uno su manera de ser ocioso.

Avancé cuanto se pudo, hasta que las páginas dieron alcance a un proceso que parecía suspendido en el tiempo. Después, se reanudó el trabajo hacia una elección cada vez más compleja de hacer, entre las limitaciones de la pandemia y, sobre todo, la polarización política. El proyecto quedó inconcluso. Lo retomé después de octubre de 2020, para completar las lagunas y reinterpretar datos a la luz de nuevos hechos. Lo tenía finalizado. Sin embargo, comprendí que era conveniente incluir un capítulo sobre las elecciones subnacionales de marzo de 2021, de tal manera que el libro abarcara el ciclo electoral 2020-2021.

En la espera, ajusté la obra, amplié un poco su horizonte, más allá de la coyuntura. Se abría la oportunidad de contar una historia más extensa, que colocara el ciclo 2020-2021 en un contexto extenso, a través de las pinceladas de las evoluciones principales del período marcado por la supremacía del Movimiento al Socialismo (MAS), que comenzó en 2005. Reflexioné sobre las cifras del ciclo que analizaba, comparándolas con las de las elecciones del siglo XXI, incluyendo la anulada elección de 2019. Creí interesante para el lector resaltar los elementos de base, vale decir las notables

continuidades, sin perder de vista las transformaciones relevantes, para la comprensión de la dinámica electoral y para entender el juego político, social y regional boliviano.

De esta manera, el libro se convirtió –o así lo espero– en algo más que una pieza de coyuntura o circunstancia. El punto final coincide, no por azar sino por voluntad, con la conclusión de mi etapa al frente del TSE. Con la segunda vuelta de la elección departamental, terminó el objeto del libro y también la razón fundamental de mi estadía en el Tribunal. Emprendí otros rumbos, queda un estudio de esas extrañas elecciones con barbijo que nos tocó vivir.

Si bien me correspondió jugar un papel importante en la conducción del ciclo estudiado, no hay en la obra referencias específicas a esa labor, que requeriría un abordaje de naturaleza y alcance distintos a los de este libro. En otras palabras, esta obra no son las memorias del presidente del TSE sino la investigación de un ciclo electoral relevante para la democracia de Bolivia.

Concluyo agradeciendo a la Fundación Friedrich Ebert, en particular a su director Jan Souverain, por el interés en la publicación de esta obra, en el apoyo para la preparación de los mapas, elaborados por Jorge Hevia, y la prolija edición del libro, confiada a Víctor Orduna.

Ciudad de México, 25 de marzo de 2022

# Introducción

La elección general de 2020 en Bolivia multiplicó las singularidades, unas propias del contexto local; otras, fruto de la pandemia mundial del coronavirus. En efecto, se organizó menos de un año después de la precedente, y se celebró en un ambiente crispado por la acentuada polarización entre partidarios y adversarios del Movimiento al Socialismo (MAS). Al mismo tiempo, su desarrollo quedó perturbado por la pandemia, que obligó a posponer la fecha de la votación inicialmente elegida.

La primera característica, y más evidente, es que la elección se organizó casi un año después de la precedente. La presidencial de 2019 fracasó en su objetivo de abrir un nuevo período constitucional. Tras una jornada de votación tranquila, desde el día siguiente, la sospecha de fraude movilizó a amplios sectores, en particular urbanos, tanto contra el Órgano Electoral como contra el gobierno de Evo Morales, que aspiraba a la tercera reelección. Tras tres semanas de tensión creciente, Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, renunciaron al cargo y recibieron asilo político en México.

Las renuncias de los presidentes del Senado, Adriana Salvatierra, y de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, ambos del MAS, provocaron incertidumbre sobre la sucesión, que se zanjó con la llegada a la presidencia de Jeanine Áñez, hasta entonces segunda

vicepresidenta del Senado, parlamentaria de la oposición, elegida por Beni. A pesar de la tirantez, en las semanas siguientes, los actores políticos e institucionales consiguieron dos acuerdos básicos. Por un lado, establecieron las reglas de juego de una nueva elección en 2020, a través de una ley aprobada por unanimidad; por otro, recompusieron el organismo electoral, con la designación de un nuevo equipo de vocales, tanto para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como para los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

Apenas posesionadas sus autoridades, el TSE convocó la elección para el 3 de mayo de 2020, en el tiempo máximo de 120 días autorizado por la ley especial. En poco tiempo, las fuerzas políticas alinearon sus candidaturas. Se inscribieron ocho organizaciones o alianzas, de las cuales cinco llegaron a la meta. El escenario presentó cambios con respecto a los comicios de 2019 –sólo repitieron dos candidatos–, pero también una continuidad central, con un polo ocupado por el MAS, en tanto que los otros partidos procuraban dirimir cuál encabezaría el disperso frente que se definía por su oposición al MAS.

El proselitismo y los preparativos de la administración electoral se detuvieron súbitamente cuando se presentaron los primeros contagios de coronavirus en el país. El gobierno instauró una cuarentena rígida que obligó a suspender el calendario electoral. Comenzó un prolongado y áspero debate, de casi un semestre, para reprogramar la fecha de la votación, finalmente establecida para el 18 de octubre.

El resultado de la elección fue sorpresivo, en cierto sentido, pues nada anticipaba un triunfo con mayoría absoluta del binomio del MAS, compuesto por Luis Arce y David Choquehuanca. A la vez, la geografía y sociología de ese resultado se anclaban en líneas preestablecidas. Las candidaturas rivales se dividieron el apoyo, con Carlos Mesa en segundo lugar y Luis Fernando Camacho en el tercero. La marcada diferencia del primero al segundo no ocultó la fractura de un país dividido en dos bloques políticos, sociales, culturales y regionales.

Arce asumió el gobierno en un contexto de múltiples crisis, siendo la sanitaria y la económica las más visibles, y debió enfrentar en el primer cuatrimestre su primera prueba política: los comicios departamentales y municipales de 2021, cuyos datos dejaron una sensación de reequilibrio por el buen desempeño opositor en las gobernaciones y las alcaldías más pobladas.

El objetivo de este libro es dar cuenta del ciclo electoral 2020-2021, en cinco capítulos. El primero se concentra en el contexto que llevó del tercer mandato de Morales y de la anulada elección de 2019 a los comicios de 2020, con consideraciones sobre los años precedentes, indispensables para comprender la dinámica política y electoral nacional. El siguiente presenta las formaciones y candidaturas en competencia. El tercero se enfoca en los ejes de la accidentada campaña electoral, interrumpida a medio camino por la declaratoria de la cuarentena debido a la irrupción de la pandemia. El cuarto privilegia el estudio de los resultados desde una perspectiva política, geográfica y social, inscribiéndolos en la coyuntura y en los factores estructurales de largo plazo. El quinto esboza una presentación sintética de los datos relevantes de los comicios locales de 2021, celebrados en el inicio de la gestión de Luis Arce. Finalmente, la conclusión plantea reflexiones sobre el vínculo entre el ciclo electoral y los desafíos de la democracia boliviana.

I

# Los caminos hacia la elección 2020

## Introducción

La elección 2020 es indisociable de la anulación de los comicios de 2019. A la vez, la comprensión de esa presidencial requiere un análisis en cuatro etapas: la primera, extensa, va desde 2005 hasta 2016; la segunda, de mediana duración, de 2016 a 2019 (el punto de inflexión entre ambas es el referéndum sobre la reelección celebrado el 21 de febrero de 2016). La tercera etapa se concentra en el proceso electoral de 2019 y su imprevisto desenlace, en tanto que la cuarta, igualmente corta, cubre desde cuando Áñez asume la presidencia hasta la convocatoria a la elección de 2020.

La primera sección de este capítulo explica el dominio alcanzado por el MAS desde 2005 en el terreno social, político y electoral, así como tercera postulación de Morales a la reelección. Muestra la construcción de un proyecto que combinó un respaldo popular significativo, de lenta erosión, con un control cada vez más férreo de los poderes y las instituciones del Estado.

La segunda sección va de 2016 hasta los prolegómenos de la campaña de 2019. La ventaja del MAS fue disputada por la oposición, que cuestionó cada vez más el régimen de Morales y que encontró en la corta victoria del "No" en el referéndum de la reelección un eje articulador y aglutinador, en particular en el ámbito urbano. El MAS,

el gobierno y el Estado, decididos a llevar adelante la reelección de Morales, chocaron con una resistencia acentuada, expresada menos a través de partidos o de tenores políticos que de plataformas sociales, avivando la crispación de cara a la elección de 2019.

El tercer apartado se concentra en la campaña, la jornada de votación y los episodios postelectorales que condujeron hasta la renuncia de Morales. La elección se celebró en un ambiente de marcada desconfianza con el proceso y la autoridad electoral, aunque la votación transcurrió sin incidentes. Al día siguiente, cuando la segunda vuelta, que parecía asegurada, dio paso a una victoria de Morales en primera ronda, estallaron protestas y disturbios, desconociendo los resultados. Las ciudades, en especial los sectores medios, desafiaron esa victoria, intensificaron y radicalizaron la movilización hasta exigir la renuncia de Morales, siendo secundados por motines policiales. Al final, Morales y García presentaron su dimisión, la tarde del 11 de noviembre, y recibieron asilo en México. El vacío de poder se cubrió cuando Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado y parlamentaria de oposición, asumió el gobierno.

El cuarto acápite comprende los pasos iniciales de la gestión de Áñez, encaminados a enrumbar un nuevo proceso electoral. En una corta etapa en la cual se privilegiaron acuerdos para enfrentar una situación sociopolítica compleja, el gobierno y el MAS, mayoritario en la Asamblea, procedieron de manera concertada y definieron una hoja de ruta en dos actos. El primero fue la anulación de la elección de 2019 y la aprobación unánime de reglas de juego para la elección de 2020; el segundo, la reconstitución del Órgano Electoral, toda vez que se cesó a los vocales nacionales y departamentales. Sobre esa base se organizó el proceso electoral 2020.

## La construcción política y electoral de un proyecto dominante (2005-2016)

El despuntar del siglo XXI trajo aparejado una crisis que golpeó a las economías sudamericanas y provocó insatisfacción social y descontento político. En Bolivia, desgastó a las organizaciones de

orientación liberal que impusieron la tónica de las políticas públicas desde 1985 y encadenó una dinámica de inestabilidad. El primer gobierno afectado fue el de Acción Democrática Nacionalista (ADN), de Hugo Banzer y de su vicepresidente y sucesor Jorge Quiroga (1997-2002). Los heterogéneos movimientos sociales de campesinos en el altiplano, cocaleros en el trópico de Cochabamba y regantes en Cochabamba acorralaron a un Estado debilitado, al tiempo que impulsaron una agenda económica y política antiliberal (García Linera *et al.*, 2001).

La victoria, en 2002, de Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fue sólo la ilusión de continuidad mientras el sistema de partidos se descomponía bajo tendencias centrífugas y polarizadoras (Mayorga, 2004: 27-49). Pese a dotarse de una vasta coalición parlamentaria que integró al Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y a Nueva Fuerza Republicana (NFR), el gobierno exhibió su fragilidad, desprovisto de la iniciativa, con una baja popularidad, enfrentado a movimientos sociales cada vez más contestatarios, reforzados por cooperativistas mineros en el occidente y colonizadores en el oeste cruceño. En octubre de 2003, la presión social y política forzó a Sánchez de Lozada a la renuncia, tras una represión que dejó decenas de muertos. Su partida ilustró el final de un ciclo que se encarnó en la economía de mercado, los gobiernos de coalición y el predominio de los partidos.

Su vicepresidente y sucesor, Carlos Mesa, asumió el gobierno en una sociedad que reclamaba cambios (Laserna, 2004). Procuró responder a esa demanda al prescindir de los partidos que sostuvieron el gabinete de Sánchez de Lozada; organizar un referéndum sobre la política energética que se distanciaba del enfoque liberal; e intentar encarrilar una Asamblea Constituyente. Sus medidas no apaciguaron la ebullición, tanto más cuando, desde el oriente del país surgió una potente reivindicación de autonomía departamental, traducida simbólica y concretamente en la elección de los prefectos por voto popular. Atenazado por demandas contrapuestas, Mesa dimitió en 2005 (Mesa, 2008). Quienes debían asumir la sucesión, los presidentes del Senado, Hormando Vaca Díez

(MIR), y de Diputados, Mario Cossío (MNR), identificados como representantes del sistema de partidos tradicional, declinaron, y la presidencia recayó en Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encargado de convocar a elecciones generales anticipadas.

La elección del 18 de diciembre de 2005 se saldó con resultados inéditos (Romero Ballivián, 2007; Lazarte, 2008: 129-152). Por primera vez desde el retorno a la democracia, un candidato consiguió la mayoría absoluta de los votos válidos (53.7%; 49.7% de los votos emitidos[2]) superando en alrededor de 15 puntos la mejor marca previa, creciendo más de 30 puntos con respecto a los comicios previos y casi duplicando el porcentaje del segundo. El triunfo de Evo Morales, del MAS, se construyó mediante una robusta coalición sociopolítica que incluyó a cocaleros –sindicato del cual era el máximo dirigente–, campesinos, mineros, sectores urbano-periféricos y de clase media. Fue el aval a una propuesta de cambio del país desde sus cimientos, una promesa contenida en la Asamblea Constituyente. La victoria cristalizó y acentuó el proceso de politización de las identidades étnicas. A la par, se inscribió en el giro a la izquierda de América Latina y se alineó, en muchos sentidos, sobre el éxito y el proyecto de Hugo Chávez en Venezuela.

Sobresalió tanto el triunfo de un partido que jamás había gobernado como la debacle de las antiguas formaciones gobernantes y de sus líderes. El expresidente Quiroga ocupó el segundo lugar, con la coalición Podemos (28.5%; 26.4%). Reagrupó a la antigua elite política en sus listas parlamentarias, lo que le restó opciones de disputar la voluntad renovadora que expresaba el electorado. Por detrás se situaron Samuel Doria Medina, de la debutante Unidad Nacional (UN, 7.8%; 7.2%), y el MNR (6.4%; 5.9%), reducido a su peor resultado histórico. Como en otros países andinos, el sistema de partidos se desestructuró y no consiguió rearticularse.

2 En adelante, a lo largo de todo el documento se utiliza esta misma fórmula para referir, entre paréntesis, los porcentajes obtenidos por candidatos o partidos respecto al total de votos válidos y, a continuación, los porcentajes en relación con los votos emitidos.

La gestión de Morales se encaminó en cinco direcciones. Respondió a la expectativa de transformaciones, a través de la Asamblea Constituyente (2006). El MAS ganó la votación en la Constituyente, aunque sin los dos tercios, lo que trabó el proceso constituyente, al punto que la nueva Constitución recién se aprobó, mediante referéndum, en 2009 (Gamboa, 2009). Si bien la oposición consiguió influir sobre el texto, en especial en una lógica de contención cuando fue sometido a una revisión final en el Congreso (Borth, 2009: 107-201), la Constitución plasmó la visión del MAS, en particular sobre la concepción de Bolivia como un Estado Plurinacional, con una impronta de las reivindicaciones y exigencias indígenas (Fundación Konrad Adenauer, 2009; Shavelzon, 2013). Al mismo tiempo, como en las otras constituyentes andinas, la boliviana incorporó la reelección inmediata y abrió la ruta para la postulación de Morales en 2009.

La segunda línea se afincó en el nacionalismo económico, contrapuesto al liberalismo (Morales, 2021: 135-162). Se colocó al Estado en el centro de la retórica y de la acción económica, con la nacionalización de empresas "estratégicas" (la emblemática fue la de hidrocarburos, YPFB, que, paradójicamente, constituyó una renegociación de los contratos y de la fiscalidad sobre las compañías internacionales) y la creación de múltiples empresas públicas, incluyendo obras de gran envergadura que aspiraban a simbolizar la industrialización. El sector privado se encontró con restricciones, aunque, en términos generales, y progresivamente, consiguió un acomodo con el gobierno. El rasgo se volvió más nítido en las gestiones siguientes, al punto que empresarios y gobierno encontraron un modo de convivencia implícita con pocos roces, si bien nunca se llegó a las formas de alianza explícita del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.

En paralelo, como los otros gobiernos sudamericanos, las dos primeras gestiones del MAS se beneficiaron con el mejor ciclo de exportaciones de materias primas en más de un siglo. El flujo de divisas generó un superávit en las cuentas internacionales y en el presupuesto público, el crecimiento de las reservas monetarias y una disponibilidad de recursos sin precedentes para la acción

gubernamental y estatal. El gobierno modernizó la infraestructura, multiplicó las obras pequeñas y medianas en regiones periféricas y expandió la red de transferencias condicionadas (bonos) que alcanzó a casi un tercio de la población (Bono Juancito Pinto para niños escolarizados en el sistema público; Renta Dignidad para ancianos; Bono Juana Azurduy para madres gestantes). La prosperidad amplió el círculo de las clases medias urbanas y redujo los niveles de pobreza (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015).

La tercera línea fue la centralización de las decisiones políticas, en una evolución paradójica porque la Constitución reconoció las autonomías departamentales exigidas por Santa Cruz y los otros departamentos de las tierras bajas, las autonomías indígenas, así como varios mecanismos de democracia directa. Empero, el poder se concentró en la figura presidencial, que controlaba los hilos del partido mayoritario, de los movimientos populares afines y que le daban presencia en las calles –y en las carreteras–, del Poder Legislativo y, después, de manera paulatina, de los otros poderes e instituciones, cuya independencia o autonomía se contrajo, a veces, hasta casi un carácter nominal. El punto de quiebre se produjo en 2008, con dos eventos. Tras la amplia victoria de Morales en el referéndum revocatorio y las derrotas de varios prefectos opositores (Mayorga y Rodríguez, 2015), el gobierno acusó a una fracción de la elite cruceña, punta de lanza de la oposición, de planear acciones separatistas. La ofensiva estatal desarticuló al bloque opositor que reunía a prefecturas, comités cívicos, círculos empresariales, medios de comunicación y dirigentes políticos de las tierras bajas.

La cuarta línea fue el recorte del pluralismo en nombre de la voluntad mayoritaria encarnada en un proyecto político que reivindicaba ser la voz del Estado, la nación y los sectores populares (Komadina, 2008: 183-196). El proceso llevó ecos de la Revolución de 1952, con el contraste entre la democratización de la sociedad, el sentimiento de poder de las organizaciones populares y la erosión del pluralismo y del Estado de derecho.[3] También tuvo resonancias

3 Véase, entre otras las mediciones internacionales de: www.freedom.com, www.v-dem o www.idea.int

contemporáneas con el debilitamiento de los contrapesos institucionales y de los actores independientes, como los medios de comunicación, así como la reescritura de reglas de juego, incluyendo la reelección inmediata (Levitsky y Ziblatt, 2020: 89-116). Mermada, la oposición perdió sus principales resortes de acción.

Por último, Morales realineó la diplomacia. Enfrió la relación con Estados Unidos –incluyendo la expulsión del embajador David Goldberg, en 2008– y se sumó a las iniciativas para reducir su influencia en la región (con matices distintos, tuvo lugar la conformación del ALBA, CELAC Y UNASUR). Tomó distancias con Europa y privilegió el acercamiento con Venezuela y la constelación de países con los cuales Chávez tejió relaciones (Rusia, Cuba, Irán, principalmente, y China, que acrecentó su papel económico en Bolivia, como en otros países de la región) (Fernández, 2013: 78-86).

Morales se presentó a la reelección en 2009 en el escenario más favorable: con una nueva Constitución aprobada con holgura mediante referéndum, aunque sin disipar la fractura territorial (Pérez, 2009: 71-99); y en un contexto de bonanza económica y de desarticulación de la oposición. En el cenit de la fortaleza electoral, estableció el récord del período, al lograr 64.2% de los votos válidos; 60.5% de los emitidos (Haro, 2013: 235-272). El MAS ejerció un dominio abrumador en sus bastiones rurales, donde identificación étnica y voto por Morales tendieron a superponerse (Loayza, 2011: 144-164; Centellas, 2017: 51-78), al punto que la votación opositora se volvió testimonial. Irradió su fuerza hacia regiones inicialmente indiferentes, en especial del oriente.

La oposición se organizó en una plataforma alrededor de liderazgos regionales y postuló al exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que quedó en un distanciado segundo lugar (26.4%; 24.9%). UN logró la tercera casilla, otra vez de la mano de Samuel Doria Medina (5.6%; 5.3%). Cinco otras fuerzas obtuvieron menos de 3%, incluyendo candidaturas desgajadas del tronco del MAS (Komadina, 2013: 34-40).

Si en la primera gestión del MAS predominó el ímpetu de la victoria y una intensa dinámica de cambios, la segunda se caracterizó por la consolidación de los ejes descritos, con escasas innovaciones

relevantes. La agenda legislativa se concentró en aprobar las leyes que tradujeran la reconfiguración constitucional y en nombramientos de autoridades que afianzaron el control partidario sobre las instituciones. Con los dos tercios, el MAS prescindió de la oposición para la elaboración de leyes o la designación de autoridades.

La popularidad gubernamental, el auge económico, la ventaja sociopolítica e institucional desbrozaron el camino de Morales para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) convalide su interpretación de que sólo había cumplido un mandato bajo la nueva Constitución y que, por lo tanto, estaba habilitado para competir en los siguientes comicios –esta postura rompía con el espíritu y la letra de las disposiciones transitorias de la Constitución que contaban ya los mandatos previos a su aprobación–. La menguada oposición apenas ofreció resistencia.

En 2014, Morales concurrió a la segunda reelección con un horizonte despejado. Logró la tercera victoria consecutiva, otra vez con mayoría absoluta y casi sin desgaste con respecto al pico de 2009 (61.3%; 57.8%). El MAS renovó su mayoría parlamentaria de dos tercios.

La oposición repitió el esquema de los comicios precedentes. Sus principales núcleos, asociados con el control de gobernaciones y alcaldías, consensuaron un candidato, sin que ese título implicara una preeminencia personal. En 2014, el escogido fue Samuel Doria Medina, en la alianza Unidad Demócrata (UD) que unió a su partido, UN, con Demócratas, la formación dirigida por el gobernador cruceño Rubén Costas. UD no alcanzó ni la mitad de la votación de Morales (24.2%; 22.8%). De 2005 a 2014, la principal fuerza opositora al MAS rondó en torno a un porcentaje similar, aunque en ligero declive, con una votación urbana y oriental. Quiroga ocupó el tercer lugar, con los colores del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obteniendo 9% (8.5%).

Dos organizaciones adicionales no alcanzaron el umbral del 3% y, en consecuencia, perdieron su personalidad jurídica. El fracaso del exalcalde de La Paz, Juan del Granado, del Movimiento Sin Miedo (MSM), indicó la ausencia de espacio para una tercera propuesta en un escenario polarizado entre el MAS y la oposición.

La búsqueda de una vía intermedia no convenció ni a los simpatizantes ni a los detractores del MAS, partido en torno al cual giró la política boliviana.

## La inflexión de un modelo dominante (2016-2019)

El tercer período de Morales se inició dando continuidad a las líneas del segundo mandato. El *boom* económico latinoamericano de las exportaciones de la década previa concluyó, pero, en Bolivia, esto sucedió de manera suave, con una disminución de las tasas de crecimiento y el reinicio de los déficits públicos, en particular lastrados por el conjunto de las empresas estatales, aunque sin un escenario recesivo.

Las elecciones regionales de 2015 repitieron las pautas de los comicios previos, de 2010. En otros términos, si bien el MAS se consolidó como la primera fuerza –y la única con una presencia nacional–, el rendimiento de sus candidatos a gobernadores y alcaldes no igualó los porcentajes de Morales. Asimismo, sufrió derrotas en los referendos de aprobación de los estatutos departamentales (Varnoux, 2015: 37-58).

Esa brecha le permitió a la oposición, como en 2010, ganar plazas relevantes. Se impuso en las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija, y en la mayoría de las capitales o ciudades grandes (La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Trinidad), gracias a liderazgos con anclaje territorial, pero desprovistos de un centro unificador. Hasta en la zona rural, monolítica en la presidencial, tensiones y rivalidades de alcance local favorecieron a dirigentes con camisetas ajenas al MAS.

Con todo, la elección se enturbió por las polémicas resoluciones del TSE, con un sesgo a favor del oficialismo. Primero, cortaron la ruta a parlamentarios disidentes del MAS con opciones electorales en varias capitales, indicando que incumplían el requisito de la residencia en los distritos al desempeñar sus labores en La Paz. Luego, a una semana de la elección, anularon la lista completa para gobernador y alcaldes de la agrupación favorita en Beni (UD), por

difusión de encuestas. Por último, con una interpretación forzada sobre los votos válidos, eliminaron la segunda vuelta para la Gobernación en Chuquisaca, que quedó en manos del MAS. Sin embargo, poco después, la presión social consiguió que los vocales del TSE renuncien y la Asamblea nombró autoridades con mayor trayectoria de independencia e imparcialidad (2015).

Esas evoluciones no afectaban los factores estructurales de la ventaja política del MAS, por lo que el escenario parecía despejado para la iniciativa de Morales de conseguir la habilitación a una nueva reelección cuando, en 2015, planteó el referéndum sobre el tema. El gobierno lanzó una intensa campaña en medios destacando los logros de la gestión.

La oposición partidaria llamó a votar "No", aunque asistió en clara desventaja y sin proselitismo. El rechazo se articuló más bien alrededor de las redes sociales, impulsadas por plataformas ciudadanas de clases medias urbanas, sin liderazgos visibles, poco vinculadas con los partidos de oposición. Tuvo un inesperado punto de apoyo en la polémica alrededor de la denuncia del hijo que habría tenido Morales con Gabriela Zapata, asociada con una compañía china beneficiaria de contratos públicos por cientos de millones de dólares. La reacción desordenada del gobierno sólo acrecentó el escándalo que no giraba alrededor de la paternidad sino del potencial conflicto de intereses y de corrupción, el cual, por primera vez, salpicaba a la figura presidencial.

Con todo, la corta victoria del "No" en el referéndum del 21 de febrero de 2016 sorprendió (51.3% contra 48.7%) (Mayorga y Rodríguez, 2016). La distribución geográfica y social de los votos reflejó la polarización, con algunas variantes. El "No" se afincó en las tierras bajas, aunque se expandió hasta Potosí y Chuquisaca, y en los principales centros urbanos, con mayores porcentajes a medida que progresaba el nivel socioeconómico de los barrios. El "Sí" tuvo una impronta rural, urbano-periférica, occidental y central, imponiéndose en La Paz, Oruro y Cochabamba. Adicionalmente, cosechó apoyo en el exterior, sobre todo en Argentina, Brasil y Chile, en línea con porcentajes previos (Lafleur, 2012), aunque con tasas modestas de participación –al menos para los vigorosos índices bolivianos–.

Para imponerse, el "No" requirió del concurso de una fracción del electorado del MAS de 2014. Ese segmento se reclutó sobre todo en sectores medios y populares de las ciudades, incluso los que globalmente simpatizaron con el proyecto de Morales. Sin dejar de valorar la gestión del MAS, en el momento del referéndum consideraron que el cheque en blanco de una nueva reelección entrañaba riesgos para la democracia.

En este sentido, es clave resaltar las características de la campaña del referéndum. El gobierno apostó a traducir el respaldo a la gestión y al presidente en un apoyo al proyecto de la nueva reelección. Destacó sus méritos y los contrastó con el período previo. Intentó, asimismo, personalizar el "No" en figuras cuestionadas del pasado, en especial del MNR, como Sánchez de Lozada o su ministro Carlos Sánchez Berzaín, ambos exiliados en Estados Unidos desde 2003.

Paradójicamente, la ausencia de tenores en el campo del "No" impidió que el referéndum se convierta en duelos personales, en los cuales Morales llevaba la ventaja. El rechazo se articuló menos alrededor de personajes en campaña o de la crítica a la gestión gubernamental que de una incompatibilidad del continuismo con los principios fundamentales de la democracia. Esa línea agregó un vasto y heterogéneo arco, que incluyó desde la oposición más conservadora y rígida hasta desencantados con el "proceso de cambio". Esta campaña produjo otro curioso efecto político: cuando se perfiló la victoria del "No" al cierre de la jornada de consulta, ningún líder o partido pudo arrogarse el mérito por el resultado o intentar construir una campaña de cara a la siguiente presidencial.

Este referéndum fijó la inflexión en el destino político de Morales, más que de la gestión. En efecto, ni se produjo una remezón en el equipo gubernamental ni se modificó el curso de las políticas públicas. La aminoración del ritmo de crecimiento no alteró la percepción generalizada de progreso, sostenida por considerables inversiones públicas, un activo sector privado, en especial comercial y en el área de la construcción, la modernización inmobiliaria en las ciudades. La distribución de bonos se consolidó, con un impacto sobre los estratos populares. En el área institucional, el control del MAS sobre el conjunto de los poderes e instituciones se hizo

más palpable. Desde el punto de vista político, la tercera gestión se concentró en la búsqueda de la habilitación de la reelección.

En efecto, pese a la aceptación primera del resultado inesperado, quedó en evidencia que Morales buscaría esquivarlo. Se organizó una campaña para deslegitimarlo, presentándolo como la consecuencia de una "mentira" fabricada por la oposición (Morales se desdijo de la paternidad, el gobierno afirmó que el hijo nunca existió y en 2017 Zapata fue encarcelada por delitos financieros). Tras descartar un nuevo referéndum, el gobierno eligió la ruta segura del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Éste, en vísperas de la elección de autoridades judiciales (noviembre de 2017), dio libre curso a un número indefinido de postulaciones. Consideró la reelección como un derecho humano, con una argumentación ya aplicada en países centroamericanos (Treminio y Muñoz Portillo, 2019: 101-122). En una opinión consultiva posterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, 2021) desestimó ese razonamiento.

La imagen de Morales se asoció de manera indeleble a la voluntad de permanecer en el poder y ofreció un punto de convergencia a la oposición y de crítica capaz de hallar un eco importante en la sociedad. En efecto, hasta febrero de 2016, la oposición confrontó dificultades para encontrar un flanco vulnerable en la gestión de Morales que resonara más allá del tercio duro de su electorado. Le costaba cuestionar la administración socioeconómica, en tanto que otras críticas –política exterior, copamiento institucional, etc.– lograban escasa audiencia.

La denuncia del prorroguismo y la defensa del resultado del referéndum cohesionaron a la oposición y generaron acercamientos con figuras otrora simpatizantes del "proceso de cambio", relegando las discrepancias en la heterogénea oposición y conservando activas las bases de la victoria del "No". El cuestionamiento al desconocimiento del referéndum se convirtió en la reivindicación de la democracia y mantuvo la atención de las franjas del electorado del MAS. Los citadinos se colocaron como los abanderados del "21 F" y hallaron en la fórmula "Bolivia Dijo No" una síntesis de su rechazo a un nuevo período de Morales. Después de años

de atonía, las corrientes opositoras comenzaron a articularse y a movilizarse progresivamente, al menos en las fechas emblemáticas, siempre alrededor de plataformas sin líderes visibles y distantes del universo partidario opositor, golpeado y con poca capacidad de salir de los enclaves de los gobiernos locales que controlaba.

## La elección 2019: la campaña, la jornada de votación y el desenlace postelectoral

Al despejar cualquier incertidumbre sobre la postulación de Morales, la decisión del Tribunal Constitucional, de acuerdo a Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0084/2017, de 28 de noviembre de 2017, de habilitar la reelección inició el proceso electoral de 2019, aunque éste tuviera un largo preámbulo durante 2018. El oficialismo se orientó a apuntalar sus opciones, subrayando la garantía de estabilidad que representaba.

La claridad en el MAS contrastaba con una oposición fragmentada, sin candidaturas declaradas. El favorecido por las encuestas era el expresidente Carlos Mesa, que elevó su popularidad como portavoz de la causa marítima en el juicio que se entabló contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Sin embargo, no dirigía ningún partido, no ocupaba un cargo electivo y reiteraba su desinterés por la candidatura. Los otros nombres de la baraja aparecían confinados a sus espacios políticos naturales, como Luis Revilla, alcalde de La Paz, o Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, en tanto que los candidatos recurrentes desde 2005 (Doria Medina y Quiroga) no despuntaban en las encuestas.

La incertidumbre se despejó apresuradamente a finales de 2018, tras la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas, que obligaba a realizar una primaria presidencial en cada partido, reservada a los militantes, en una jornada única, a cargo del TSE. Se trata de un mecanismo que ha ganado popularidad en América Latina (Carranza y Chuquillanqui, 2020: 85-108; Freidenberg, 2016: 31-91). En el proyecto de ley del TSE, la disposición referida

a las primarias debía estrenarse en 2024, pero la Asamblea Legislativa la dispuso para los comicios de 2019.

La medida precipitó a la oposición a abrir el juego y permitió al MAS conocer a sus adversarios con antelación a los tiempos habituales –aproximadamente un trimestre antes de la jornada de votación–. Al mismo tiempo, desarticuló al TSE. Ante la inminente necesidad de pronunciarse sobre la candidatura de Morales y en medio de una polémica creciente, renunciaron los vocales percibidos como defensores de una línea institucional: la presidenta Katia Uriona, el vicepresidente José Luis Exeni Rodríguez y la vocal Dunia Sandoval. Estas renuncias, sumadas a las incorporaciones de los vocales suplentes, agravaron la desconfianza hacia el Órgano Electoral, considerado como parcializado con el MAS. Esta tónica no disminuyó hasta la jornada de la elección, a la cual la opinión pública llegó suspicaz: aproximadamente 70% de los encuestados temían un fraude a favor del gobierno (*Página Siete*, 29 de septiembre de 2019).

El MAS registró el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, presentado desde 2005. En la oposición, dos candidaturas descollaron de entrada. La dupla Carlos Mesa-Gustavo Pedraza dirigió Comunidad Ciudadana (CC), construida alrededor de la sigla del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y respaldada por Sol.bo, del alcalde paceño, Luis Revilla, y UN, de Samuel Doria Medina. Por otro lado, Demócratas presentó el binomio integrado por los senadores Oscar Ortiz-Edwin Rodríguez, en la coalición Bolivia Dijo No (BDN). Otros seis partidos se inscribieron, sin conseguir impacto en el electorado. Entre ellos, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) postuló al expresidente Jaime Paz Zamora; cuando este renunció, lo reemplazó el pastor evangélico Chi Hyun Chung.

La singularidad de las primarias residió en que todas las organizaciones inscribieron una sola fórmula, lo que privó de sentido a estos comicios –al menos, como ejercicio de democracia interna para seleccionar candidatos–. El MAS procuró convertirlas en un primer acto fuerte de correlación de fuerzas a su favor y se esforzó por movilizar a su base. Para contrarrestar, la oposición les restó

legitimidad, incluso desalentó el sufragio de sus militantes y la mayoría de los candidatos se abstuvo de votar.

Los datos reflejaron esas estrategias contrastadas. Del casi medio millón de votos emitidos en total en las primarias, el MAS recibió el 92.8%, aunque el binomio sólo obtuvo el 90% de los sufragios marcados por ese partido –diferencia quizá indicativa del malestar de funcionarios públicos obligados a registrarse en el partido y votar–. Los otros partidos se repartieron los sufragios restantes, y el que más alcanzó, BDN, apenas reunió el 3.1% (Monrroy, 2020: 127-133).

A partir de entonces, comenzó una larga campaña electoral de casi nueve meses, cuya misma extensión le restó intensidad.

El MAS insistió en la continuidad de la gestión, que mantenía una aprobación elevada y le permitía encabezar las encuestas y buscar la victoria en primera vuelta, si bien la mayoría absoluta parecía alejarse de sus posibilidades. Si en 2005 se había mostrado como el promotor del cambio de las estructuras, desde el tercer mandato se presentó como garante de la estabilidad; de los nuevos equilibrios políticos, sociales y económicos alcanzados por el país. Al mismo tiempo, subrayaba que la oposición carecía de una propuesta alternativa.

El desplazamiento retórico de las transformaciones a la estabilidad no lo movió del polo que ocupaba, en la izquierda, en el eje del cambio, por razones intrínsecas y externas. En efecto, el MAS mantuvo el crédito como adalid del mundo indígena y de las clases populares, aliado con las organizaciones de esos sectores (Zuazo, 2009). Las listas parlamentarias se nutrieron con los liderazgos de esas corporaciones (Gonzáles, 2013; Romero Ballivián, 2018). Ningún partido pudo arrebatarle ese lugar ni disputarle el entrelazamiento con esos movimientos. Asimismo, sus rivales continuaban asociados con las disputas políticas de principios del siglo XXI, lo que mantenía con pocas variantes las representaciones de un antagonismo afincado por más de tres lustros.

La oposición lidiaba con problemas similares a los de los comicios previos, en especial por la aprobación del gobierno. Empero, dispuso de tres bazas nuevas. La popularidad de Morales se desgastó con respecto a 2009 y 2014 por el empeño en conseguir

la reelección, intención que alejó a un segmento del electorado del MAS –el mismo que determinó la victoria del "No" en 2016–, sin necesariamente volcarlo de forma estructural a la oposición. Luego, la tercera gestión del MAS estuvo salpicada con sonadas denuncias de corrupción (entre las más significativas, la del Fondo Indígena y la de la compañía china CAMC, donde trabajaba Gabriela Zapata) y de vinculaciones con clanes de narcotráfico, que afectaron a figuras del oficialismo. A diferencia de los períodos previos, en la gestión 2014-2019 los casos fueron más numerosos, aparecieron en múltiples sectores y erosionaron la imagen moral del MAS. Por último, la misma reelección de Morales ofreció un flanco que permitía apelar al votante sin necesidad de cuestionar el conjunto de la acción gubernamental del MAS.

Las principales campañas de la oposición optaron por estrategias distintas. Mesa atacó la pretensión reeleccionista de Morales, denunció el manejo de áreas específicas, como la salud, al mismo tiempo que sugirió preservar ciertas políticas públicas, como los bonos, y el espíritu inclusivo de la diversidad étnica y cultural. En cambio, Ortiz, después de un ataque frontal contra el MAS, en especial por la corrupción, apuntó contra Mesa, en un esfuerzo por desplazarlo del segundo lugar y alcanzar la ronda decisiva frente al oficialismo.

Este giro modificó el meollo de la campaña de la oposición, centrándola alrededor del "voto útil". Mesa reivindicó su sólido segundo lugar en las encuestas para insistir en que se evite la dispersión del sufragio, con el propósito de forzar la segunda vuelta; Ortiz procuró minar el apoyo de Mesa para que el escenario no pareciese tan definido. Esa contraposición redujo la batalla a la misma oposición, al punto que Morales fue poco inquietado durante la campaña.

Más allá de los elementos conceptuales, la campaña fue notoriamente desigual y desequilibrada, a favor del MAS. En efecto, el oficialismo contaba con un flujo masivo y permanente de recursos, provisto por contribuciones (voluntarias o no) de empleados públicos y núcleos empresariales con los cuales el gobierno estableció lazos. Sumaba el activismo de los movimientos sociales afines. El

binomio organizó frecuentes y extensas concentraciones urbanas y rurales. Difundió una propaganda constante, menos promovida por el partido que por la publicidad gubernamental o de las empresas públicas. La influencia de la pauta contratada excedió el campo estricto de la propaganda y repercutió en un tratamiento muchas veces complaciente en el ámbito noticioso.

La oposición se ajustó a presupuestos inferiores. Le costó recaudar incluso en sectores socioeconómicos que podrían haber sido cercanos a sus planteamientos. El empresariado actuó cauteloso, pues temía eventuales repercusiones negativas en caso de que el MAS retuviera el poder. La dificultad se acrecentó para Mesa, en tanto que la trayectoria profesional y la afiliación partidista de Ortiz le abría entradas en la elite cruceña, económicamente la más poderosa del país.

En la elección de 2019 se estrenó el mecanismo de subvención estatal indirecta, luego de más de una década de la supresión de este financiamiento. Al cubrir una parte del costo de campaña de las organizaciones, la medida reintrodujo a Bolivia en el esquema dominante en América Latina, que ha marcado las reformas políticas desde fines del siglo XX (Casas y Zovatto, 2011: 17-67). La disposición se incorporó en la Ley de Organizaciones Políticas, previendo recursos en una proporción del 20% del costo de organización de las elecciones anteriores. El "fortalecimiento público" –nombre oficial de esta subvención– alcanzó a Bs 35 millones (aproximadamente 5 millones de dólares): 60% distribuidos de manera igualitaria entre todas las candidaturas y 40% de acuerdo con los porcentajes resultantes de los comicios previos, vale decir, de la presidencial de 2014. La administración de estos recursos se encargó al TSE que pagaba a los medios que cada organización seleccionaba.

Si el binomio oficialista dominó en la televisión y la radio, la oposición se situó mejor en las redes sociales. Esto fue el reflejo del desigual acceso al internet en Bolivia: común en las ciudades, en especial desde los segmentos de popular y medio hacia arriba, mayoritariamente antagónicos al MAS. Por el contrario, el uso de las redes es menor en los sectores de asentamiento rural y periférico-urbano, más identificados con el MAS.

La campaña tuvo su inflexión en agosto, con los incendios en la Chiquitanía. Hasta ese momento, el proselitismo del MAS transcurrió con viento favorable, sin ser inquietado por sus contrincantes –sumidos en querellas internas– y sin temas en la agenda que incomodaran al gobierno. El desastre ecológico de la pérdida de millones de hectáreas de bosque seco, sin precedentes en la historia republicana, conmocionó a la sociedad y repercutió en la comunidad internacional, igualmente alarmada por los incendios en la Amazonía brasileña.

En las semanas que duraron los incendios, el gobierno pareció carente de respuestas para controlarlos o limitar su expansión. Incluso, se denunció que sus medidas lo alentaron, como una forma de expandir la frontera agrícola-ganadera oriental, en connivencia con elites agroganaderas y colonizadores provenientes de tierras altas. Por primera vez, la iniciativa pasó a la oposición, cuyas candidaturas criticaron la pasividad estatal y las políticas públicas. Aún más fuerte resultó la crítica social. La defensa ecológica y medioambiental halló un extenso eco en las clases medias, en particular en los jóvenes, sensibles a esa temática postmaterialista, como había sucedido, de forma pionera, en las naciones con mayor desarrollo (Inglehart, 1993). Ese impulso revigorizó a la oposición en la recta final de la campaña.

Con todo, el episodio no alteró de manera profunda las preferencias del electorado recogidas por las encuestas. De enero a septiembre, los indecisos concentraron alrededor del 25% de los entrevistados. Morales mantuvo el primer sitio que giró alrededor de un sólido tercio de las intenciones de voto. Mesa tampoco vio peligrar su segundo lugar. Pese a la mejora en sus números, Ortiz no tuvo chances de acercársele y decayó en la recta final (*Página Siete*, 13 de octubre de 2009). Las escasas oscilaciones subrayaron cuán asentada se encontraba la polarización política, social y geográfica, lo que, al mismo tiempo, restó impacto a las campañas –incluyendo su notoria desigualdad–. La única variante que registraron las encuestas fue el ascenso del hasta entonces desconocido Chi, que irrumpió con declaraciones provocadoras y un mensaje anclado en una retórica religiosa conservadora, de orientación

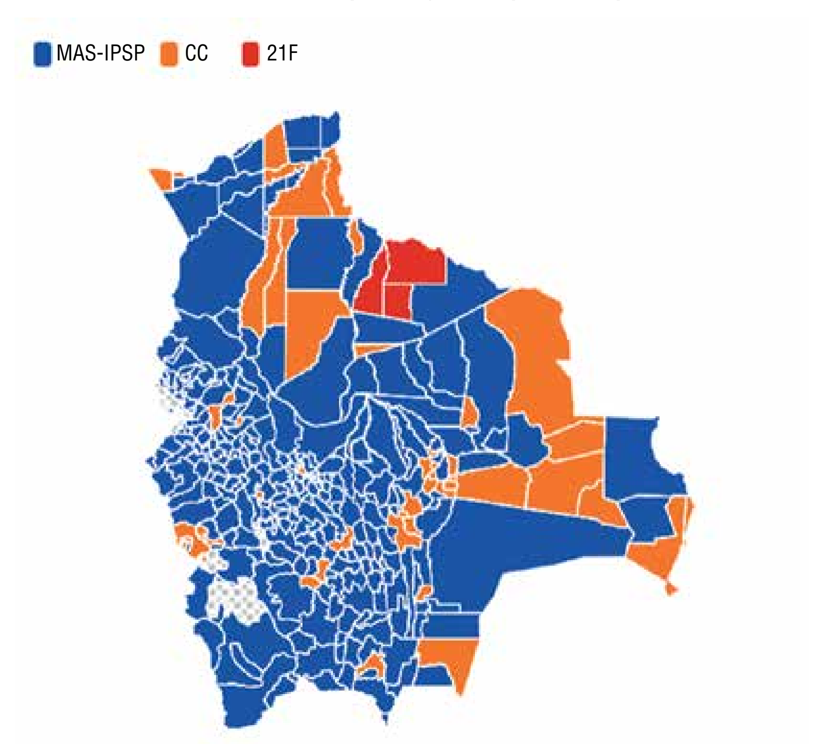
evangélica. Fue el único postulante que se situó al margen de las pautas que estructuraban la vida política desde principios del siglo XXI. La novedad en Bolivia se inscribía en una significativa dinámica continental (Pérez Guadalupe y Grundberger, 2018).

Al cabo de la campaña, la jornada de votación del domingo 20 de octubre transcurrió sin incidentes y con una elevada participación. El TSE inició la difusión de los resultados a través del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), con una ventaja de Morales, que rebasaba la barrera del 40%, pero sin los diez puntos de diferencia sobre el segundo, Carlos Mesa, indispensables para vencer en primera vuelta. Los conteos rápidos independientes confirmaban esa tendencia. Sin embargo, el TSE interrumpió abruptamente el TREP cuando se había superado el 80% de las mesas transmitidas. La escasa experiencia del país con ese mecanismo de difusión hizo que la suspensión no generara inconvenientes de manera inmediata y quedó instalada la certeza de la segunda vuelta.

Sin embargo, según el resultado oficial, Morales consiguió la estrecha reelección en primera vuelta, al cumplir con el doble requisito de superar la valla de 40% y de una distancia de al menos diez puntos con respecto al segundo. El mapa 1 muestra la distribución de los ganadores por municipio.

Los datos se inscribieron en una geografía y sociología de hondo anclaje y antiguas raíces (Romero Ballivián, 2003). Corroboraron la fortaleza rural del MAS en el altiplano, los valles, el trópico cochabambino y las áreas de colonización en el oriente, vale decir, donde la autoidentificación étnica alcanza sus cotas más elevadas, los estándares de nivel de vida son bajos, la cultura sociopolítica se impregna de desconfianza hacia las elites y se organizan alrededor de formas comunitarias o sindicales, predominan la minería, la agricultura y el comercio de reducida productividad. Ejerció un dominio extenso, aunque no tan indiscutido como en el pasado. Al mismo tiempo, consiguió un apoyo sólido en las ciudades intermedias y en los barrios populares de las capitales departamentales, aunque, igualmente, el desgaste disminuyó los guarismos previos.

**Mapa 1**
**Elecciones 2019: partido ganador por municipio**




Fuente: Elaborado por Jorge Hevia con información del OEP.

El segundo lugar de CC representó el mejor resultado de un rival del MAS desde 2005. Mesa se impuso en las nueve capitales departamentales y logró un resonante triunfo en el departamento de Santa Cruz, donde volcó a su favor la dinámica del "voto útil" con el apoyo del área metropolitana, los valles y la Chiquitanía. Añadió porcentajes significativos en Beni, municipios amazónicos y chaqueños. En contraste, su desempeño rural en tierras altas fue bajo –en el altiplano perdió el segundo lugar–.

Chi Hyun Chung, del PDC, consiguió el inesperado tercer lugar. Se situó segundo en muchas provincias rurales occidentales, donde la corriente evangélica posee una implantación consolidada

(Rivière, 2004: 259-294). Alcanzó sus mejores resultados en bastiones del MAS y en desmedro de ese partido: en otras palabras, fisuró el baluarte del MAS con la retórica más conservadora de todos los candidatos. Este logro paradójico se explica por la introducción de una variable hasta entonces ajena al juego político –la cuestión religiosa–; la única que quebró la dimensión étnica sobre la cual se sostiene el MAS en ese espacio. Un segmento que votaba por Morales por identificarse a sí mismo como indígena –en especial, aymara– se alejó porque privilegió su identidad evangélica. La imprevista e improvisada candidatura de Chi Hyun Chung creció al margen de cualquier (inexistente) aparato político, propio o del partido, impulsada sólo por la red de iglesias evangélicas rurales y de barrios populares.

El cuarto lugar de Ortiz golpeó por doble partida a Demócratas. Cedieron frente a un *outsider* el tercer puesto que habían mantenido durante toda la campaña, con una ligera tendencia al alza. Se desplomaron en Santa Cruz, su bastión. Su electorado los abandonó en la recta final, al privilegiar el "voto útil" y buscar asegurar la segunda vuelta, por encima de cualquier otra consideración. Los mejores resultados de BDN se dieron en zonas rurales de Beni, donde obtuvo sus únicas tres victorias municipales. Su estructura resistió mejor y los ecos de la campaña del "voto útil" llegaron debilitados.

Las otras cinco candidaturas confirmaron el papel secundario que les asignaban las encuestas. Quedaron por debajo del umbral del 3% de los votos, límite para conservar la personalidad jurídica.

Sin embargo, todo se trastocó desde el atardecer del lunes 21 de octubre.[4] El TREP fue reanudado, perfilando una victoria de Morales en primera vuelta, al superar con más de diez puntos a Mesa. La reacción en las ciudades fue violenta, contra lo que se denunció como "fraude". Los ataques contra los Tribunales Electorales Departamentales (TED) destruyeron los de Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz, y dañaron seriamente los de Pando y Beni.

4 Para la descripción y valoración del período que va de la elección a la renuncia de Morales y meses siguientes, véase, con enfoques variados: Brockmann, 2020; Peralta, 2021; Mayorga, 2020; y *Página Siete*, 2019.

A partir de entonces y durante tres semanas, el juego se desarrolló en múltiples canchas, con actores diversos, y con tácticas y estrategias que se modificaron a la par de acontecimientos que evolucionaban de manera acelerada y drástica, hasta concluir en un desenlace insospechado.

La estrategia gubernamental apuntó en varias direcciones. Presionó para contar con el resultado oficial lo antes posible, a fin de colocar la legalidad de su lado y cerrar el paso a la incertidumbre y a la contestación, así como a cualquier negociación con la oposición partidaria. En esa línea, el organismo electoral agilizó el cómputo. El 25 de octubre, el TSE proclamó oficialmente a Morales ganador en primera vuelta y presidente reelecto, con un 47% frente a un 36.5% de Carlos Mesa. Para cerrarlo en esa fecha, el TSE revirtió la anulación de cuatro mesas en Beni, sin incidencia sobre los datos generales, pero que hubieran obligado a repetir la votación en ellas dos semanas después, postergando así el anuncio del resultado nacional. Sin embargo, la renuncia del vicepresidente del TSE, Antonio Costas, el 22 de octubre, puso en evidencia las tensiones.

Asimismo, para recuperar una legitimidad cuestionada, el gobierno mostró apertura hacia la comunidad internacional; en ese sentido, el principal gesto fue la invitación a la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 22 de octubre, para que ejecute una auditoría vinculante al proceso electoral.

Por último, frente a la movilización citadina, el gobierno eligió la táctica del desgaste, utilizando a la Policía como fuerza de contención y, al mismo tiempo, procuró romper la paralización de las ciudades con el despliegue de movimientos civiles afines –en particular, choferes y cooperativistas mineros–.

Por su parte, la oposición partidaria, expresada en primer lugar a través de Mesa, candidato que había recibido el respaldo de Ortiz para la segunda vuelta, quedó en una postura incómoda. Peleaba por una salida institucional, exigiendo la segunda vuelta, luego la anulación del proceso y la convocatoria de uno nuevo, y manteniendo una posición ambigua frente a la auditoría de la OEA. Sin embargo, falló en la conexión con la movilización social, que seguía un curso de manera autónoma.

En efecto, los grupos medios urbanos se lanzaron a la calle, desconociendo la reelección, tachada de fraudulenta. La movilización se produjo con concentraciones masivas y pacíficas en la mayoría de las capitales departamentales y en las principales ciudades, acompañadas del bloqueo de la mayor cantidad posible de calles, en muchos casos mediante el recurso de medidas simbólicas como las pitas amarradas entre postes (acción que dio lugar al término “pititas”, como forma de reivindicación ante un comentario desdeñoso de Morales). Destacó la impronta juvenil. En paralelo, profesionales de informática y estadística buscaron poner en evidencia las inconsistencias e irregularidades del cómputo.

Las ciudades se paralizaron y se radicalizaron a medida que pasaban los días, hasta rechazar cualquier salida electoral inmediata y exigir directamente la renuncia de Morales. Sin embargo, la movilización dejó de lado a Mesa. Esta situación resulta, a primera vista, contradictoria, dado el caudal electoral citadino que logró CC. Se comprende, sin embargo, a la luz de una sociedad urbana que desde 2016 se movilizó contra la reelección reivindicando la bandera democrática, al margen de los partidos o políticos, incluso desconfiada hacia ellos, pero decidida a apoyar al líder mejor posicionado frente al intento reeleccionista de Morales.

En esas jornadas, tras una década de atonía, reemergió el movimiento cívico, en especial en Santa Cruz, donde tuvo históricamente su fortaleza, su mayor grado de organización y representatividad (Vergara, 2015). A diferencia de lo que sucedía en las otras ciudades, desprovistas de una institución o de un liderazgo que llevaran la batuta, en Santa Cruz, el Comité Cívico se puso a la cabeza del rechazo al resultado electoral. Su presidente, el hasta entonces poco conocido Luis Fernando Camacho, joven empresario, ganó protagonismo y expresó muchas de las demandas que circulaban en la calle, incluyendo la exigencia de la renuncia de Morales. El otro foco de protagonismo cívico se produjo en Potosí, ciudad que protagonizaba una pulseta con Morales desde hacía varios años (Alemán, 2013: 57-77); en ella, ganó presencia el liderazgo de Marco Antonio Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) entre 2018 y 2020.

Las fuerzas de seguridad desempeñaron una actuación importante en el desenlace del conflicto. En distintas ciudades, grupos de policías se amotinaron, solidarizándose con la protesta y recibiendo, en contrapartida, el apoyo de los movilizados. La insubordinación debilitó seriamente al gobierno, igual que había sucedido en 2000 y 2003 durante las gestiones de Banzer y Sánchez de Lozada, respectivamente. La calle se envalentonó aún más cuando las Fuerzas Armadas ratificaron su neutralidad política.

Por último, la comunidad internacional tuvo un papel relevante, en especial a través de la OEA. Por un lado, su Misión de Observación Electoral (MOE), dirigida por el excanciller costarricense, Manuel González, adoptó pronto una posición inhabitual, recomendando, el 22 de octubre, que, cualquiera fuera el resultado oficial, se convocara a una segunda vuelta pues los datos no ofrecían certeza. Por otro lado, su misión de auditoría fue aún más lejos; concluyó que "las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Morales sobre el candidato Mesa. Por el contrario, a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad popular expresada en las urnas" (Organización de los Estados Americanos, 2020: 62). En el mismo sentido, el informe de la misión de expertos de la Unión Europea estableció un severo balance del proceso electoral.

La auditoría de la OEA fue el punto de quiebre de la crisis. Tras la divulgación del informe en la mañana del 10 de noviembre, Morales jugó la última carta: ofreció un nuevo proceso electoral, con una recomposición del TSE. El planteamiento ya no halló acogida en la calle ni en los liderazgos políticos, que exigieron la renuncia. El gobierno comenzó a desmoronarse, con renuncias de autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y de los gobiernos departamentales y municipales; unas voluntarias y otras forzadas por las amenazas contra la integridad o los bienes de los funcionarios –amenazas que se llegaron a concretar, en algunos casos, como los de Víctor Borda y César Navarro, ambos potosinos, con la quema de domicilios–. La Fiscalía detuvo a la presidenta del

TSE, María Eugenia Choque. Las Fuerzas Armadas, por la voz de su comandante, el general Williams Kaliman, sugirieron la renuncia de Morales. Ésta se produjo en la tarde del 10 de noviembre, juntamente con la de García Linera, desde el bastión del Chapare. Fue el preámbulo para su salida rumbo a México, país que les concedió asilo y donde permanecieron durante algunas semanas. La partida completó un desenlace absolutamente imprevisible del proceso electoral.

## El inicio del gobierno de Áñez y la organización de un nuevo proceso electoral

La renuncia de Morales generó un vacío de poder pues estuvo acompañada por la renuncia del vicepresidente García Linera y precedida por las renuncias de Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, y de Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, quienes constitucionalmente figuraban en la línea de sucesión presidencial. Además, se sumaron las renuncias de otros parlamentarios del MAS a los cargos directivos de ambas Cámaras. Al mismo tiempo, se quemaron o saquearon las casas de figuras de la oposición (como las de Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, y de la periodista Casimira Lema) y se incendiaron 66 buses Puma Katari de la Alcaldía de La Paz, generando zozobra en las clases medias, más aún cuando la Policía y las Fuerzas Armadas quedaron sin mando político.

Con la intermediación de la comunidad internacional, en particular la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Iglesia católica, los actores políticos buscaron resolver la acefalía de las directivas congresales. La salida fue sui géneris: la segunda vicepresidenta del Senado, la senadora beniana de UD, Jeanine Áñez, asumió la presidencia del Estado (12 de noviembre de 2019). El Tribunal Constitucional se expresó favorablemente. Por cuarta vez desde 1979, Bolivia recurría a la figura de un presidente encargado de una transición política a

través de una elección: Wálter Guevara (1979), Lidia Gueiler (1980) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005).

El inicio de la gestión arrastró todavía turbulencia. El repliegue de los grupos medios fue seguido por la movilización de partidarios del gobierno depuesto: la represión dejó un saldo cruento y trágico en Senkata, en la ciudad de El Alto, y en las inmediaciones de Sacaba, ciudad del área metropolitana de Cochabamba. Ambas localidades se convirtieron en un emblema del MAS para denunciar al gobierno, tanto interna como externamente.

Rápidamente, se contrapusieron dos interpretaciones sobre los acontecimientos de octubre y noviembre (Lehoucq, 2020: 130-144), en línea con una polarización asentada (Laserna, 2020). En la vereda del MAS se afirmó que Morales fue derrocado por un "golpe de Estado cívico-militar", orquestado por los líderes opositores con complicidad internacional (Estados Unidos, Europa, OEA) y que el nuevo gobierno tenía una esencia represiva y autoritaria. Por el contrario, en la oposición a ese partido, se acusó al expresidente de haber cometido un doble fraude (la habilitación para la postulación y la manipulación propiamente dicha de los resultados) y se insistió en que Bolivia había recuperado la democracia gracias a la "revolución de las pititas", lo que condujo, en el ala más dura, a definir el período del MAS como una "dictadura". En el país, de acuerdo con las encuestas, la mayoría catalogó los eventos como una revuelta social (70%) antes que como un golpe de Estado (25%) (*Página Siete*, 2 de diciembre de 2019).

Ambos campos buscaron afuera adalides para apuntalar su versión. La comunidad internacional se dividió. Si bien la mayoría de los gobiernos reconocieron a Áñez, algunos, como los de Argentina, México o España, no lo hicieron o marcaron evidentes distancias.

El nuevo gobierno fue representativo de un sector de la oposición al MAS. Se articuló alrededor de Demócratas, formación a la cual pertenecía Áñez, y se abrió al grupo encabezado por el líder cívico Fernando Camacho, lo que le dio una fuerte coloración oriental. En cambio, no incluyó al núcleo articulado alrededor de Mesa. Progresivamente, la base política de la gestión se achicó: la proximidad con Camacho terminó pronto, lo cual tuvo su demostración en la destitución del ministro de la

Presidencia, Jerjes Justiniano, en tanto que el enfriamiento con Demócratas se produjo en la recta final, en consonancia con la crisis de la candidatura presidencial.

Pese al ambiente de extrema crispación sociopolítica, incertidumbre, temor y desconfianza, los actores políticos e institucionales demostraron una notable capacidad para encauzar una resolución concertada de la crisis. La comunidad internacional, con el liderazgo de la ONU, UE, así como la Iglesia católica, mantuvieron abiertos los espacios de negociación. Como ya había sucedido a principios del siglo XXI, el recurso de salida fue electoral, con la convocatoria a una nueva elección general, precedida por la recomposición del organismo electoral.

El gobierno y la mayoría parlamentaria del MAS definieron los términos de las reglas del juego y el marco político de la elección 2020, a través de una ley aprobada de manera unánime por la Asamblea (24 de noviembre). El impulso en el Legislativo correspondió a un ala concertadora del MAS. Hasta entonces monolítica, la bancada del MAS dejó entrever sensibilidades distintas. Un sector se apegó al libreto más rígido, en sintonía con Morales; otro, mayoritario, privilegió el entendimiento político y el apaciguamiento social, y controló la nueva directiva de la Asamblea, presidida por Eva Copa en el Senado y Sergio Choque en la Cámara de Diputados, ambos representantes de El Alto.

La ley dejó sin efecto legal los comicios de octubre de 2019 y acordó un plazo de 120 días para la realización de la elección desde la convocatoria, que debía darse casi inmediatamente después de conformado el Órgano Electoral. Asimismo, suprimió las primarias para no retrasar la realización de los comicios generales, dejando la selección de los candidatos en manos de las organizaciones, como había sido la costumbre, con la excepción de 2019. Cesó a los vocales electorales nacionales y departamentales, y acortó el plazo para el nombramiento de los nuevos. Mediante una ley ulterior, dispuso que la elección departamental y municipal –prevista inicialmente para marzo de 2020– se convocaría inmediatamente después de la posesión del nuevo presidente.

A tono con ese ambiente consensual, el Tribunal Constitucional se pronunció ampliando el mandato de Áñez y de la Asamblea

Legislativa hasta la posesión de las nuevas autoridades, que debía producirse, necesariamente, en 2020. Zanjó así la polémica vinculada con la finalización, el 22 de enero de 2020, del período constitucional de un lustro inaugurado con la tercera presidencia de Morales.

Bajo estos auspicios se recompuso el Órgano Electoral de forma concertada. El Ejecutivo movió las primeras fichas, con la designación del vocal al cual tiene potestad de nombrar en cada Tribunal, empezando por el TSE con la selección de Salvador Romero Ballivián (25 de noviembre). Luego, privilegiando el entendimiento entre las bancadas y con el beneplácito tácito de los mediadores internacionales, el Legislativo nombró a los vocales, nacionales y departamentales, titulares y suplentes (19 de diciembre).

Las leyes señaladas y las designaciones de autoridades electorales constituyeron el único episodio de concertación antes del distanciamiento, notorio desde enero de 2020. El gobierno y la Asamblea se separaron por motivo del proyecto de Ley de Garantías. El MAS exigió esta ley para generar un círculo de protección ante lo que percibía como el riesgo de un acoso judicial a sus líderes desde el gobierno y se amparó en los acuerdos patrocinados con la comunidad internacional. El gobierno denunció que esta ley buscaba la impunidad para las exautoridades y no cedió ante los buenos oficios interpuestos por los mediadores internacionales, cuyo papel se relegó desde entonces. El enfrentamiento se endureció: la Asamblea censuró a varios ministros, entre ellos a los de Defensa y de Gobierno, a quienes la presidenta ratificó inmediatamente después. La aprobación de créditos y de bonos también generó bloqueos de un lado y del otro, dependiendo de quién tomara la iniciativa. El tono de la confrontación subió hasta la ruptura.

En ese ambiente, cada vez más enrarecido, se puso en marcha el proceso electoral. El 5 de enero de 2020 el TSE convocó a la elección general para el domingo 3 de mayo, aprovechando al máximo los 120 días otorgados por la ley. Ese lapso, en sí mismo corto, lo era aún más si se considera que no hubo oportunidad de preparar las actividades del calendario, con el agravante de la destrucción de casi la mitad de la infraestructura de los TED, las numerosas acefalías y vacancias de personal y el severo daño a la reputación institucional.

II

# El armado del rompecabezas: partidos sin candidatos y candidatos sin partidos

## Introducción

La elección de 2020 ofreció una situación política singular y atípica, incluso más allá de Bolivia. La mayoría de las organizaciones políticas carecía de líderes propios que descollaran, al punto de ser evidente que ellos serían los candidatos o, al menos, los aspirantes a la postulación. Marcó el punto de llegada de una progresiva evolución que estableció una diferencia sustancial con el final del siglo XX, caracterizado por partidos con jefaturas asentadas que se convertían automáticamente en postulaciones presidenciales, con la excepción del oficialismo, cuya principal figura ejercía la presidencia sin derecho a la reelección consecutiva. Aquel fue el tiempo de Hugo Banzer-ADN (seis veces candidato a la presidencia), Víctor Paz-MNR (cuatro veces candidato, desde 1978), Jaime Paz-MIR (cuatro veces candidato), Antonio Araníbar-MBL (tres veces candidato), Hernán Siles-MNRI/UDP (tres veces candidato, desde 1978), Gonzalo Sánchez de Lozada-MNR (tres veces candidato), Marcelo Quiroga Santa Cruz-PS-1 (tres veces candidato).

Desde principios del siglo XXI, se produjo una evolución en simultáneo al derrumbe del sistema de partidos. Con excepción del MAS, que tenía, a la vez, un líder indiscutido y un candidato

asegurado a la presidencia por la ruptura del candado antirreeleccionista, los otros partidos desaparecieron o entraron en declive, en tanto que los líderes veteranos pasaban al retiro y las estructuras no conseguían generar nuevos liderazgos de alcance nacional; en el mejor de los casos, éstas construían enclaves de poder local (Romero Ballivián, 2016: 271-336).

Los partidos se convirtieron, cada vez más, en cascarones vacíos, en siglas, con mínima vida interna, pocos cuadros dirigentes y sin militancia estructurada; sin embargo, esa personalidad jurídica mantenía su valor, a medida que las organizaciones fueron desapareciendo por no lograr la votación mínima en los comicios. Muy pocas nuevas organizaciones políticas se constituyeron fuera del ámbito local, por la escarpada pendiente que representa reunir 2% de las firmas de la votación de la última elección. Por lo tanto, cada uno de los 11 partidos reconocidos en 2020 poseía un capital valioso en el mercado político.

La crisis del sistema de partidos hizo complejo –aunque, por supuesto, no imposible– el surgimiento o la consolidación de algunos liderazgos con proyección política, con notoriedad y popularidad, pero al margen de las organizaciones (la figura se prolongaba al ámbito local, donde muchos aspirantes serios a las alcaldías o las gobernaciones optaban por conformar su propia agrupación ciudadana o recurrían a una ya existente, pero sin anclaje territorial o social propio).

En ese sentido, en el corto lapso entre la convocatoria a las elecciones y la inscripción de candidaturas, se produjo un "baile de cueca" en el cual líderes y políticos buscaban un partido –o una coalición de partidos– para postular y, a la vez, las organizaciones se acercaban a los probables candidatos presidenciales para asegurar su futuro. Esta descripción se aplicó a las fuerzas de oposición al MAS, en tanto que este partido enfrentó un dilema distinto: definir un binomio apenas unos meses después de la renuncia de su dupla electoral de casi tres lustros.

Esa misma debilidad de los liderazgos explica otra singularidad del registro de candidatos en 2020. Aunque ni siquiera se había cumplido un trimestre del proceso electoral 2019, apenas dos

dirigentes repitieron la candidatura (Mesa y Chi Hyun Chung; este último con una organización distinta a la de 2019). En los otros casos, el reacomodo de los partidos o de los liderazgos derivó en una renovación amplia de la oferta.

Si bien se inscribieron ocho candidaturas, únicamente cinco llegaron a la jornada electoral; tres declinaron, en la recta final de la campaña, en un intento por reagrupar el voto contrario al MAS.

## La definición de la candidatura en el MAS

Para los comicios de 2020, el MAS encaró un proceso delicado de selección de su binomio. Desde principios del siglo XXI, el partido se acomodó a la presencia dominante de Morales, su candidato presidencial en cinco justas consecutivas (2002-2019) y, desde 2005, presidente elegido cada vez con mayoría absoluta. El partido carecía de liderazgos concurrentes o alternativos, capaces de existir al margen de las decisiones de Morales: ningún ministro, parlamentario o dirigente partidario poseía un juego propio o autónomo y las carreras políticas seguían trayectorias dispares, con notorios altibajos (Romero Ballivián, 2018).

Al mismo tiempo, el MAS no tuvo tiempo para preparar el relevo. En octubre de 2019, se había alineado detrás de su binomio habitual y la salida del gobierno se produjo en condiciones adversas y caóticas. La ausencia de Morales en Bolivia complicaba igualmente la toma de decisiones, si bien quedó claro de manera inmediata que, aun desde el exilio, conservaba la palabra decisiva para definir el binomio. Ese protagonismo se explica, por un lado, porque su caída no respondió a una elevada impopularidad que implicara el final de sus perspectivas políticas o de la implantación de su partido, a diferencia de lo que ocurrió con Sánchez de Lozada y el MNR en 2003. Acababa de ganar la primera vuelta, gracias a una base firme de apoyo, aunque simultáneamente lo resistía un significativo núcleo de la población. Por otro lado, en la amalgama algo heterogénea de movimientos y tendencias que conforman el MAS (Do Alto, 2011: 95-111), ninguno de ellos ostentaba una

supremacía evidente y la función ordenadora y cohesionadora continuaba dependiendo de Morales.

La dinámica interna se reflejó en las propuestas de los sectores por influir en la decisión que se tomaría en Buenos Aires. Dos nombres ocuparon las primeras planas: Andrónico Rodríguez, joven dirigente del Chapare, impulsado desde la base cocalera, y David Choquehuanca, excanciller, promovido por el ala indigenista y altiplánica.

Desde Buenos Aires se anunció que la candidatura recayó en Luis Arce (1963), el emblemático ministro de Economía de la gestión del MAS (2006-2017; 2019), cuyo perfil tecnocrático no se asociaba con ningún movimiento social específico. Completó el binomio David Choquehuanca (1961), el rostro de la diplomacia boliviana por más de una década (2006-2017). Cualesquiera que hubieran sido las fricciones antes de la designación, casi de inmediato se manifestó la disciplina alrededor de la dupla escogida (Jáuregui, 2021: 185-188).

El MAS apostó por dos de sus ministros más conocidos, vinculados con éxitos proclamados de la gestión (crecimiento económico, realineamiento de la política exterior) y con trayectorias poco polémicas. Envió, asimismo, un mensaje moderado en dirección de los sectores populares ascendentes y medios urbanos, convertidos en el fiel de la balanza desde 2016. Por último, subrayó el énfasis en la reivindicación de su balance y la estabilidad.

## La antigua oposición: del clamor social de la candidatura de unidad a la dispersión y la renuncia de los candidatos

En la definición de las candidaturas en la antigua oposición al MAS se contrapuso la exigencia de los sectores urbanos movilizados en octubre y noviembre de 2019 que reclamaban una candidatura de unidad que reflejara la lucha conjunta y asegurara la victoria sobre un MAS percibido como debilitado, pero no vencido, y las apuestas, sensibilidades y distintas legitimidades de los actores políticos. Se registraron siete candidaturas, tres de ellas encabezadas

por expresidentes, con el curioso rasgo de que ninguno de ellos accedió a esa función como fruto de una elección ganada. Tres binomios se retirarían antes de la jornada electoral.

El expresidente Carlos Mesa (1953) y su exministro de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza (1963), repitieron en la franja de CC. Reivindicaron el segundo lugar obtenido en 2019 y haber sido el principal contendiente electoral de Morales. La permanencia de la sigla y del binomio disimularon transformaciones. La fórmula llegó desportillada. En efecto, con respecto a los comicios precedentes, perdió el respaldo de aliados con implantación local, en especial de Luis Revilla, alcalde de La Paz, y de Adrián Oliva, gobernador de Tarija; también se alejó UN de Doria Medina, que había respaldado a Mesa como depositario del "voto útil" en los anteriores comicios. Esos tres líderes apoyaron la candidatura oficialista de Áñez.

Si la presencia de Mesa resultaba previsible, sorpresivo y polémico resultó el lanzamiento de la candidatura de la presidenta Jeanine Áñez (1967), acompañada por Doria Medina como postulante a la vicepresidencia. Abanderaron la coalición denominada Juntos, que reagrupó a Demócratas y sumó a Revilla y a Oliva. La controversia jurídica (la postulación siendo una presidenta no elegida por voto popular) no despegó; en cambio, se avivó el ambiente político. Se cuestionó que la presidenta abandonara la dirección de una delicada transición para convertirse en jugadora electoral, añadiendo tensión e incertidumbre. El gobierno buscó aprovechar la popularidad de Áñez en sectores de la antigua oposición y el beneficio de la duda que le daban otros grupos. Al momento de la postulación, su gestión era evaluada como "muy buena" o "buena" por el 43% de los encuestados contra sólo un 27% que la juzgaban "mala" o "muy mala" (*Página Siete*, 26 de enero de 2020).

El tercer expresidente que ingresó al ruedo electoral fue Jorge Quiroga (1959). Repitió la fórmula de 2014, con Tomasa Yarhui como candidata a la vicepresidencia. Si en esa oportunidad llevó los colores del PDC, para los comicios de 2020 postuló por la alianza Libre 21, asentado en el pilar del MNR –que en 2019 postuló a Virginio Lema, cuya trayectoria en la arena política había sido mínima–. Quiroga reivindicó su experiencia de gestión pública, su

constante oposición al MAS y su papel para facilitar la transición durante la crisis de 2019.

De las protestas de octubre y noviembre de 2019 surgió el binomio Luis Fernando Camacho (1979) y Marco Antonio Pumari (1981), líderes de los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí, respectivamente, y actores en la primera línea de la movilización. Conformaron el frente Creemos, articulado en la coalición UCS-PDC (el año previo, esos partidos habían postulado, por separado, al exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y a Chi Hyun Chung, respectivamente). Presentaron sus acciones de 2019 como decisivas para la renuncia de Morales. Sin embargo, su camino a la candidatura conoció tropiezos por las desavenencias y acusaciones que intercambiaron entre ellos antes de resellar su alianza.

Adicionalmente, compitieron tres fórmulas. Chi Hyun Chung (1970), el pastor evangélico y candidato sorpresa de los comicios de 2019 se alejó del PDC y encontró espacio en el Frente Para la Victoria (FPV). El armado de su binomio fue accidentado. Se confrontó pronto con la vicepresidenta Jazmine Barrientos, cuyo registro fue inhabilitado por el TSE, y luego se disputó con el FPV por la escogencia del reemplazante, cargo para el cual se inscribió a Salvador Pinto.

En PANBOL, la candidata presidencial de 2019, Ruth Nina, pasó a la casilla vicepresidencial y dejó el lugar al dirigente de los cooperativistas mineros Feliciano Mamani (1976).

Acción Democrática Nacionalista (ADN), ausente en 2019, recorrió un camino escarpado para volver ante el electorado. Falló en su propósito de adherirse a la alianza de Creemos e incursionó en solitario. Su primer binomio, Ismael Schabib-Simeón Jaliri, fue inhabilitado por la no presentación de documentos. Después de tires y aflojes, finalmente acudió con la dupla de la abogada Maricruz Bayá (1968) y Sergio Tarqui. Por último, el Movimiento Tercer Sistema (MTS), del gobernador de La Paz, Félix Patzi, fue el único partido participante en 2019 que desistió de competir en 2020.

Tres de estos siete binomios se retiraron a semanas de la jornada electoral para facilitar y promover la concentración del voto de oposición al MAS. Áñez fue la primera en declinar, tomando nota de su desplome en las encuestas, en tanto que Camacho mostraba

una dinámica ascendente y la desplazaba del tercer sitio. Siguió Quiroga, que no levantó sus números en las preferencias y que concentró las últimas semanas de su campaña en cuestionarlas. Por último, declinó ADN, aunque Bayá mostró su desacuerdo.

## Listas parlamentarias

En paralelo al registro de los binomios presidenciales, las organizaciones presentaron las nóminas de candidatos a la Asamblea, cuya confección les resultó aún más complicada.

Pesó la ya descrita desestructuración de la vida partidaria. Hasta principios del siglo XXI, la tarea era delicada por el choque de líderes que construyeron progresivamente sus espacios de notoriedad y acción, a la par que los partidos privilegiaban las carreras ordenadas –el paso de cargos suplentes a titulares; del ámbito local al nacional; de diputados a senadores–. Las fricciones por ocupar la "franja de seguridad" en las listas podían incluso provocar fracturas y resquebrajar los aparatos cuando se desairaban ciertas aspiraciones. Ese tipo de disputas se volvió excepcional: los partidos desaparecieron como viveros naturales de aspirantes a curules.

Otra vez, la situación difirió entre el MAS y las otras organizaciones. El primero constituye, a la vez, una suerte de confederación laxa de organizaciones y movimientos sociales y una estructura que mantiene relaciones de acercamiento o distanciamiento con esos sectores. Ese tejido explica una disputa intensa entre los grupos por obtener la mayor cantidad posible de espacios en las listas y también de los dirigentes de esos movimientos por ocupar los lugares privilegiados.

Para 2020 el MAS se replegó sobre sí mismo. En los comicios precedentes ofreció puestos a los "invitados", es decir, a figuras de las clases medias o del empresariado (la candidatura más prominente de aquella apertura se reservó, en Santa Cruz, al expresidente de los empresarios, Gabriel Dabdoub). En esta oportunidad, privilegió a dirigentes de los grupos más afines. Había perdido la posición de fuerza desde la cual extendía las invitaciones y expresaba

también su desconfianza con las clases medias y acomodadas que, en general, festejaron la renuncia de Morales.

Al mismo tiempo, mantuvo la práctica de renovación casi completa de las nóminas parlamentarias, que impide cualquier perspectiva de edificar trayectorias congresales fuertes. Hasta quienes ocuparon las directivas camarales quedaron descartados. Sólo la diputada paceña Betty Yañíquez fue postulada a la reelección.

Una mención aparte merece la candidatura de Evo Morales a la primera senaduría por Cochabamba. Concentró la mayor atención pública y mediática, incluso eclipsando parte del escenario presidencial, y desató numerosas demandas de inhabilitación. La polémica confirmó su papel como la figura más polarizadora de la política boliviana. Al final, el TSE inhabilitó a Morales por el incumplimiento del requisito de residencia de dos años previos en la circunscripción de postulación (por la misma causal también fueron inhabilitados, entre otros, el exprefecto de Tarija Mario Cossío-Creemos; el excanciller Diego Pary-MAS, Potosí; y la candidata vicepresidencial de FPV, Jazmine Barrientos). Pese a su ausencia en la papeleta, Morales terminó como una figura omnipresente en la campaña.

En las organizaciones contrapuestas al MAS, la elaboración de las listas parlamentarias siguió patrones distintos. La coalición Juntos fue la más apegada a los cánones clásicos que entremezclan liderazgos partidarios y trayectorias parlamentarias. Su singularidad respondió a que se estructuró alrededor de Demócratas y Sol.bo, de los pocos partidos con una cierta consistencia de vida política interna (Heras, 2021). Figuraron personas con experiencia congresal o bien posicionados en el armazón partidario. El retiro de Juntos frustró esas postulaciones.

En los otros casos, las planchas tendieron a articularse alrededor de los círculos de los candidatos o de las cúpulas partidarias. Más allá de esa descripción general, hay matices. Después del MAS, CC presentó las listas más completas. Aprovechó al máximo la experiencia de 2019 y, en la medida de lo posible, repitió sus nóminas, aunque resintió la ausencia de sus antiguos aliados y dio cobijo a algunos nuevos –como, por ejemplo, el alcalde tarijeño Rodrigo Paz, postulado al Senado–. Creemos incluyó a figuras visibles de la oposición al MAS, varias vinculadas con los movimientos

cívicos; también recibieron lugares destacados dirigentes de UCS, así como figuras del equipo del alcalde cruceño, Percy Fernández.

En los otros partidos, las dificultades se acrecentaron. Las listas mostraron numerosos vacíos, tav nto en los puestos plurinominales –más allá de los primeros rangos– y, sobre todo, en las circunscripciones uninominales, en especial rurales. ADN mostró la situación más crítica: al final de la revisión y antes del retiro de la organización, sólo contaba con 15 candidatos habilitados.

El TSE asumió un papel proactivo para asegurar el cumplimiento del principio de paridad y alternancia de género en las candidaturas en los tres bloques: Senado, diputaciones plurinominales y diputaciones uninominales. Si bien hubo algunas señales fuertes, como la decisión de CC de que una mujer encabezara todas sus listas departamentales para el Senado, en general, a los partidos les costó ajustarse, probando los lastres de los obstáculos para una presencia femenina más activa en los ámbitos de decisión. A la jornada de votación se llegó con más mujeres que varones en las listas. Las cifras de titulares cerraron con 20 senadoras (55.5%) y 61 diputadas (46.9%) (Zamora *et al.*, 2021: 35). Bolivia se mantuvo entre los países con mayor porcentaje de parlamentarias del mundo.[5]

El proceso de 2020 ofreció igualmente una innovación. El TSE hizo una interpretación amplia de las normas y permitió que, por primera vez, las naciones y pueblos indígenas presentaran candidatos de manera directa, es decir, sin necesidad de una postulación partidaria, en las circunscripciones especiales, reservadas para pueblos indígenas minoritarios. Esos distritos se singularizan por no requerir de un parámetro demográfico preestablecido ni que sus asientos electorales posean continuidad geográfica (Aguilera y Marca, 2020: 54-66). Existen en siete departamentos (todos a excepto de Chuquisaca y Potosí). Finalmente, se inscribieron candidaturas en seis de las siete circunscripciones posibles (La Paz quedó al margen). Los resultados de los postulantes fueron magros: ninguno venció y, salvo el candidato representante de la Organización de Capitanías Weenhayek y Tapieté de Tarija (Orkaweta), los demás cosecharon porcentajes mínimos (Vargas, 2021: 63).

---

5 Véase, al respecto: www.unwomen.org

III

# Los tiempos de una campaña electoral accidentada

## Introducción

La campaña electoral de 2020 resultó atípica. A diferencia de la de 2019, debía ser corta y ágil; terminó siendo larga, entrecortada y accidentada, por la irrupción de la pandemia. En efecto, después de la inscripción de los candidatos se había recorrido una primera tibia parte cuando los primeros casos de coronavirus condujeron al gobierno a decretar una cuarentena estricta, con una suspensión casi completa de labores. En cascada, el TSE debió suspender el calendario electoral y posponer la elección.

La trama electoral quedó súbitamente devaluada. Las prioridades e inquietudes de la ciudadanía se concentraron en la prevención de los efectos más dañinos de una pandemia de la que se conocía muy poco y, por otra parte, en limitar los impactos del brutal freno socioeconómico –a veces, ambos propósitos colisionaron–. Reencauzarlo supuso un proceso complejo y ríspido, con un debate nacional, extendido durante casi un semestre, sobre la fecha de los comicios. Recién en agosto se consolidó la fecha definitiva de la presidencial: el 18 de octubre.

Este capítulo se articula en cuatro secciones. La primera analiza el debate y el juego de los actores en torno a la definición de la fecha de la de votación. La segunda plantea el escenario inicial

de la campaña, buscando destacar los ejes de posicionamiento de las candidaturas. La tercera estudia los movimientos de campaña durante la cuarentena. La última analiza cómo las candidaturas abordaron la recta final de la campaña.

## El ríspido debate alrededor de la fecha de la elección

Como sucedió con numerosas elecciones previstas en el mundo para 2020, la pandemia forzó una postergación (INE-CAPEL, 2020; Pinillos *et al.*, 2022). A primera vista, las fechas bolivianas (3 de mayo-18 de octubre) encajan con las de otros países: Chile pasó el plebiscito constitucional del 26 de abril al 25 de octubre, Uruguay retrasó la municipal del 10 de mayo al 27 de septiembre. La singularidad provino, en el caso boliviano, de que determinar una nueva fecha fue objeto de una agria confrontación, que incluso implicó la postergación de los plazos inicialmente definidos, con algunos actores reacios a la idea misma de retomar y concluir el proceso electoral. Estos antagonismos colocaron la elección en una situación inusualmente delicada.

Con la llegada de los primeros casos de coronavirus, a mediados de marzo de 2020, la carrera electoral se interrumpió abruptamente a medio camino. El gobierno decretó la emergencia sanitaria, siendo la principal disposición la cuarentena rígida, con suspensión de la inmensa mayoría de las actividades. Esa medida impedía cualquier organización logística. El 21 de marzo, el TSE suspendió el calendario electoral y, en los hechos, canceló la jornada de votación prevista para el 3 de mayo, aunque sin fijar una nueva fecha.

El proceso electoral quedó relegado de las prioridades de la sociedad, atenta a la evolución de la pandemia y sus efectos económicos. El TSE convocó a las candidaturas para concertar un curso de acción. Ese primer diálogo se tradujo en un proyecto de ley elaborado por el TSE con tres ejes. El primero establecía un rango temporal en el cual debía celebrarse la jornada de votación (entre el 7 de junio y el 6 de septiembre); en ese marco, el TSE escogería la fecha en base a consideraciones técnicas del proceso

electoral y de salud vinculadas con la evolución de la pandemia. El abanico fue la solución ante la ausencia de un acuerdo más concreto entre las fuerzas políticas. El segundo eje consolidaba las actividades efectuadas hasta la suspensión, bajo el principio de preclusión, lo que consolidaba lo avanzado desde enero. Por último, se otorgaba facilidades para adecuar las tareas pendientes a los desafíos de la pandemia, en especial en lo referido a los ajustes logísticos.

El mes que transcurrió entre el envío del proyecto de ley y su trámite en la Asamblea demostró cómo el proceso electoral pasó a un segundo plano. La ley se aprobó el 30 de abril. Respetó el proyecto del TSE, salvo en el rango de fechas, pues fijó que la jornada de votación debía realizarse en un plazo no mayor a 90 días desde el 3 de mayo (lo que significaba, como máximo, el último domingo de julio o el sábado 2 de agosto). Las fuerzas opositoras al MAS fueron disidentes con relación al recorte del plazo. La presidenta Áñez observó el proyecto en ese punto y lo devolvió a la Asamblea que, ese mismo día, desestimó las observaciones y promulgó la ley. El gobierno interpuso recursos contra la ley ante el Tribunal Constitucional, en tanto que el TSE indicó que, a pesar de su discrepancia con la decisión, la respetaría.

El escenario político se enturbió. La promulgación de la ley se interpretó como una imposición del MAS y generó una reacción de sus rivales y de sectores medios contra una fecha que, según se estimaba, era muy pronta y se convertiría en un factor que multiplicaría los contagios. Los sectores afines al MAS se activaron exigiendo la suspensión de la cuarentena y que el TSE fijara el día exacto de los comicios.

Desde las facciones más contrarias al MAS comenzó una ofensiva dura contra el proceso electoral, procurando convertir el jaque en mate. Se acusó al TSE de connivencia con el MAS por aceptar la ley. Se puso en tela de juicio el diseño de las circunscripciones, bajo el señalamiento de que favorecía al MAS por privilegiar el voto rural y por ser el instrumento para que esa organización alcance sistemáticamente los dos tercios en la Asamblea. El eslogan “un ciudadano, un voto” resumió esa campaña. De manera cada vez

más amplia y rápida, circularon versiones de que el padrón no ofrecía garantía pues se hallaba inflado con electores fantasmas –las estimaciones oscilaban del medio millón al millón de inscritos–. Por último, apelando al precedente que sentó la cancelación de la personalidad jurídica de UD en los comicios de 2015 en Beni, se reclamó la anulación de la sigla del MAS porque el candidato Luis Arce difundió resultados de encuestas. Estos sectores exigían, como prerrequisitos para reanudar la elección, un reempadronamiento y un rediseño de las circunscripciones –además de la eliminación del registro electoral del MAS–.

Para el TSE, el plazo de la ley generaba un escenario difícil. La cuarentena rígida permanecía y existía incertidumbre sobre las características de la fase posterior para llevar adelante tareas que suponen una producción significativa de materiales, importación de insumos de protección –escasos en ese momento a nivel mundial, como los barbijos– y un despliegue por todo el país para la capacitación de jurados y el traslado del material.

Por ello, el TSE condujo un nuevo proceso de concertación con los actores políticos, esta vez con el respaldo de la comunidad internacional (ONU y EU) y de la Iglesia católica. La negociación cerró la fecha de las elecciones en el 6 de septiembre. El acuerdo fue públicamente anunciado junto con los candidatos presidenciales, casi en simultáneo con el final de la cuarentena rígida (2 de junio). Sin embargo, Áñez y Camacho se desmarcaron y no asistieron al evento.

El TSE plasmó el acuerdo en un proyecto de ley, tratado y aprobado por la Asamblea, nuevamente con el disenso de los adversarios al MAS. Los ataques contra el proceso y el Órgano Electoral se redoblaron, alimentados por grupos próximos al gobierno y a la candidatura de Camacho, en particular el Comité Cívico de Santa Cruz. Se mantuvo la presión sobre el padrón, las circunscripciones y la personería jurídica del MAS. Se añadió una arremetida sobre el impacto de la elección en la evolución de la pandemia en una etapa en la cual la curva de contagios empezaba su ascenso hacia el pico o en el uso de recursos para ese fin cuando las carencias del área de salud eran grandes. En los grupos más hostiles se pedía una postergación hasta que se superara la pandemia.

Pocas voces respaldaban la elección en un clima social tan adverso, e incluso hesitaron los candidatos que apoyaron el acuerdo de principios de junio. En ese contexto, el 23 de julio, el TSE, a través de una resolución, aplazó la jornada de votación para el 18 de octubre, definiendo la fecha como "definitiva, impostergable e inamovible". Justificó que esa fecha se alejaba del pico de la pandemia –previsto entre agosto y principios de septiembre de acuerdo con la mayoría de las proyecciones– y permitía cumplir con la disposición constitucional de que las autoridades fuesen elegidas y posesionadas en 2020, considerando una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre. Las sucesivas acciones jurídicas del organismo electoral resultaron decisivas para consolidar el ciclo electoral (Bellot, 2021: 139-140).

Los movimientos sociales afines al MAS reaccionaron y exigieron que se mantenga el 6 de septiembre; en el bloque cívico, la postergación se juzgó insuficiente. La tensión escaló cuando, a principios de agosto, los sindicatos rurales concretaron las amenazas de movilizaciones y bloqueos de carreteras que pusieron en vilo el abastecimiento de alimentos y el abastecimiento de oxígeno para los pacientes de Covid-19 en las ciudades. Pidieron que la fecha se adelantara al menos una semana e incluso circularon las primeras exigencias para la renuncia de Áñez.

De nuevo respaldado por la comunidad internacional, el TSE abrió una ronda de negociaciones, esta vez con los movimientos sociales y los otros órganos del Estado, en especial el Legislativo. La ronda concluyó exitosamente. Los bloqueos se levantaron. Después de una posición ambigua, la dirección del MAS forzó a los movimientos sociales para que acepten la nueva fecha y suspendan los bloqueos. La Asamblea aprobó por unanimidad una ley que confirmaba el 18 de octubre como fecha de la elección; el gobierno promulgó la norma y desistió de buscar prórrogas adicionales. En la sociedad se generó la certeza de que, finalmente, ese día serían los comicios. Las pocas voces contrarias, articuladas alrededor del Comité Cívico de Santa Cruz, quedaron aisladas y perdieron audiencia. Así, cerrado el prolongado debate sobre la fecha, las organizaciones políticas retomaron sus campañas.

## El primer tiempo de la campaña y el posicionamiento de las candidaturas (enero-marzo)

Tras el registro de las ocho candidaturas, la campaña arrancó fría. El MAS la enfrentaba en condiciones distintas a las acostumbradas desde 2009: esta vez, desde la oposición, sin los significativos recursos de propaganda en los medios de comunicación canalizados a través del gobierno y las empresas públicas, sin el binomio que dio identidad al partido y a su gestión gubernamental, sin la posibilidad de movilizar al aparato público para las concentraciones, marchas y mítines y, sobre todo, con el ánimo de la militancia golpeado, principalmente en el área urbana.

Por razones distintas, el escenario se presentaba igualmente complicado para los antagonistas al MAS. La euforia de su base social y política tras la renuncia de Morales se transformó en una frustración que crecía a medida que se diluía la expectativa de la candidatura única (el último esfuerzo, del Comité Cívico de Santa Cruz, a días de la inscripción de los candidatos, se desdibujó en un vago compromiso de parte de los candidatos de reevaluar la situación a un mes de los comicios). Para muchos sectores urbanos, el objetivo excedía la salida de Morales del poder, buscaba que el MAS no regresara al gobierno (Córdova, 2020: 42). El reproche no se dirigía contra ninguno en especial, sino contra el conjunto, acusado de ceder a los intereses y ambiciones particulares, en vez de privilegiar el interés colectivo. En otros términos, mientras la base social anhelaba conservar el espíritu de solidaridad, unidad y desprendimiento que caracteriza la efervescencia de los estados nacientes, visible en las movilizaciones de octubre y noviembre, las organizaciones políticas ya se situaron en la dinámica cotidiana de los intereses fragmentados (Alberoni, 1992). Por lo tanto, las candidaturas se presentaron desgastadas, enemistadas entre ellas y con escasos recursos, tiempo o voluntad para desplegar una ocupación territorial vigorosa.

El inicio gris no impidió que se perfilaran los lineamientos de campaña. El MAS reiteró los logros de su gestión, tanto económicos como sociales, que constituyeron la base del proselitismo

de Morales en 2019. Como exministro de Economía, Luis Arce subrayó las tasas de crecimiento del período, su experiencia en la administración pública y presentó al MAS como el garante de la estabilidad. Ofreció preservar un modelo sustentado en el protagonismo del Estado y mantener el abanico de bonos públicos. Asimismo, alertó sobre el deterioro de la economía e hizo hincapié en que el manejo inadecuado de las turbulencias por parte de la administración de Áñez podría derivar en una crisis. La denuncia del "golpe de Estado", las "masacres" de Senkata y Sacaba y la persecución judicial contra sus dirigentes buscó englobar al conjunto de sus adversarios (Áñez, Camacho, Mesa) como los representantes de una reacción contra un movimiento popular y democrático, de raíz indígena.

El MAS apuntó a cohesionar su base de las zonas rurales y la periferia urbana, jugando sobre hondas líneas de fractura. Se trató de una acción de consolidación, pues ninguna organización rival tenía cartas fuertes para acercarse y disputar ese electorado (PANBOL podía intentar acercarse, por la candidatura y la retórica orientadas a los grupos populares, pero carecía de los otros factores de éxito para una campaña). Por otro lado, el perfil y el discurso atemperados de Arce pretendían recuperar los estratos populares ascendentes y sectores de clase media, situándose como garante del desarrollo económico.

En el campo opuesto, la resistencia al retorno del MAS al poder definía una línea homogénea. La singularidad de cada candidatura se orientaba menos a destacar propuestas que a la aspiración de constituirse en el referente para concentrar el "voto útil", en la medida en que la base social y política de ese electorado, antes que la identificación positiva con un líder o una organización, se asume negativamente como contraria al MAS y a Morales.

Ese antagonismo dio la tónica, aunque con cambios con respecto a 2019. En esa oportunidad, CC atacó al gobierno de Morales de manera lateral, aceptando elementos positivos en la gestión –a los cuales daría continuidad– y rechazando la pretensión de la reelección. En 2020, las campañas dejaron de lado esas concesiones y cuestionaron

de manera directa el balance del MAS. Concentraron los ataques en el área económica –cuyo principal exponente era Arce–, presentado como el despilfarro de la mayor bonanza de la historia, con magras realizaciones en educación, salud, diversificación económica y numerosos escándalos de corrupción. Asimismo, insistieron en el carácter autoritario del período y de la figura de Morales.

Más allá de la retórica común, presentada con matices de acuerdo con las estrategias particulares de posicionamiento, las candidaturas se atacaron entre sí, para alcanzar el segundo lugar y encadenar la ansiada dinámica del voto útil que, de manera natural, debería ampliar la brecha con los relegados en la carrera.

En ese marco, cada campaña valoró su candidato y restó méritos a sus contrincantes. CC destacó la lucha de Mesa contra el MAS en 2019 y, de manera discreta, planteó una propuesta que aceptaba la dimensión inclusiva de la fase del MAS para conservar así la franja de exvotantes de ese partido; al mismo tiempo, objetó la candidatura de Áñez por privilegiar sus intereses en lugar de encargarse de la transición. El gobierno, por su parte, presentó la incipiente gestión de Áñez como una ruptura con el período del MAS y como la aparición de un rostro nuevo en política; en tanto que denostó a Mesa por una actitud timorata hacia el MAS. Creemos exaltó el coraje de Luis Fernando Camacho en las jornadas de octubre y noviembre de 2019, completado con alusiones y referencias de corte religioso conservador; denunció que Mesa y Áñez representaban a sectores tradicionales de la política y no ofrecían garantías para enfrentar con energía al MAS. Las otras candidaturas quedaron confinadas a audiencias menores.

Las encuestas ocuparon un lugar destacado, sobre todo por las indicaciones sobre cuál sería el líder mejor posicionado para encarar al MAS. Convergieron en la descripción de cuatro tendencias. Confirmaron al MAS como favorito, con una ventaja cómoda, por encima de 30% (y cerca de la franja del 40% si se consideraban únicamente las intenciones positivas), gracias a un núcleo consolidado, favorable al partido más allá de cualquier candidato –en este sentido, las encuestas previas a la inscripción de los binomios, con Andrónico Rodríguez como candidato

referencial, igual marcaban la supremacía del MAS–. En otras palabras, las encuestas perfilaron la probabilidad de una victoria del MAS en primera vuelta.

En segundo lugar, mostraron la dispersión de la oposición al MAS, aunque estableciendo tres niveles. En el superior, fluctuando cerca del 20% y con un margen estrecho entre ambos, se situaron Mesa y Áñez, siempre con ventaja para el primero. El segundo nivel correspondió a Camacho, por debajo de 10%, con una fortaleza concentrada en Santa Cruz. El último reunió a los otros candidatos, con promedios por debajo de 3%.

En tercer lugar, un segmento que oscilaba entre el 20 y el 25% no expresaba públicamente su preferencia, a pesar del contexto polarizado –propicio para identificaciones rápidas– y de una elección que había pasado recientemente y de la siguiente que venía también en corto tiempo. Ese grupo fue objeto de muchas especulaciones sobre si constituía un bolsón del MAS o de la oposición, o si se distribuiría de manera próxima a quienes sí manifestaban una inclinación.

Por último, en síntesis, las cifras mostraban, simultáneamente, la fortaleza individual del MAS y un equilibrio con el bloque anti-MAS, aunque disperso en tres candidaturas medianas. Sugirieron que tanto el voto a favor como el voto contra el MAS son sólidos, poco sujetos a vaivenes coyunturales. Sin embargo, el voto opuesto al MAS es volátil en la selección específica de una candidatura, sujeto a la definición estratégica de sus electores, en función a cuál emerge como el mejor posicionado para representarlo. Mesa, Áñez y Camacho pugnaron para perfilarse en el segundo sitio, con el anhelo de concentrar el voto y forzar la segunda vuelta.

## El difícil intermedio de la cuarentena rígida (marzo-junio)

El proceso electoral se interrumpió el 21 de marzo, como consecuencia de la cuarentena rígida decretada por el gobierno. A partir de ese momento, la vida pública, disminuida por esa medida, giró

alrededor de la salud, la economía y la elección. El gobierno asumió el papel protagónico, convirtiéndose en el actor casi exclusivo, en el campo de la salud pública, el funcionamiento social y las respuestas económicas.

La cuarentena, prevista inicialmente hasta el 15 de abril, se prorrogó varias veces, las primeras de forma completa y las siguientes de manera segmentada y modulada, por municipios. La modalidad rígida incluyó a las capitales departamentales hasta principios de junio de 2020.

El gobierno manejó las principales decisiones de salud pública, que incluían la respuesta del sistema público y privado para efectuar controles (test), atender los casos sospechosos y confirmados de infección por el Covid-19, informar sobre la evolución estadística de la pandemia, al mismo tiempo que buscaba equipar a los centros médicos para atender el flujo de pacientes. Impuso la línea a las instancias departamentales y municipales en una dinámica no exenta de fricciones por disputas de competencias y atribuciones.

El manejo complejo y accidentado se ilustró con el paso de tres ministros por la cartera de Salud durante la cuarentena y, sobre todo, por el escándalo de la adquisición con sobreprecio de 170 respiradores, que provocó un quiebre en la percepción del gobierno y fragilizó la gestión, con llamados cada vez más incisivos para que Áñez renuncie a su candidatura.

En un segundo ámbito, el gobierno buscó ordenar el funcionamiento de la sociedad, dada la suspensión de la gran mayoría de las actividades públicas y privadas. Fijó las modalidades de circulación de las personas (días y horarios, edades, etc.). Estableció criterios para el retorno de bolivianos al país durante la cuarentena, lo que ocasionó complicaciones y protestas en la frontera con Chile. Definió las características según las cuales funcionarían las labores presenciales permitidas, básicamente restringidas al aprovisionamiento de alimentos y remedios, y a la banca. Si la suspensión de las clases en todos los niveles se consideró inevitable, la clausura del año escolar al inicio del segundo semestre recibió una crítica generalizada.

La línea gubernamental confrontó la resistencia de los sectores informales, que requieren una presencia cotidiana en el mercado, por la ausencia de remuneraciones fijas y redes institucionales de protección. A medida que se prorrogaba la cuarentena, en varios puntos del país, protestas exigieron el final del confinamiento, el retorno a las actividades ordinarias y la definición inmediata de la fecha de la elección. Los pedidos se tiñeron de coloración política por la cercanía de los grupos movilizados con el MAS, lo que sirvió al gobierno para acusar a ese partido de afanes desestabilizadores.

En paralelo, la administración de Áñez dictó las reglas del juego económico, bajo el principio del alivio de las dificultades. Articuló cuatro líneas presentadas de manera progresiva. Aplicó subsidios a los servicios básicos, unos específicos para los grupos de menores recursos, otros más generales, y prohibió cortarlos en caso de incumplimiento de pago –en particular, la luz, el agua e internet–. Facilitó el acceso de las empresas a créditos, en especial para cubrir las planillas salariales. Difirió el pago de obligaciones, por ejemplo, fiscales. La última medida –la más importante y la de mayor controversia política– consistió en la distribución de bonos, sobre todo para los sectores de menores ingresos (identificados por ciertas características: hijos en la educación pública, beneficiarios del bono Juana Azurduy, etc.). Poco a poco, extendió el universo de los beneficiarios.

Al inicio, la oposición optó por una actitud cautelosa. Los candidatos emitieron pocos pronunciamientos, más en tono de recomendaciones o exigencias de clarificación de ciertas medidas o en el uso de los recursos, que de críticas al manejo de la crisis. Se forjó un acuerdo implícito para no abordar cuestiones políticas y, menos aún, electorales, lo que se sintonizaba con el ánimo social, centrado en la emergencia sanitaria.

El consenso se fisuró progresivamente. Aumentaron el escepticismo y las críticas, muchas reprochando la motivación electoral en la acción gubernamental. Se cuestionó la escasez de pruebas, lo que implicaba el subregistro de los contagios. Se puso en tela de juicio la justificación de algunos de los bonos, considerados más

políticos que económicos. Se reprochó la masiva publicidad gubernamental, estimando que excedía lo necesario para informar sobre las medidas contra la pandemia. Sin embargo, fue la corrupción en la compra de los respiradores lo que rompió la contención. El gobierno quedó asediado por las fuerzas de oposición y seriamente cuestionado, incluso por los grupos medios urbanos que inicialmente respaldaron sus acciones.

## La recta final de la campaña y el reordenamiento de las candidaturas (junio-octubre)

Al término de la cuarentena rígida, el país buscó el progresivo reacomodo a las condiciones de normalidad. Ciertos sectores la alcanzaron de manera casi completa, como la administración pública, la banca o, a su modo, el comercio informal. Otros debieron efectuar numerosos ajustes y atenerse a limitaciones para reanudar sus labores, como la restauración o la construcción. En algunos campos, el cierre fue casi completo y el impacto demoledor, como en el turismo o los espectáculos culturales y deportivos.

El balance general fue una recesión severa (-8%), acompasada con el mayor desplome de la economía latinoamericana y mundial en un siglo. En 2020, la economía mundial se contrajo en un 3%, y la pobreza mundial aumentó por primera vez en una generación (Banco Mundial, 2022: 1). La incertidumbre se generalizó y el desempleo aumentó. La situación de los sectores vulnerables se degradó; grupos que habían accedido recientemente a los estratos medios sintieron la amenaza del retroceso; el sector formal y empresarial quedó atenazado entre la obligación de cubrir las planillas y una actividad reducida, a veces a niveles mínimos (Bárcena, 2021: 62-87).

La cohesión y la solidaridad sociales, la buena voluntad hacia las medidas de las autoridades, visibles al inicio de la pandemia, se transformaron en pesimismo. La impresión de que Bolivia iba por mal camino se duplicó entre noviembre de 2019 y agosto de 2020

(de 32% a 64%) y la sensación de crisis económica fuerte trepó de 23% a 58%.[6] Este nuevo ambiente tuvo evidentes consecuencias sobre el ánimo del electorado.

El oficialismo encajó el mayor golpe. Asumió el protagonismo al inicio de la pandemia, pasó a la primera línea de la salud, la economía, los asuntos sociales, y cuando convergieron la escalada de contagios, el deterioro económico y las denuncias de corrupción se cuestionaron las aptitudes de Áñez. De diciembre 2019 a octubre de 2020, la evaluación negativa de la gestión de Áñez subió de 22% a 50%; entretanto que la positiva bajó de 41% a 28%. Según el Latinobarómetro, la aprobación gubernamental de Áñez fue la más baja registrada en el país durante las primeras décadas del siglo XXI (Latinobarómetro, 2022: 48). En general, la pandemia debilitó la popularidad de los mandatarios latinoamericanos (Barbieri *et al.*, 2021; Sosa-Villagarcía y Hurtado, 2021: 71-91). En el caso boliviano, tuvo un impacto duradero pues Áñez carecía de un zócalo de apoyo firme, construido por la legitimidad electoral y por una gestión capaz de exhibir resultados previos.

En esas condiciones, su candidatura se desacopló de la competencia con Mesa por el segundo lugar. La brecha se acrecentó, no tanto por un avance de su competidor como por su propia caída y por la remontada de Camacho. En los círculos contrarios al MAS, la presión se intensificó para que la presidenta decline su candidatura y se genere, aunque sea en la recta final, la dinámica del voto útil y la unificación de ese electorado alrededor de la fuerza mejor ubicada.

A un mes de los comicios, Áñez se retiró de la contienda (17 de septiembre). Las estructuras que la sostuvieron tendieron a respaldar a Mesa, de manera explícita o implícita; ese apoyo incluso se dio desde Demócratas, inquietos ante la consolidación de Camacho en Santa Cruz, bastión compartido por ambas organizaciones.

6 Los datos que se citan en esta sección corresponden a las encuestas realizadas para el periódico *Página Siete*. Agradezco a Raúl Garáfulic Lehm, presidente del directorio del referido periódico, por haber compartido cuadros estadísticos no publicados.

La insistencia para el repliegue de otros candidatos surtió efecto. Se apartaron de la carrera ADN (7 de octubre), a pesar de la protesta de la candidata presidencial, y Jorge Quiroga (12 de octubre). La motivación fue doble: atender esa exigencia de la base de la oposición al MAS y preservar la personalidad jurídica de las organizaciones, amenazada por la alta probabilidad de no alcanzar la barrera mínima del 3% de los votos.

Esta ola dominó la recta final de la campaña: generó ilusión en las filas opuestas al MAS y preocupación en esta organización, que se canalizó, en parte, en un ataque redoblado contra sus adversarios y también en un cuestionamiento a la confiabilidad del proceso electoral. El reconocimiento del resultado se convirtió en un tema de inquietud.

Sin embargo, el reajuste en el electorado opositor no fue de la misma magnitud. La candidatura oficialista se había confinado paulatinamente en las tierras bajas y las encuestas mostraron que, si bien una franja se sumó a Mesa, como la opción más fuerte frente al MAS, otra privilegió la identidad regional y una postura más aguerrida frente a esa organización.

En efecto, Camacho mantuvo su postulación, beneficiado con un trasvase importante de los simpatizantes de Áñez. Se afianzó en el tercer lugar. Con un rechazo tajante al MAS y una fuerte y emotiva coloración regional –ausente en la candidatura de Ortiz en 2019–, procuró evitar que la succión del voto útil le juegue en contra.

La campaña de Mesa procuró repetir el esquema de los comicios precedentes. Apostó a la segunda vuelta gracias al voto útil, la cual parecía perfilarse con la salida de Áñez, Quiroga y Bayá. Si bien era el candidato que mostraba más apertura hacia el balance del MAS, subió el tono contra Morales –cuya imagen se erosionó a raíz de las denuncias de estupro y los resultados de las tres gestiones de gobierno–, así como también contra ese partido, cuestionado por los bloqueos de carreteras en agosto.

Por su parte, el MAS aprovechó el deterioro de la imagen de Áñez. Partiendo de una crisis sanitaria y económica de características inéditas, contrastó el recuerdo de una gestión asociada con la estabilidad, el crecimiento y el papel activo del Estado, como una

promesa de regreso a la prosperidad (en vísperas de la elección de 2019, un 39% consideraba mala o muy mala la situación económica familiar, contra el 12% en septiembre de 2019). Asimismo, insistió en la revalorización del mundo popular e indígena que habría sido humillado por el gobierno transitorio, enrostrado en múltiples ocasiones de racista, y denunció reiteradamente las "masacres" de Senkata y Sacaba. En esa línea, utilizó la retórica del autoritarismo gubernamental para reivindicar la bandera de la democracia, que había sido ganada por la oposición tras el referéndum de 2016. En otras palabras, el MAS procuró rearmarse como una fuerza popular, contrapuesta a las elites y al imperialismo, democrática y con logros de gestión.

El MAS excedió el cuestionamiento a la gestión de Áñez. Descalificó en bloque a sus contrincantes. Englobó a Mesa y Camacho como representantes de una misma corriente política e ideológica, conservadora y de derecha, neoliberal y contraria al movimiento popular.

En esa campaña, la figura de Morales permaneció como la más polarizadora. El MAS la usó de manera ambigua: como referente con la base dura del electorado, pero en segundo plano en el proselitismo urbano. Con el núcleo consolidado, se movió hacia el centro, recurriendo a la imagen técnica y moderada de Arce y dando señales de renovación, para superar así los lastres de la campaña de 2019. Por el contrario, sus adversarios denunciaron que Morales continuaba siendo el maestro del juego en el MAS para que el rechazo al expresidente afectara al binomio.

En síntesis, la campaña prolongó el enfrentamiento dominante desde principios del siglo XXI: el choque entre el MAS y el bloque contrario a este partido. Los reacomodos de las candidaturas no alteraron esa pauta, más bien la ratificaron como el eje central.

Sin embargo, hubo novedades. Por un lado, perdió relevancia la variable religiosa que en 2019 influyó en el comportamiento electoral. Si bien es cierto que Chi estuvo otra vez en la papeleta, en 2020 sus declaraciones polémicas no redituaron la misma notoriedad y sus posturas de tinte homofóbico recibieron escasa atención. Por otro lado, Camacho consiguió una adhesión de raigambre

regional, una movilización basada en la identidad. Esa fórmula, históricamente exitosa para las reivindicaciones regionales, como las regalías o la autonomía departamental, se manifestó con nitidez en las elecciones departamentales, como ilustraron las tres victorias consecutivas de Rubén Costas a la Gobernación de Santa Cruz (2005-2015). Empero, esta tendencia no había conseguido trascender a la arena nacional. De la mano de Camacho, un sector del electorado cruceño privilegió la afirmación de la identidad local en el escenario nacional por sobre las consideraciones de política general (apuntalar el voto útil para generar una segunda vuelta contra el MAS; tendencia que redujo, en gran medida, el resultado de Ortiz en 2019).

En el contexto de esa polarización, con temores en la sociedad de que un proceso electoral tan signado por la tensión desemboque nuevamente en una crisis, el país acudió a votar el domingo 18 de octubre de 2020.

IV

# Los resultados sorpresivos y habituales de la elección presidencial 2020

## Introducción

La jornada electoral del 18 de octubre transcurrió en un ambiente de tranquilidad, seguido de una etapa postelectoral del mismo signo, lejos de la ansiedad y los temores previos a la celebración de los comicios. A diferencia de 2019, la aceptación de los resultados fue rápida, tanto interna como externamente. En el país, los candidatos vencidos, en particular Mesa, se expresaron sin ambigüedades y Áñez también admitió el triunfo del MAS. Las dos plataformas de observación de la sociedad civil, Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) y Observa Bolivia, valoraron positivamente el proceso y la jornada electorales (Observa Bolivia, 2020).

La comunidad internacional reaccionó en el mismo tono, en sintonía con las delegaciones de observadores, que dieron el visto bueno al proceso (Velasco; Hummel; Handlin; Smith, 2021: 73). Los informes de la OEA, UE, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y el Centro Carter coincidieron en el balance positivo. La OEA concluyó: "Bolivia tiene una autoridad independiente y tuvo una contienda más equitativa, lo que dio como resultado una jornada electoral exitosa" (Organización de los Estados Americanos, 2021: 86), en tanto que la UE señaló: "Las elecciones generales repetidas del 18 de octubre de 2020 en Bolivia fueron creíbles y reflejaron la libre voluntad popular (…) El TSE

gozó, en general, de la confianza de los actores políticos y administró las elecciones con imparcialidad, profesionalismo y eficiencia" (Unión Europea, 2021: 88). El Centro Carter indicó que "durante la jornada electoral, bien organizada y libre de incidentes, predominó un clima de civismo que se prolongó durante los conteos en las mesas (…) El TSE ha logrado consolidar su independencia y ha mantenido un criterio de imparcialidad política y apego a la legalidad" (Centro Carter, 2021: 92). UNIORE apuntó que el Órgano Electoral "logró en un periodo reducido y a pesar de la pandemia, organizar los comicios en condiciones que garantizaron la certeza y la transparencia y en las que se fortaleció la confianza ciudadana" (UNIORE, 2021: 96) (los informes o sus resúmenes se encuentran compilados en: Tribunal Supremo Electoral, 2021).

El proceso confirmó la vocación participativa de la ciudadanía y no se concretaron los vaticinios de una asistencia mermada de la población, como consecuencia de la pandemia. El porcentaje de participación de un 88.4% se convirtió en una de las mejores marcas históricas del país y una de las más altas de América Latina en el siglo XXI.

**Cuadro 1**
**Confianza en el Tribunal Supremo Electoral, gestión 2020**

| Confianza | Junio | Agosto | Octubre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|
| Muy alta | 6% | 4% | 8% | 4% |
| Alta | 39% | 35% | 32% | 51% |
| Regular | 29% | 41% | 41% | 32% |
| Baja | 19% | 14% | 15% | 9% |
| Muy baja | 7% | 6% | 4% | 3% |

Fuente: Encuestas Delphi de la Fundación Friedrich Ebert (disponible en: www.bolivia.fes.de).

El desenlace pacífico e institucional mejoró el posicionamiento internacional de la democracia boliviana en 2020, gravemente decaído tras el fallido proceso del año previo, si bien no disipó las fragilidades de un progresivo deterioro (IDEA Internacional,

2021: 6). En el mismo sentido, la revista británica *The Economist* destacó a Bolivia entre las cinco naciones admirables de ese año. De manera interna, sin disipar la densa polarización, se revigorizó el tejido institucional, con un efecto particular sobre la confianza en el organismo electoral, como ilustra el cuadro 1.

Si el meollo político de la elección 2020 tuviera que simplificarse al extremo se reduciría a si el MAS debía o no regresar al gobierno que ejerció ininterrumpidamente entre 2006-2019. La campaña giró alrededor de ese dilema y debate. En cierto sentido, la elección resolvió la disputa.

En efecto, el MAS triunfó en primera vuelta con mayoría absoluta (55.1%; 52.3%), dejando en segundo lugar a CC y en tercero a Creemos. Inesperado fue que el binomio Arce-Choquehuanca, del MAS, superara el umbral de la mayoría absoluta, porque, por lo demás, como sucedía desde hace tres lustros, se anticipaba que la organización ocuparía el primer puesto e incluso que podía vencer en la primera ronda. También fue sorpresiva la distancia con respecto a la segunda dupla, pues se preveía un margen más ajustado.

CC, de Mesa-Pedraza, obtuvo algo más de la mitad de los votos de los vencedores y permaneció en el rango del apoyo obtenido por la segunda fuerza desde los comicios de 2005 (28.8%; 27.3%). Novedoso con respecto a anteriores contiendas, fue que la tercera candidatura, Creemos, de Camacho-Pumari, rebasara el décimo de votos (14%; 13.2%).

Cerraron los últimos puestos las candidaturas del FPV, dirigida por Chi-Pinto (1.5%; 1.4%), y de PANBOL, de Mamani-Nina (0.5%; 0.4%). Asimismo, se contabilizaron 1.4% de votos blancos y 3.6% de votos nulos.

En este capítulo se hace un análisis geográfico y sociopolítico de los resultados, procurando comprender los elementos específicos de la elección 2020 y, a la vez, poniéndolos en perspectiva histórica para sopesar mejor el juego de las variables estructurales y coyunturales. Se analiza, en primera instancia, la evolución de la distribución de fuerzas desde principios del siglo XXI; a continuación, la participación, y luego se plantea un estudio de los resultados de las principales candidaturas, en el orden que les asignó el electorado.

## La distribución general de las preferencias

El binomio Arce-Choquehuanca hilvanó la cuarta victoria consecutiva del MAS en comicios generales a lo largo de tres lustros. Este desempeño se aproxima a los de los partidos más exitosos de la región. En el plano nacional y con una perspectiva de mediano plazo, este triunfo se inscribe en el promedio del período 2005 y 2020 (56.2%). El dato muestra una erosión limitada del apoyo e implica una recuperación con respecto al porcentaje de Morales en 2019.

Por su parte, CC, la principal fuerza contendora en 2020, consiguió el 28.9%, casi el promedio de la oposición para la etapa 2005-2020, que se sitúa en 28.8%. Como tercer competidor, Creemos estableció la mejor performance desde 2005.

El gráfico 1 pone en evidencia la estabilidad de las preferencias electorales bolivianas.

La estabilidad de las preferencias se prolonga en su distribución geográfica, social y política. La pauta territorial, en su versión estadística, se refleja en el cuadro 2.

El MAS consiguió la victoria en la mayoría de los municipios y se impuso en seis departamentos: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Pando. En algunas regiones, en particular rurales, sus bastiones originales y zonas de antigua inclinación por partidos de izquierda o movimientos de protesta, venció de manera abrumadora. También avanzó en las tierras bajas, si bien, allí, varios de sus triunfos se facilitaron por la división de los votos entre los partidos antagonistas.

Comparativamente, CC consiguió un número pequeño de triunfos, pero como cinco correspondieron a capitales departamentales, densamente pobladas, se afianzó como segunda fuerza a nivel nacional, con una marcada presencia urbana. Logró dos victorias departamentales, en Tarija y Beni.

Por su parte, Creemos se erigió en la primera fuerza en el departamento de Santa Cruz, gracias al éxito en el área metropolitana, los valles y la región chiquitana. Su votación estuvo altamente regionalizada. Salvo algunos municipios de Beni y Pando, sus guarismos fueron débiles en el resto del país.

**Cuadro 2**
**Elecciones 2020: datos oficiales por organización política y departamento**

| Partido | Chuquiscaca | La Paz | Cochabamba | Oruro | Potosí | Tarija | Santa Cruz | Beni | Pando | Exterior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS | 148.452 | 1.162.949 | 773.386 | 186.452 | 211.571 | 124.586 | 576.567 | 71.957 | 25.883 | 112.249 | **3.394.052** |
| CC | 139.176 | 486.139 | 371.826 | 97.812 | 131.635 | 150.405 | 275.868 | 81.182 | 14.635 | 27.275 | **1.775.963** |
| Creemos | 6.791 | 12.319 | 13.356 | 2.746 | 10.248 | 16.023 | 717.742 | 49.128 | 14.817 | 19.016 | **862.186** |
| FPV | 6.178 | 28.763 | 11.867 | 6.301 | 9.408 | 6.994 | 18.037 | 4.031 | 1.025 | 2.651 | **95.255** |
| PANBOL | 1.996 | 11.032 | 3.216 | 2.940 | 4.364 | 1.342 | 4.137 | 963 | 157 | 1.618 | **31.795** |
| Válidos | 302.593 | 1.701.202 | 1.173.651 | 296.251 | 367.226 | 299.350 | 1.592.351 | 207.261 | 56.517 | 162.809 | **6.159.211** |
| Blancos | 6.809 | 21.609 | 10.816 | 4.475 | 12.932 | 6.871 | 19.980 | 5.702 | 1.102 | 1.123 | **91.419** |
| Nulos | 12.421 | 49.832 | 30.079 | 9.258 | 18.753 | 15.388 | 70.742 | 18.116 | 2.160 | 6.617 | **233.378** |
| Emitidos | 321.823 | 1.772.643 | 1.214.546 | 309.984 | 398.911 | 321.609 | 1.683.073 | 231.079 | 59.779 | 170.549 | **6.484.008** |
| Inscritos | 368.623 | 1.923.305 | 1.340.548 | 339.950 | 453.287 | 377.846 | 1.886.387 | 270.213 | 72.136 | 301.631 | **7.332.926** |

Fuente: Elaboración propia con información del OEP.

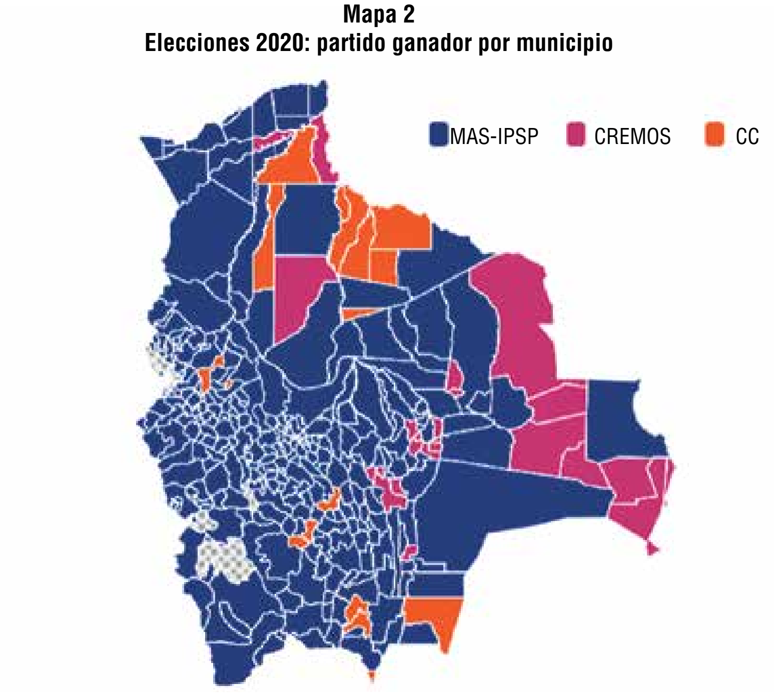
**Gráfico 1**
**Votación del MAS y de las principales fuerzas de oposición, 2002-2020**

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
2002 2005 2009 2014 2019 2020
MAS 1ª Oposición 2ª Oposición

Fuente: Elaboración propia con información del OEP.

El mapa 2 da cuenta de esta distribución territorial de las principales fuerzas contendientes.

**Mapa 2**
**Elecciones 2020: partido ganador por municipio**

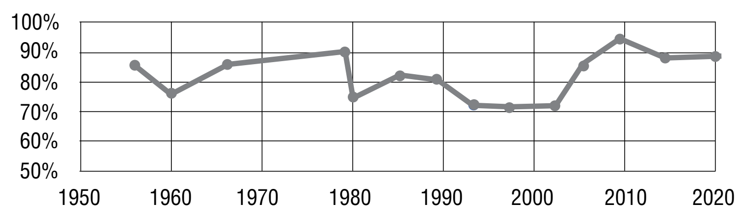



Fuente: Elaborado por Jorge Hevia con información del OEP.

## Una participación muy alta en una elección polarizada y bajo la sombra de la pandemia

La participación electoral de los comicios de 2020, de 88.4%, constituye un resultado excepcionalmente elevado, cualquiera sea la medida de comparación. En efecto, se sitúa ocho puntos por encima del promedio, de 80.5%, desde la instauración del primer gobierno democrático, en 1982. Constituye el tercer mejor registro desde la aprobación del sufragio universal, superado sólo por los datos de 1979 y 2009, como se observa en el gráfico 2.

**Gráfico 2**
**Participación en elecciones presidenciales en Bolivia, 1956-2020**




Fuente: Romero Ballivián, 2016; y con datos del OEP.

El porcentaje consolidó a Bolivia en la zona privilegiada de la participación electoral en América Latina, compartida, en el período 1985-2021, con Brasil, Argentina y Uruguay, país que domina el pelotón (Romero Ballivián, 2021: 50).

A primera vista, las perspectivas de participación no eran alentadoras. Pesaba el impacto de la pandemia, con su doble e indisociable rostro, sanitario y social. En efecto, las cifras de contagios y de fallecimientos de la (primera) ola del coronavirus mostraron un ascenso desde junio, el golpe más duro entre julio y agosto, y recién una progresiva caída desde septiembre.

Más allá de las estadísticas sanitarias, cuenta la reacción de la sociedad, que da sentido e interpreta el fenómeno. El temor se instaló pronto –como probaron los intentos de bloquear el paso de las ambulancias que transportaban a los primeros enfermos–. El confinamiento lo acentuó pues volvió los espacios públicos y

la interacción social en lugares y momentos de potencial peligro. Se sumaron varias campañas políticas, sociales y regionales que tomaron la elección como blanco, presentándola como una actividad de muy alto riesgo por la movilización simultánea de millones de personas.

De acuerdo con las encuestas, la predisposición para acudir a votar o para asumir la función de jurado –también presentada como extremadamente arriesgada– era significativa pero inferior a los indicadores habituales, y con una diferencia relevante entre personas con inclinación contraria al MAS (más reacias) y aquellas que simpatizaban con ese partido, cuyos líderes no mostraron la misma preocupación, en una actitud que, sin duda, se fue retroalimentando con su base social y política. La comparación internacional tampoco invitaba a una visión optimista: el único precedente regional –la presidencial en República Dominicana– encajaba un descenso en la participación de casi 15 puntos con respecto a la elección anterior.

El humor colectivo se modificó progresivamente en septiembre, a medida que la cantidad de contagios disminuyó, el ritmo de la vida colectiva retomaba pautas de normalidad, los partidos dejaron de cuestionar la fecha y se concentraron en el proselitismo. Mejoraron las condiciones para la asistencia, sin certeza de que el nuevo ambiente apuntalara una asistencia sólida. Bolivia pertenece a la categoría de países de voto obligatorio. Empero, en 2020, las disposiciones sobre esta obligatoriedad se aflojaron: mediante resoluciones, el TSE extendió la no exigencia del certificado de sufragio a los mayores de 60 años y brindó facilidades para que una persona enferma se abstuviera sin inconveniente.

En ese sentido, la tasa de 88.4% de participación fue una sorpresa. Disipados los peores temores con respecto al coronavirus, la gente acudió a sufragar y tendió a ceñirse a los protocolos aprobados por el organismo electoral, que retomaron prácticas sociales ya familiares para la gente (uso de barbijo, distancia social, aplicación de alcohol en gel, horario segmentado de votación, de acuerdo con el último número de la cédula, etc.).

Igualmente, jugó un papel importante el grado de actualización y saneamiento del padrón. Hubo una consistente inclusión juvenil, con 250.782 nuevos registros a lo largo de 2020. La singularidad boliviana fue que el flujo de ingreso al padrón se mantuvo activo pues se extendió con la fecha de la votación, lo que permitió integrar sucesivamente a quienes cumplieron 18 años el 3 de mayo, el 6 de septiembre y, finalmente, el 18 de octubre (otros países aplicaron, con rigor, la preclusión y la postergación no dio lugar a la reapertura del registro). Lo mismo sucedió con las actualizaciones de los domicilios, a nivel departamental y con los regresos del exterior por la pandemia, con un total de 93.854 registros. Así, los desplazamientos durante la pandemia no recortaron la oportunidad de votar. En tercer lugar, la depuración de fallecidos se efectuó mediante el cruce de la base de datos del padrón con la del registro civil y, además, con las de otras instituciones. Se dieron de baja, por fallecimiento, 73.587 registros, cuando el promedio anual de defunciones ronda las 50.000. Por último, se modificó el criterio para la inhabilitación de no votantes; en lugar de considerar las dos elecciones del mismo tipo (que hubieran sido las presidenciales de 2014 y 2009), se utilizó el de los dos últimos procesos electorales (el referéndum 2016 y las judiciales 2017). Esta medida permitió un retiro más eficaz de registros de personas cuyo fallecimiento no se reportó a las instancias oficiales, con especial incidencia en el exterior. Las inhabilitaciones sumaron, al final, 187.166, después del período abierto para solicitar la rehabilitación. El padrón llegó con un elevado grado de actualización, con 7.332.926 inscritos, un incremento de 1% con respecto a 2019, y una fuerte capacidad de inclusión de la población adulta (Ruiz, 2021: 130).

Más allá de los factores jurídicos y técnicos, la explicación central radica en la polarización y el antagonismo sociopolíticos, asentados desde principios del siglo XXI, y que exceden, con creces, la competencia entre partidos. La rivalidad entre el MAS y las organizaciones que le son contrarias estructura la política de manera estable. La elección de 2019 constituyó el punto de llegada de una tensión acumulada durante años, pero dejó irresuelta la cuestión

gubernamental: la elección se anuló en medio de la incertidumbre sobre la auténtica correlación de fuerzas; Morales renunció a la presidencia; el gobierno de Áñez tenía un carácter provisorio.

Los comicios de 2020 fueron el terreno propicio para una nueva disputa, sentida por amplias franjas de ambos lados del espectro político como una contienda decisiva para definir el destino de Bolivia. A un lado y al otro, el impulso para asistir a votar fue significativo. La polarización suele tener efectos complicados para la democracia (Dworkin, 2008; Flores, 2009; Svolik, 2019: 20-32), pero a menudo constituye un estímulo potente para la participación electoral.

La participación fue muy alta en todo el territorio nacional, con variantes regionales ilustradas en el mapa 3.

**Mapa 3**
**Elecciones 2020: participación electoral por municipio**

55.58% 85.8% 91.4% 95.62%

Fuente: Elaborado por Jorge Hevia con información del OEP.

La concurrencia electoral más alta se registró en la meseta altiplánica y los valles andinos. Sobrepasó el 95% en Laja, Ancoraimes, La Rivera, Pucarani o Combaya. Sin alcanzar semejante guarismo, pero por encima de 90% se contó más de un centenar de municipios, la mayoría en el altiplano y los valles de La Paz, Oruro y Potosí, el trópico de Cochabamba, las áreas de colonización agrícola. Las ciudades siguieron el mismo patrón, El Alto en la tabla superior (93.6%) y Oruro como la primera capital (91.7%).

La participación tuvo, por lo tanto, un cariz rural, de áreas de pequeña propiedad agrícola y zonas mineras, con niveles de vida, educación, salud e ingresos relativamente bajos, con marcada identidad étnica.

La menor participación se extendió desde el tropical norte paceño, la Amazonía, las llanuras de Beni, la Chiquitanía hasta el Chaco, e incluyó la frontera occidental de Oruro. Pocos municipios mostraron una asistencia inferior a 80% (entre ellos, Baures, Bella Flor, Huacaya o Loreto). Varios son municipios rurales, periféricos, pero con tradiciones culturales menos vinculadas con la reivindicación indígena. Inscritas en ese espacio, las capitales que no alcanzaron el promedio nacional fueron Cobija (83.4%), Trinidad (85.7%) y Tarija (87%).

Esta geografía posee una significativa resonancia política. Las áreas de mayor participación corresponden a bastiones del MAS. Esta pauta territorial emergió a principios de siglo, con la capacidad movilizadora de la candidatura de Morales en las zonas con fuerte identidad cultural étnica. La politización de estas identidades aún preserva su potencial participativo. En el ámbito rural de lengua aymara y quechua la renuncia de Morales se interpretó como la consumación de un golpe de Estado y la defenestración de un gobierno con el cual existía identificación, en tanto que casi todas las facetas del gobierno de Áñez fueron severamente criticadas. La masiva asistencia a las urnas buscó restablecer al MAS en el gobierno. La correlación municipal entre la votación del MAS y la participación alcanzó un 0.40.[7]

---

7 De manera sucinta, puede indicarse que la correlación se desplaza entre -1 y 1. Una correlación positiva indica que dos variables evolucionan en el mismo sentido y la asociación es tanto más fuerte cuando se aproxima a 1;

La atonía de las tierras bajas, visible desde el derrumbe del sistema de partidos tradicional, articulado alrededor del MNR y ADN, continuó. Pesó la decepción con el primer gobierno post-MAS, que coincidió con una doble crisis sanitaria y económica, y una elevada conflictividad sociopolítica; el desconcierto con la retirada de la candidatura de Áñez, presidenta oriunda de Beni –el departamento acogió favorablemente su presidencia y su postulación–; y un vínculo débil con Mesa, a pesar de haber sido favorecido con la salida de Juntos. Las dudas y el desencanto de los bastiones opositores al MAS se reflejaron en una participación por debajo de la media nacional. La correlación municipal de la participación y la votación de Creemos fue de -0.25 y con CC de -0.33. Pudo añadirse, como factor adicional, que, en algunos de esos municipios, el MAS, que había avanzado posiciones recientemente, generó dudas y su nuevo electorado escogió la abstención.

La participación en el exterior fue menor (56.5%). En los tres países con más inscritos, llegó a 62% (Argentina), 59.4% (España) y 67.1% (Brasil); en Chile, el cuarto país en número de inscritos, la participación fue apenas del 5.6% porque sólo se permitió la votación en Santiago (el único país que prohibió el desarrollo electoral fue Panamá).[8] En varios países hubo incertidumbre casi hasta el final sobre la autorización para la jornada electoral o los votantes confrontaron ciertas restricciones de circulación.

Aunque inferiores a la media nacional, esos porcentajes son notables por su robustez en la perspectiva internacional comparada, más aún si se considera que la tasa de registro es elevada y el voto voluntario. Por el volumen de inscritos en el exterior (4.1% del padrón), Bolivia es uno de los países latinoamericanos donde éstos tienen mayor peso relativo (Instituto Nacional Electoral, 2016: 79-80). Los datos subrayan la dimensión participativa de la cultura política, visible incluso afuera.

---

una correlación negativa indica que dos variables evolucionan en sentido opuesto y con tanta mayor intensidad que se aproxima a -1. Un valor cercano a 0 indica un comportamiento independiente de las variables.

8 Si se excluye a Chile, la participación en el exterior fue de 62.4%. Esta cifra refleja, a cabalidad, la realidad del voto en el exterior en 2020.

## El retorno fortalecido del Movimiento al Socialismo

El triunfo del MAS en 2020 se inscribió en la convergencia de factores estructurales y coyunturales. Los primeros son relevantes pues le otorgan al MAS una base sólida y leal, sujeta a mínimos vaivenes, decisiva para su larga permanencia en el poder con las gestiones de Morales. Incluso sin candidato definido, el MAS encabezaba las encuestas a principios de 2020. Los segundos impulsaron la remontada en la etapa opositora y fueron decisivos para la amplitud de la victoria del binomio Arce-Choquehuanca.

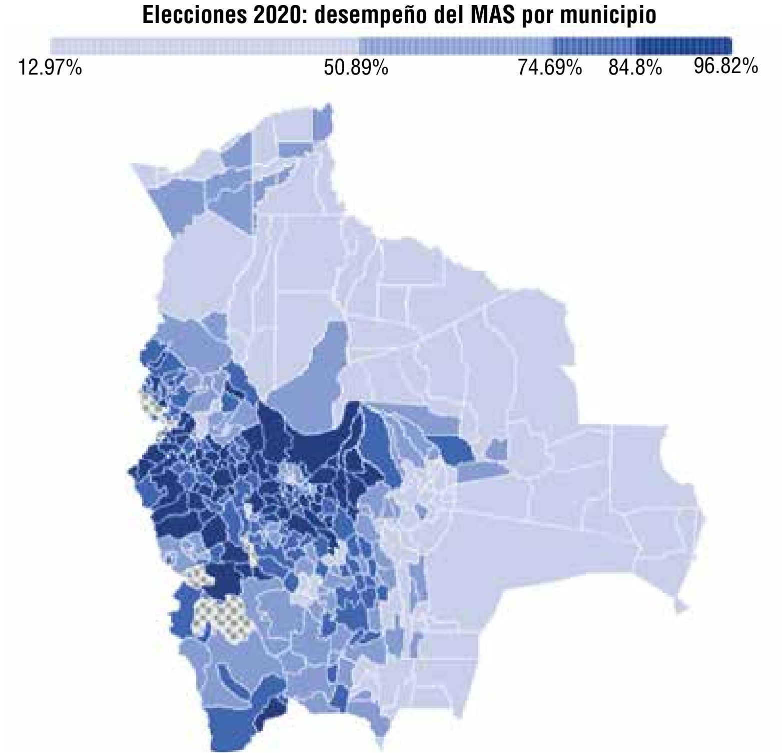
El mapa 4 ilustra la distribución geográfica del respaldo del MAS en los comicios de 2020.

El bastión rural y occidental se compactó y recuperó espacios alejados de la tienda azul durante el referéndum 2016 y la elección presidencial de 2019, en especial en las ciudades. La debilidad permaneció en la frontera oriental, aunque con porcentajes de apoyo importantes. La correlación entre la votación de 2019 y 2020 llegó a 0.88, ciertamente muy alta pero no tanto tratándose de comicios separados por apenas un año.

El primer pilar del triunfo fueron los municipios rurales del occidente y centro, donde el predominio del MAS no tuvo sombra, con porcentajes abrumadores. Alcanzó el pico en Raqaypampa (96.8%) y Entre Ríos-Carrasco (96.4%).[9] En más de una treintena de municipios rebasó el 90% y en aproximadamente el 40% de los municipios tuvo un respaldo superior al 80%. Salvo excepciones, éstos son distritos rurales de tierras altas, del altiplano o valles, dedicados a actividades agrícolas de baja productividad, escasos ingresos, limitado acceso a los servicios de salud, educación, crédito, tecnología, poco o mal integrados a los mercados y circuitos urbanos, con una población con una profunda identificación étnica aymara o quechua y una vida colectiva articulada alrededor de formas comunitarias tradicionales.

9 A partir de esta sección y, salvo mención contraria, los porcentajes de votos se calculan con respecto a los emitidos (válidos, más blancos y nulos) y no sólo a los válidos. Esa base ofrece una perspectiva más exacta y precisa de la voluntad de los electores. Los porcentajes en votos válidos serían superiores en todos los casos.

**Mapa 4**
**Elecciones 2020: desempeño del MAS por municipio**




Fuente: Elaborado por Jorge Hevia con información del OEP.

Se suman, con peculiaridades propias y como máximo centro de apoyo, el trópico cochabambino dedicado al cultivo de coca, corazón histórico del MAS: Villa Tunari (96.4%) o Puerto Villarroel (95.5%). Pertenecen a esta categoría los municipios de densa presencia de colonizadores agrícolas provenientes de tierras altas instalados en Santa Cruz, como San Julián (79.5%) o Cuatro Cañadas (66.8%). Igualmente, con sus propias particularidades, cuando la emigración tiene raíz en las categorías populares de esas regiones, la confianza en el MAS es sólida, como ilustraron los datos en Argentina (84.2%) o Brasil (83.1%).

La hegemonía del MAS no tiene competencia. En esos lugares, ha conseguido representar las aspiraciones y expectativas de la

población, a través de una retórica y símbolos de reivindicación de sectores históricamente excluidos de los espacios de poder, tejiendo una estrecha relación con las organizaciones sociales, abriendo amplios espacios en las listas parlamentarias y en los gobiernos locales, e instaurando políticas sociales acogidas favorablemente –como los bonos y el desarrollo de infraestructura local–.

Además, el apoyo se cohesionó. Con respecto a los porcentajes de Morales en 2019 e incluso a los de 2014, el MAS ganó puntos en sus bastiones. Con respecto a 2019, tuvo margen para progresar en Arampampa (+3.6 puntos), Villa Tunari (+5) o Tacopaya (+9.1), aproximándose a la unanimidad electoral, con porcentajes por encima de 90%. Ante la sensación de amenaza y riesgo, de pérdida de un gobierno percibido como vinculado a sus intereses e identidad, el electorado cerró filas, aún más, alrededor del MAS. En estos bastiones, sus rivales, sin mínimas estructuras organizativas, quedaron reducidos a votaciones anecdóticas. Ese desbalance se palpó en los comicios municipales de 2021: el MAS corrió en solitario en casi una veintena de alcaldías. A modo de ejemplo, en Arque, el MAS logró el 94.7%.

La recuperación más significativa en el segmento de apoyo estructural se dio en el altiplano. En 2019, sin perder predominio, la candidatura de Morales cedió franjas ante el mensaje evangélico, la única variable que desde 2005 abrió brecha en un voto construido en torno a un potente sentido de identidad. En 2020, el MAS rearticuló su base con una campaña dura contra el gobierno de Áñez –y, por extensión, contra todos sus adversarios–, alertando contra el racismo y la discriminación que vendría de los nuevos gobernantes y que pondría en vilo las conquistas indígenas.

Ese discurso reunificó el voto del altiplano donde, un año atrás, Chi introdujo baza; obtuvo ganancias superiores a 20 puntos en municipios como Puerto Acosta (+24.3), Colcha K (+27.6), Achacachi (+29.8), Desaguadero (+31.2), Tacacoma (+36.5) o Carangas (+42.3). El mal desempeño de Chi en 2020 con respecto a su debut benefició principalmente al MAS, como muestra una relevante correlación municipal de -0.72 entre la evolución de la votación del MAS y de Chi entre 2019 y 2020.

En otras palabras, el descenso electoral de Chi favoreció, sobre todo, al MAS. De manera específica, en el altiplano paceño también se benefició con la decisión del Movimiento Tercer Sistema (MTS), dirigido por el gobernador de La Paz, Félix Patzi, de no participar en 2020. Ese partido, escindido del MAS, había pasado en 2019 el umbral del décimo de votos en varios municipios y esos sufragios regresaron al partido matriz.

El MAS avanzó igualmente en las capitales y ciudades intermedias del occidente y centro, decisivas en la derrota en el referéndum 2016 y en la caída electoral y política de Morales en 2019. Desde el punto de vista electoral, ese constituye el principal espacio de la disputa en los comicios desde la consulta de 2016 y es el ámbito donde los elementos coyunturales tuvieron la mayor incidencia.

Con respecto a 2019, el MAS mejoró sus resultados capitalinos en La Paz (+5.9), Cochabamba (+6.9), Sucre (+7.4) y Oruro (+12.9), aunque, a veces, de manera insuficiente para vencer. Su crecimiento rebasó los diez puntos en Sacaba (+11.3), Vinto (+12.4), Viacha (+15.8), El Alto (+21.4) o Challapata (+24.1), y se acompañó de victorias nítidas. Aglutinó al electorado urbano más desfavorecido, a menudo compuesto por las olas más recientes del éxodo rural, con población en los circuitos informales, bajo ingreso y acceso precario a los servicios. Además, apeló al voto de identidad, reagrupado en la oposición al gobierno de Áñez. A modo de ejemplo, en la ciudad de El Alto (74.3%), la papeleta sirvió para canalizar las emociones intensas: "La violencia estatal se vivió en cuerpo propio y con muertos (…) La gente piensa y siente que los viejos grupos de poder son antiaymaras" (Mamani, 2021: 267). Con ese fondo, apabulló en el colegio San Roque (88.8%), en la zona del mismo nombre, o en el colegio 25 de julio en Senkata (83.5%), convertido en un lugar emblemático de la resistencia a la orientación, política, económica y sanitaria de la gestión de Áñez. También recuperó su presencia en sectores populares con movilidad social ascendente y en ciertos segmentos de clases medias, que habían sido el terreno

privilegiado de progreso de la oposición, sin necesariamente ganar, como en el colegio Donoso Torres de Ciudad Satélite (39.1%), donde CC lo superó.

En su recomposición urbana, el MAS jugó la carta de Arce, ministro de perfil técnico y moderado del gabinete de Morales y asociado con el balance económico del período. Esa doble característica le permitió, por un lado, convencer a un segmento que simpatizaba con el MAS pero que desaprobaba el intento de Morales de forzar su permanencia en el poder; por otro lado, en una coyuntura gravemente deteriorada, le permitió prometer la recuperación económica, la estabilidad y el retorno a una etapa juzgada positivamente por la población. La candidatura fue igualmente beneficiada con el rápido desgaste de la imagen de Áñez. El primer cambio de gestión después de la victoria de Morales, en 2006, provocó más desilusión y desencanto que esperanza en las ciudades. El proselitismo del MAS insistió en los contrastes entre su acción gubernamental y la de sus sucesores.

La actuación más floja del MAS se dio en las tierras bajas, en especial en la frontera oriental, los llanos benianos, la Chiquitanía y los valles cruceños. Incluso, quedó en tercer lugar en municipios como Santa Rosa (22.4%), Santa Ana (21.8%) o Postrervalle (12.9%); en otros, ocupó un lejano segundo lugar, como en Portachuelo (13.5%), San Ignacio de Velasco (21.6%), Puerto Suárez (22%) o Magdalena (25.7%). El electorado de esas áreas percibió otra vez al MAS como la expresión de un movimiento indígena de tierras altas, opuesto a sus reivindicaciones regionales; ajeno a sus tradiciones culturales y a su configuración social, con una impronta de monolingüismo español; contrario a su modelo de desarrollo, tanto más que desaparecieron las señales de apertura con sectores influyentes de esas zonas. En la ciudad de Santa Cruz (27.9%) fue perceptible el contraste socioeconómico y la brecha cultural, entre los barrios favorecidos –donde se registró un rendimiento flojo del MAS–, y aquellos que concentran la inmigración proveniente de tierras altas, que le dieron mejores porcentajes.

A contramano del avance general, con relación a 2019, el MAS perdió hasta cerca de diez puntos en alcaldías de las llanuras de Beni, Santa Cruz o la región del Chaco, como Baures (-8.1), Boyuibe (-9.4), Colpa Bélgica (-9.8), Puerto Siles (-10.3) o Exaltación (-11.8). Perdió pie en zonas donde sus porcentajes eran ya modestos. Mientras la polarización cohesionó el voto en sus bastiones, desalentó el apoyo donde su penetración era reciente y frágil. En esos municipios se produjo concomitantemente una participación menor y un fuerte contingente de votos nulos. Ilustra el caso, Exaltación, con un 80.9% de participación y 8.7% de sufragios nulos. Probablemente, parte de los nuevos electores del MAS optaron por esas estrategias de repliegue.

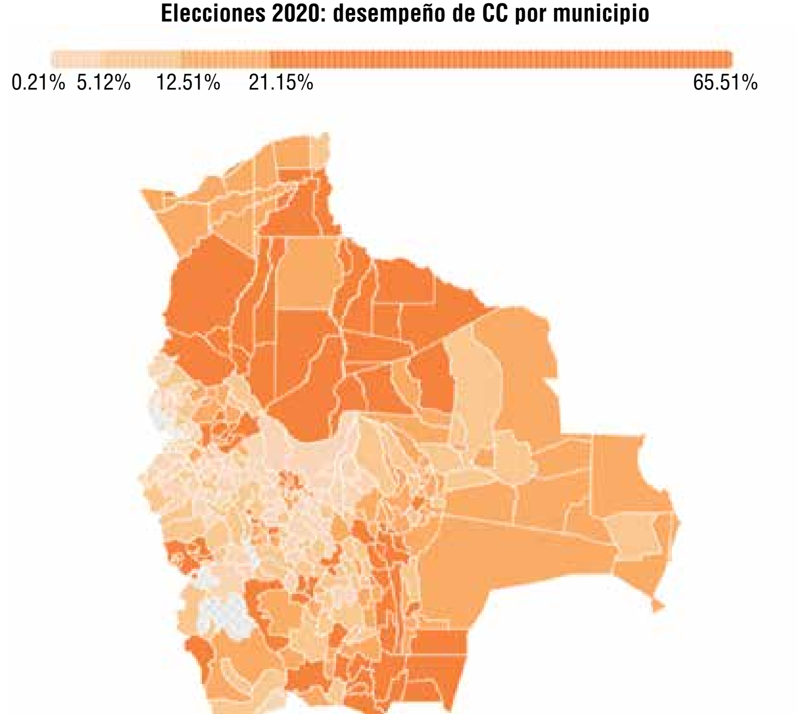
Esas caídas, junto con las ganancias en sus bastiones, acrecentaron la brecha entre sus fortaleza occidental y central, y las áreas de debilidad relativa en el oriente e implicaron una atenuación de la nacionalización de su voto y mostraron una geografía más contrastada.

## Comunidad Ciudadana (CC): el segundo lugar carcomido por los flancos

Al igual que en 2019, CC fue el principal antagonista del MAS. Si en esa contienda puso en jaque la candidatura de Morales y generó un escenario inédito, en 2020 su segundo lugar, con 28.8% de los votos válidos, emparejó el promedio histórico de la oposición en la etapa 2005-2020 (28.9%). Descendió con respecto al resultado de los comicios precedentes, perdiendo caudal electoral a manos del MAS y de Creemos. La correlación de la votación de CC en el nivel municipal entre ambos procesos, 0.73, sugiere las importantes transformaciones geográficas, sociales y políticas que experimentó en el corto lapso de un año.

La votación de Mesa tuvo como puntales las tradicionales áreas de la oposición, en tierras bajas, y un significativo apoyo urbano, en tanto que sus peores resultados se superpusieron a las zonas rurales del occidente y centro (mapa 5).

**Mapa 5**
**Elecciones 2020: desempeño de CC por municipio**




Fuente: Elaborado por Jorge Hevia con información del OEP.

Mesa cosechó el voto estructural y tradicional de la oposición al MAS, centrado en la Amazonía, las provincias benianas, los valles cruceños, el Chaco y el este de Oruro, único espacio rural occidental preservado frente al MAS. Esas regiones rurales o de ciudades intermedias muestran indicadores de desarrollo humano mejores que los prevalecientes en el occidente o centro del país, en especial en el componente educativo; dedicadas, sobre todo, a actividades agroganaderas o forestales; con una población predominantemente monolingüe castellana; escasa tradición de confrontación con el Estado y un papel destacado de las elites locales.

Mesa pasó el listón del tercio, incluso del 40% en algunos municipios amazónicos, benianos, como Puerto Siles (46%), Magdalena (41.9%), Huacaraje (40.8%) y, con frecuencia, se alzó con el triunfo. El respaldo se dirigió menos a CC o a Mesa, cuyos vínculos con esas áreas son más bien tenues; se orientó, sobre todo, a respaldar a la principal figura de la oposición, en una dinámica de voto útil. En ese sentido, Mesa se benefició de manera decisiva con el retiro de la candidatura de Áñez, que le ofreció un trasvase importante de respaldo, aunque matizado por niveles de participación menores al promedio y porcentajes relativamente altos de votos nulos. Igualmente, logró porcentajes altos en el Chaco, como ilustraron Huacareta (30.5%) o Caraparí (36.7%); en los valles cruceños, como Pucará (30.6%) o Vallegrande (30.1%); y en los municipios orientales de Oruro, como Cruz de Machacamarca (37.3%) y Escara (33.3%), únicos enclaves del altiplano con una tendencia históricamente conservadora, vocación comercial y vínculos con la economía y la sociedad chilena.

No obstante, a diferencia de Quiroga (2005), Reyes Villa (2009) y Doria Medina (2014), Mesa fue la primera cabeza de la oposición que careció de la adhesión de algunas de las regiones emblemáticas de la oposición. Se estancó por debajo de 20% en la Chiquitanía (por ejemplo, en San José, Roboré, San Ignacio, San Rafael o San Miguel), así como en la ciudad de Santa Cruz (17.3%). La emergencia de la candidatura de Camacho, con fuerte acento regional, lo privó del caudal que obtuvo el año anterior.

CC ratificó su implantación urbana: su principal rasgo geográfico y social. Mesa ganó la mayoría de las capitales: Potosí (65.5%), Sucre (58.3%), Tarija (55%), La Paz (49.8%) y Trinidad (43%). En otras, aun perdiendo, tuvo un destacado desempeño, como en Cochabamba (46.7%) y Oruro (41.7%). El apoyo se concentró en los barrios favorecidos y declinó a medida que la composición de los distritos se volvió más popular. El caso paceño es ilustrativo: en colegio Franco Boliviano, en el privilegiado barrio de Achumani, triunfó con 76.2%; ganó con menor amplitud en la escuela Alfredo Vargas en Miraflores alto (53.6%), con una integración de clases medias, y fue derrotado en Alto Tembladerani (16.7%), recinto electoral limítrofe con El Alto.

La racha favorable se extendió a varias de las principales ciudades intermedias, como Bermejo (44.6%), Villamontes (43.7%), Yacuiba (40.2%), Riberalta (36.8%), Monteagudo (34.9%) o Camiri (30.5%). Incluyó, asimismo, municipios metropolitanos, como Colcapirhua (47.3%), Tiquipaya (38%) o Quillacollo (36%), en Cochabamba.

Generalmente, en las capitales, las candidaturas de oposición al MAS habían superado su promedio nacional. Mesa alcanzó un nivel capaz de infligir las primeras derrotas presidenciales al MAS en algunas capitales, como La Paz. Al apoyo de las elites y las clases medias asentadas que apreciaron su trayectoria y lo apuntalaron como la opción mejor posicionada, de manera novedosa sumó grupos medios menos afianzados, que simpatizaron con el MAS, pero que buscaban una alternancia, un refresco democrático, sin una ruptura completa, capaz de preservar políticas y símbolos del "proceso de cambio". El mensaje de tintes conciliadores de CC obtuvo una acogida favorable. Los barrios pobres permanecieron refractarios. En general, la oposición al MAS no sintonizó con las expectativas y prioridades de los grupos más vulnerables y continuó percibida como intrínsecamente vinculada a los intereses de las elites.

Esa debilidad se hizo más palpable en las tierras rurales de altura. Los porcentajes no despegaron. En los casos extremos, quedaron incluso por debajo de 3% (entre otros, Arque, Tacopaya, Tapacarí, Catacora, Malla, Caripuyo), más frecuentemente, debajo de 10%. Como antes los otros rivales del MAS, Mesa pagó la ausencia en las redes asociativas locales (sindicatos o ayllus) o de líderes surgidos de esas estructuras, mientras su mensaje era percibido como distante y de escasa conexión emocional, de identidad o de proyecto con ese electorado.

Se apartaron de ese comportamiento los espacios que rompieron con el MAS de manera beligerante, por razones propias, y sin conexión con la política partidista nacional. Así sucedió en los Yungas paceños, dedicados al cultivo tradicional de coca, enemistados con el gobierno de Morales, acusado de privilegiar a los cocaleros

del trópico cochabambino. Las organizaciones de base de esas áreas apostaron por CC o, al menos, se dividieron. Así, CC triunfó en Chulumani (51.1%) y logró porcentajes significativos en Coripata (39.2%), La Asunta (32.7%) e Irupana (31.1%). Los Yungas fueron un caso singular en el que la dinámica de un conflicto local alcanzó una proyección hasta gravitar en los comicios generales.

Las pautas internas se reprodujeron en el exterior. CC quedó por debajo del décimo de los sufragios en los dos países con mayor cantidad de inscritos (Argentina y Brasil). Allí, el electorado está compuesto, sobre todo, por personas de escasos recursos y que se insertaron en sectores de baja remuneración (agricultura, industria textil, albañilería, etc.), a menudo sin la documentación exigida por el país de acogida (Pereira, 2011: 35-39). En cambio, Mesa ganó con holgura en países europeos o en Estados Unidos, donde el perfil migratorio es más bien de clase media.

La evolución 2019-2020 dejó a CC entre los perdedores, con una tónica de retroceso. Esa caída se exceptuó en Beni y Tarija, donde esta tienda política avanzó. Se benefició con el retiro de la candidatura de Áñez, afincada en Beni, en la conjunción de la popularidad presidencial y la fortaleza de Demócratas (en 2019, Beni fue la mejor plaza de BDN), y de Libre 21, integrado por el MNR, cuyos últimos bastiones resisten en ese departamento. Mesa aprovechó su posicionamiento como el rival más fuerte del MAS para recibir el voto útil, con incrementos que superaron los 20 puntos en los municipios rurales benianos (Puerto Siles, Magdalena, Huacaraje, San Joaquín, Baures). En una escala menor, pero desde un punto de partida significativo, mejoró en Tarija. La dinámica se extendió hasta el sur de Chuquisaca y de Potosí, como mostraron Entre Ríos-O'Connor (+10.5) o Bermejo (+10.4), en el primer caso; Camargo (+6.3) o Culpina (+4.5), en el segundo; Tupiza (+4.6), en el último.

Igualmente, CC fortificó sus posiciones capitalinas. Partía de una base alta; aun así, ganó puntos en Trinidad (+8.6), Tarija (+7.7), Potosí (+5.3), Sucre (+2.6), La Paz (+2.2), Oruro (+1.5) y Cochabamba (+0.4). Asimismo, registró aumentos modestos

en ciudades intermedias del occidente y centro del país, como Quillacollo o Llallagua, o en municipios aledaños a las capitales. Los votantes citadinos que deseaban impedir el regreso del MAS al poder concentraron los sufragios en CC.

Sin embargo, en una elección que se polarizó con matices novedosos con respecto a 2019, CC salió desgastada. Los comicios de 2020 tornaron explícitas y abiertas ciertas líneas de confrontación vinculadas con la identidad, de tipo étnica y regional. Estas fracturas, de larga data, se expresaban con un carácter más latente o retóricamente más encubierto. La renuncia de Morales y el desarrollo del gobierno de Áñez, ambos envueltos en acciones de beligerancia, discursos confrontativos y numerosas luchas simbólicas, agudizaron esos puntos de choque y debilitaron una postura como la de CC, percibida como centrista. Mesa perdió votos en ambos flancos, en los bastiones del MAS y en los nuevos baluartes de Creemos.

En efecto, CC registró pérdidas en los espacios proclives al MAS. Los retrocesos fueron menores, pero el punto de partida era también esmirriado. A modo de ejemplo, en el altiplano paceño perdió 0.8 puntos en los municipios de Colquencha y Calacoto; 1.5 en Sicasica. En esos tres distritos, terminó con un 4% del voto. Ocurrió algo similar en espacios rurales de Oruro, Potosí y Cochabamba, en especial en zonas de lengua aymara. Esos distritos se cohesionaron en la adversidad, en el temor de retrocesos en las políticas que juzgaron favorables y reafirmaron su identidad ante la imagen proyectada por Áñez y Camacho. Se contrajo el margen de juego para la candidatura de Mesa, asimilada al resto de la oposición y desprovista de la bandera de la alternancia y el corte de las reelecciones de Morales. Los factores que le abrieron audiencia en 2019 se cerraron en 2020.

Empero, las pérdidas sustanciales y que explican el descenso nacional con respecto a 2019 se situaron más bien en el oriente y norte, donde despegó la candidatura de Camacho. Emblemático fue el retroceso en la ciudad de Santa Cruz, donde su sonada victoria del año anterior se transformó en un modesto tercer lugar

(17.3%), cediendo 35.5 puntos. El derrumbe se extendió a la zona metropolitana, como Porongo (-31.7), La Guardia (-23) o Warnes (-22.1); la Chiquitanía, en Roboré (-35.1) o San Rafael (-29.4). Ese fenómeno alcanzó en el norte beniano a Guayaramerín (-12.4) y Riberalta (-9.7) y se prolongó en Pando, donde CC reculó en todos los municipios, con las puntas en San Pedro (-31) y Puerto Gonzalo Moreno (-3.2).

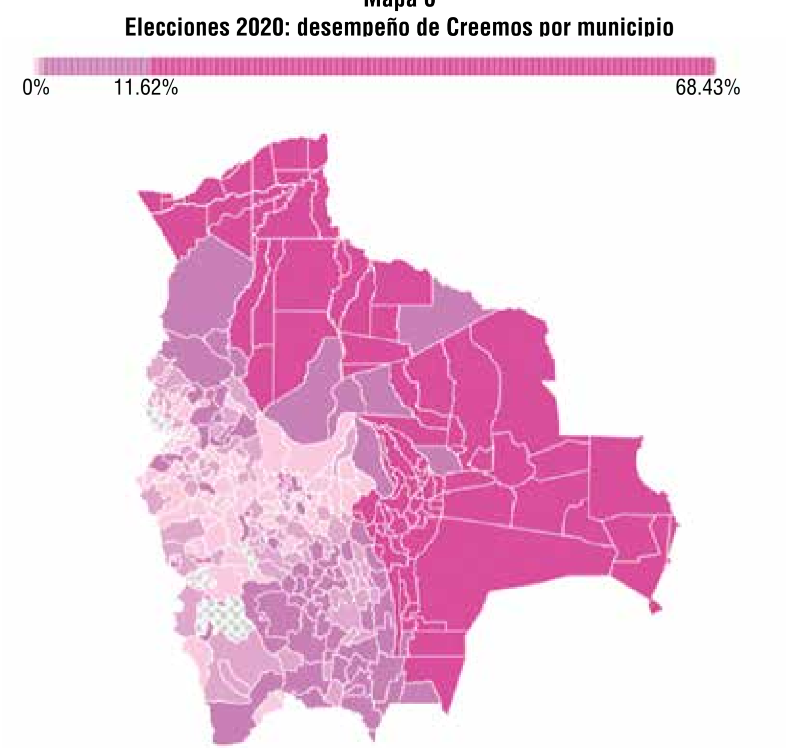
En 2019, Mesa reagrupó el voto duro de la oposición, en desmedro de BDN, que se desplomó en la recta final por la solidez del voto útil. En ese sentido, los elevados porcentajes de CC expresaban la realidad de una férrea oposición al MAS, no una confianza de largo plazo en la organización o el candidato, otorgada en virtud de una adhesión instrumental y coyuntural. En 2020, CC fracasó en repetir el esquema porque votantes de la oposición en el este y el norte privilegiaron por primera vez un voto de identidad y de confrontación más franca al MAS sobre el voto útil.

## El nacimiento oriental de Creemos

Creemos ocupa un lugar singular en la elección 2020 y en la historia electoral del siglo XXI en Bolivia. Como ilustra el gráfico 1, fue la tercera mejor fuerza en el ciclo 2005-2020, la primera que rebasó el listón del décimo de los votos válidos (14%). Formalmente, fue la coalición de dos fuerzas antiguas (PDC-UCS). En realidad, sin embargo, la sigla constituyó apenas la plataforma nominal para la candidatura de Camacho, una de las figuras que emergió durante los conflictos de octubre y noviembre de 2019, y que se presentó como la fuerza más antagónica al MAS, cerrada a cualquier concesión o entendimiento. Empero, su principal novedad fue haber dado lugar al surgimiento de una corriente política y electoral que reivindicó la identidad cruceña como carta de presentación, y haber conseguido con ella una votación significativa.

El mapa 6 muestra la impronta oriental y norteña de Creemos, desde la Amazonía pandina hasta el Chaco, con porcentajes muy disminuidos en el resto del país.

**Mapa 6**
**Elecciones 2020: desempeño de Creemos por municipio**




Fuente: Elaboración Jorge Hevia con información del OEP.

Santa Cruz fue el epicentro de la candidatura de Creemos, comenzando por la capital, donde Camacho obtuvo el 49.2% de los sufragios. El antiguo presidente del Comité Cívico cruceño cosechó el apoyo que forjó en octubre y noviembre de 2019, cuando dio rostro y voz a la movilización contra los resultados de los comicios que dieron a Morales como vencedor. Mientras la activación de la protesta en la mayoría de las ciudades del occidente y centro careció de liderazgos visibles –incluso, en La Paz, Mesa terminó relativamente apartado–, en Santa Cruz, la rotonda del Cristo Redentor fue el lugar habitual de concentración a convocatoria del Comité Cívico, lo que ofreció una tribuna de máxima visibilidad y resonancia al hasta entonces poco conocido Fernando Camacho.

Al mismo tiempo, se estableció el vínculo emocional que teje la solidaridad en un mismo combate intenso y de acentos épicos.

Catapultado como uno de los vencedores políticos de la renuncia de Morales, Camacho desaprovechó el capital inicial, en particular por una disputa con Marco Antonio Pumari, presidente del Comité Cívico de Potosí, con quien coordinó acciones durante las movilizaciones. Al final, ambos conformaron el binomio Creemos, pero con una imagen desgastada. Las primeras encuestas lo situaron en cuarto lugar, lejos del objetivo de las fuerzas contrarias al MAS: alcanzar el segundo lugar para forzar el paso a la segunda vuelta.

Sin embargo, el descrédito del gobierno lastró la candidatura de Áñez, que comenzó a descender en las encuestas, e inversamente Camacho empezó una remontada gradual. El retiro de la presidenta aumentó el caudal de Mesa y benefició, sobre todo, a Creemos, que resistió los llamados al voto útil, el cual había perjudicado a Ortiz en la recta final de la carrera de 2019. En Santa Cruz, la correlación entre la votación municipal de Creemos y los retrocesos de CC es de 0.89 (López y Capobianco, 2021: 88-90).

Se trató de un asunto neurálgico. En 2019, el desplazamiento de los electores cruceños hacia Mesa tuvo una lógica eminentemente política: respaldar al candidato mejor situado, como sucedió en los tres comicios previos, aun cuando franjas significativas tuvieran dudas sobre la figura a la cual respaldaban. En 2020, se produjo un fenómeno nuevo: Creemos contuvo la fuga de votos porque se colocó en un terreno distinto del político-electoral; se posicionó en el plano de la identidad cruceña, sus valores y aspiraciones, y consiguió, por primera vez, politizarla en una elección nacional.

Los pedidos para generar un voto útil lanzados desde CC y de sectores de Demócratas fracasaron ante la reivindicación de que había llegado la hora de Santa Cruz en la política boliviana y que debía terminar el tiempo en el cual ese departamento fuese el reservorio natural de los votos de la oposición al MAS sin que un cruceño tuviera la oportunidad de dirigir ese movimiento. Frente al pedido de unificar los sufragios opositores, Creemos pidió que la unidad se diera en torno a Camacho y a su discurso

de franca confrontación con Morales, apelando a que Santa Cruz era el principal polo de la lucha contra el MAS. Entrelíneas, se planteaban las siguientes oposiciones: un esquema autonómico frente al centralismo del MAS; un modelo basado en la iniciativa privada contra la preeminencia del Estado; los mejores indicadores de desarrollo humano frente al atraso de las regiones rurales de tierras altas; y la reivindicación del mestizaje en contraposición a la exaltación de la identidad indígena.

El mensaje caló y Camacho consiguió invertir la situación de Ortiz en 2019. En esa oportunidad, el candidato de BDN logró un 8.5% en la ciudad de Santa Cruz, frente a un 52.9% de Mesa; en 2020, Mesa bajó a 17.3% y Camacho alcanzó el 49.2%. La reivindicación regional tuvo audiencia en toda la capital, pero se acentuó en los barrios mejor establecidos, tradicionalmente reacios al MAS, con alto nivel de vida y fuerte identidad cruceña. Descendió, pero con guarismos competitivos, en los barrios de inmigrantes, con menor calidad y acceso a servicios, y que se sienten poco integrados, a veces, incluso discriminados por ese proyecto cruceño que mira con desconfianza la matriz indígena andina.

Creemos se extendió con fuerza más allá de la capital, con una particular implantación en las áreas refractarias al MAS, como las ciudades intermedias, de desarrollo humano relativamente alto, con predominio del castellano. Incluso, logró la mayoría absoluta en los municipios de San Ignacio de Velasco (50.7%), Puerto Suárez (51.1%), Porongo (52.3%), Colpa Bélgica (56%), Roboré (58%) y alcanzó la cúspide en Portachuelo (68.4%). Empero, en el mismo departamento, hubo municipios de débil desempeño. Sus peores datos se dieron en San Julián (6.8%) y Yapacaní (7.3%), donde se asentó la inmigración rural de tierras altas, históricamente enfrentada al proyecto regional económico, social y cultural enarbolado por el Comité Cívico y las elites departamentales. Tampoco se asentó en las áreas guaraníes. El contraste es elocuente en Charagua. Venció en la capital del mismo nombre (37.8%) y perdió en las comunidades guaraníes, como Taputá (6.1%) o Tarenda (11.6%), que luchan por consolidar la autonomía indígena y tienen relaciones tensas con las elites locales.

Estos elementos se repitieron en otras regiones orientales y norteñas. En Beni, logró porcentajes interesantes y la victoria en Santa Ana (38.2%) y Guayaramerín (36.1%), si bien disputó el mismo electorado con CC; en tanto que la sigla fue poco competitiva en los municipios que acogen una fuerte migración occidental, como Rurrenabaque (6.1%), o que son centro de las reivindicaciones indígenas de tierras bajas, como San Ignacio de Moxos (6.7%). En Pando, su debut auspicioso se concretó en la victoria en San Pedro (40.1%) y en cifras altas en Nueva Esperanza (30%) y Porvenir (29.1%). Además de la resonancia del mensaje regional, Creemos se benefició del apoyo de Leopoldo Fernández, figura clave en la política pandina durante las primeras décadas de la democracia.

Esta lógica del voto se prolongó incluso fuera de Bolivia. Creemos logró adhesión en las ciudades europeas donde los emigrantes cruceños o del oriente, de manera amplia, así como técnicos o profesionales de clases medias, constituyen una porción significativa. Ganó en España y el Reino Unido, mientras que sus resultados en Argentina, Perú o Chile fueron reducidos.

Lejos del fortín cruceño, los porcentajes declinaron. Hubo algún apoyo en el Chaco colindante o próximo a ese departamento, como en los municipios de Villamontes (12.6%) o Macharetí (12.1%). De manera tímida, se sintió el aporte de Pumari en la ciudad de Potosí (5.1%).

Fuera de ese espacio, los resultados de Creemos cayeron abruptamente. En 184 municipios –vale decir, en más de la mitad de los municipios del país–, Creemos obtuvo por debajo del 1%, e incluso, en cinco no consiguió ni una sola marca (Nazacara de Pacajes, Choquecota, Cruz de Machacamarca, San Pedro de Quemes, San Antonio de Esmoruco). Su debilidad se superpuso con los distritos rurales y pobres del occidente, de lengua aymara y quechua, donde la figura de Camacho era desconocida o se asociaba con el derrocamiento de Morales y con un mensaje beligerante contra la identidad indígena. En ese sentido, fue el exacto opuesto político e ideológico del MAS, lo que también se tradujo, estadísticamente, en una correlación de ambas votaciones a nivel municipal de -0.78.

En esa parte del país, ni siquiera las capitales o las ciudades intermedias, donde el MAS enfrentó dificultades, Creemos avanzó. Se estancó por debajo de 2% en Sucre, Cochabamba, Oruro, La Paz, además de Quillacollo, Sacaba, Huanuni, El Alto o Villazón.

## Conclusiones sobre tres lustros de evolución electoral

El período 2005-2020 permite apreciar las continuidades y las transformaciones electorales en una perspectiva de mediano plazo y, por lo tanto, comprender mejor las cifras de los comicios de 2020. La elección de 2005 fue la primera presidencial ganada por el MAS y la primera vez, desde el retorno a la democracia, que una candidatura superaba el umbral de la mayoría absoluta.

Entre 2005 y 2020, los porcentajes del MAS presentan una gran similitud (53.7% y 55.1% de los votos válidos, respectivamente). Esa proximidad subraya la continuidad. El análisis detallado de las cifras confirma y matiza esa tendencia. En la primera elección, el MAS destacó por su anclaje rural en el occidente y centro del país (Romero Ballivián, 2007). En 2020, ese rasgo se preservó y se acentuó. En 2005, la candidatura de Morales tuvo una doble competencia. Cedió votos al Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) de Felipe Quispe, en especial en el altiplano (en una escala menor y con una razón distinta, el MTS y el PDC restaron votos al MAS en 2019). Además, por aquel entonces, las fuerzas que habían gobernado durante el período liberal aún tenían cierta presencia rural y se articulaban, aunque de manera cada vez más frágil, con sindicatos, asociaciones y líderes. La coalición Podemos, encabezada por Jorge Quiroga y compuesta por fracciones de ADN, MNR y MIR, logró cierta adhesión en los valles.

En 2020, el dominio holgado se volvió un juego unipartidario, un caso de figura excepcional. Las zonas rurales del altiplano y de los valles se volcaron íntegramente hacia el MAS, por un doble efecto: reservaron porcentajes mínimos a las formaciones rivales y contrajeron los otrora altos porcentajes de votos blancos a niveles más próximos

a la media nacional. El MAS recibió un voto de confianza exclusivo de las áreas de pequeña propiedad agrícola y mineras, donde la vida colectiva se estructura alrededor de la pertenencia a comunidades o sindicatos, con población de bajos ingresos, escasas oportunidades y difícil acceso a servicios, de lengua aymara y quechua. Hay una evolución estructural que, ciertamente, indica un afianzamiento de un voto de identidad, que ha permitido al MAS beneficiarse como el principal o único representante del mundo indígena y de la corriente plurinacional, con una gestión pública que atendió requerimientos postergados y, sobre todo, empalmó con una reivindicación cultural. Sin discutir lo esencial de esta afirmación, los datos de 2019 muestran que ese apoyo puede tener brechas, ya sea por la competencia de una alternativa considerada próxima (MTS) o de la ruptura de esa lógica (el voto evangélico del PDC).

La segunda transformación profunda del MAS es la nacionalización de su geografía. Partió de las tierras altas en 2005 y, tras tres períodos de gobierno de Morales, extendió su presencia por todo el país, por más que los guarismos de las tierras bajas sean inferiores al promedio nacional. La sucesión ininterrumpida de gestiones y el control del Estado han creado estructuras y mecanismos de poder y han facilitado el tejido de alianzas fuera de sus primeros bastiones, que se traduce en el surgimiento de una vida partidaria en todos los municipios de Bolivia; una evolución común en los partidos con una larga permanencia en el poder, constatada también en otros contextos (Wahman, 2017: 309-322). Para el MAS, electoralmente, no hay municipios con resultados menores al 10% o, incluso, al 5%, como en 2005.

Ambos movimientos sugerirían un alza de la votación nacional. Sin embargo, los mismos se compensaron con el debilitamiento urbano, en especial capitalino. En 2005, Morales entusiasmó a sectores populares y medios de las ciudades, sobre todo en el occidente y centro. El MAS permanece como una fuerza relevante gracias al voto de los sectores menos favorecidos, pero ya no victoriosa, por el retroceso en los barrios de composición media o con movilidad social ascendente. Esos grupos se han alejado, críticos con las credenciales democráticas de la organización y sintiéndose

poco incluidos en el proyecto masista, en el cual la prioridad de la identidad indígena es percibida como estigmatizante y excluyente de las otras (Loayza, 2021: 96-106). El retroceso se contuvo, en el período 2005-2020, por mejoras en las capitales del norte y del este, con bajos puntos de partida.

En una perspectiva de aún más largo plazo, el escenario evoca rasgos electorales de la década de los años sesenta del siglo pasado. En efecto, el MNR nacionalizó su presencia territorial, con una hegemonía rural, en tanto que el principal partido opositor, Falange Socialista Boliviana (FSB), reunía apoyos citadinos y orientales. Sin considerar otros factores, la diferencia fundamental radica en el peso demográfico de los conjuntos. La demografía de la Bolivia revolucionaria era rural y occidental; desde fines del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI, su estructura es urbana y su dinámica, oriental.

En el campo de la oposición, entre Podemos y CC no existe continuidad organizativa –incluso, el candidato de la primera coalición competía con sus propios colores en 2020–. Sin embargo, sí hay una prolongación sustantiva, que autoriza la equivalencia. Además de los porcentajes semejantes (28.6% y 28.8% de los votos válidos, respectivamente), las dos se presentaron como los principales contendientes del MAS, expresaron intereses parecidos y representaron a sectores similares.

Podemos recogió el apoyo urbano y oriental. CC fue fundamentalmente un movimiento urbano, incluso de manera más pronunciada que la inicial candidatura de Quiroga. CC triunfó allá donde Podemos sólo obtuvo buenos resultados. Aprovechó el desgaste del MAS en las capitales tras la negativa de aceptar el veredicto del referéndum 2016 y de la progresiva búsqueda de una alternativa por parte de las categorías medias y de estratos populares en ascenso.

El voto de las capitales por CC fue heterogéneo –en particular, en 2019–. Juntó el segmento conservador de grupos favorecidos y medios que nunca habían votado por Morales y que habían confiado en Quiroga en 2005, y el de desilusionados del MAS, que se acomodaban con las políticas públicas, pero rechazaban su estilo y su ánimo de prórroga. Con esa conjunción ganó las

capitales. En las ciudades intermedias, de corte más popular, CC se mantuvo cercano a los resultados de Podemos, en general, con el incremento de algunos puntos.

Ese impulso se frenó y, finalmente, se anuló en el balance global, por la caída de los porcentajes de CC en las tierras bajas, la principal fuente geográfica de votos para la oposición. En ellas, Podemos fue el heredero de ADN y, en gran medida, del MNR; los partidos que dominaron desde la transición a la democracia; logró victorias sólidas y porcentajes elevados. Mesa perdió ese apoyo, que le había beneficiado en 2019, como antes a Doria Medina (2014) y Reyes Villa (2009). Rescató la partida en Beni, pero la comparación 2005-2020 muestra descensos en la Amazonía, la Chiquitanía, el Chaco y en las ciudades cruceñas, empezando por la capital y su área metropolitana.

Allí justamente emerge una de las principales innovaciones de los comicios de 2020, con la candidatura de Creemos. Existe un símil entre la suma del MNR y UN en 2005, y el resultado de Camacho en 2020 (14.2% y 14% de los votos válidos, respectivamente) y una superposición de áreas, tanto de fortaleza como de debilidad.

UN y el MNR lograron promedios interesantes en las tierras bajas. A pesar de que el MNR registró su peor actuación en solitario, preservó algún capital en sus bastiones de Beni y Santa Cruz. UN debutó con éxito en la Amazonía, gracias al pacto con un ala disidente de ADN. Al mismo tiempo, ambos partidos se contrajeron en el occidente y centro del país, en especial en las zonas rurales. Se dibuja así una cercanía con el nacimiento electoral de Creemos.

Empero, la candidatura de Camacho presenta diferencias profundas y ofrece novedades relevantes, sobre todo por el fondo que articula su apoyo electoral. Creemos forjó un voto de identidad cruceño, en menor medida oriental, que tendió a oponerse al del MAS, en una lógica de mutua exclusión que simultáneamente cohesiona ambas bases. La fuerza de la identidad regional, con el añadido de referencias explícitamente conservadoras y de franca confrontación con el MAS, construyó una columna vertebral del apoyo a Creemos. Así, Camacho eludió el escollo sobre el cual

naufragó Ortiz el año precedente, cuando la primacía del enfrentamiento político (el "voto útil") minimizó una variable regional que, hasta entonces, en comicios nacionales, existía sólo de modo latente.

Desde principios del siglo XXI, la identidad cruceña ya estaba politizada, gracias a la reivindicación de la autonomía departamental –a su vez, inscrita en una extensa lucha por la descentralización y el manejo de recursos generados en el departamento (Roca, 1999)–. Se manifestaba de manera nítida en las elecciones de alcance departamental y municipal. Sin embargo, no había conseguido el salto al campo nacional, ya sea porque el liderazgo cruceño se allanó para privilegiar la unidad (como en el caso de las candidaturas presidenciales de Reyes Villa, en 2009, y Doria Medina, en 2014) –aunque el departamento proveía la mayor cantidad de sufragios para la oposición al MAS– o porque el intento fracasó, como en 2019. Por primera vez, en 2020, Camacho logró que la identidad regional sea el motor del voto, por encima de las consideraciones políticas.

En síntesis, la evolución electoral de las primeras décadas del siglo XXI muestra tres rasgos centrales. En primer lugar, el MAS permanece como el eje en torno al cual se articula el endeble sistema de partidos y, sobre todo, el sistema político. Constituye uno de los polos de la política y, más allá de las oscilaciones del caudal, mantiene un apoyo que supera la mayoría absoluta (sólo en 2019 se situó por debajo de ese nivel). Nacionalizó su base electoral gracias a sus progresos en el norte, el oriente y el sur, donde, sin embargo, permanece por debajo del promedio; reforzó la base rural y étnica de su apoyo, llevándola al máximo posible; en cambio, cedió espacio en las ciudades –con la notable excepción de El Alto–. Así, se acentuaron las características identitarias del voto del MAS en un contexto de una polarización profundizada, de la cual es efecto y causa.

La oposición a ese partido conserva sus dos características visibles desde principios del siglo XXI: minoritaria y fragmentada. Sin embargo, hay cambios significativos. La oposición, que siempre tuvo una mejor presencia citadina, se ha vuelto mayoritaria, cubriendo un arco social extenso, desde las clases privilegiadas hasta sectores populares en ascenso. Esa alianza social es frágil: opuesta

al MAS, pero con sensibilidades distintas sobre cómo construir un proyecto ulterior al de ese partido.

Por último, emerge en el este y norte una alternativa de oposición con rasgos identitarios marcados. Esas áreas, tradicional vivero de los votos contrarios al MAS, apostó en 2020 por una candidatura que reivindicó especificidades culturales y un mensaje de corte explícitamente conservador, capaz de reconfigurar de manera significativa la baraja en la oposición.

Si estos rasgos se ratifican en comicios siguientes, la política boliviana se asentaría sobre una de las tendencias de fondo que moldean la política desde finales del siglo XX: la identidad como principio rector del posicionamiento político (Fukuyama, 2019). La preeminencia de esa variable tiende a generar comportamientos estables, reduce la volatilidad y el peso del voto de opinión en las elecciones. Empero, la estabilidad no debe confundirse con inmovilismo: en especial en las ciudades, sectores medios y grupos populares en ascenso han mostrado flexibilidad en sus adhesiones electorales y, por lo tanto, capacidad de mover el cursor electoral. En efecto, identidad y opción se reconfiguran en cada proceso electoral (Aguilar y Chuliá, 2007).

Por lo demás, cada elección se define en el juego de las tendencias estructurales y los movimientos coyunturales. La estabilidad de los comportamientos, a partir de 2005, no implica ausencia de evoluciones y cambios. La elección de 2020 se inscribió todavía en la huella definida por los comicios de 2005. Es probable que el juego se mantenga con estos rasgos hasta la llegada de una elección de realineamiento, una de ésas que rompe las líneas vigentes, reconfigura el sistema político, de partidos e incluso las políticas públicas, y asienta nuevos parámetros de normalidad política y electoral (Martin, 2001). Desde el retorno a la democracia, Bolivia conoció dos elecciones de ese tipo: 1985 y 2005. Una y otra colocaron los cimientos de los nuevos períodos y, mientras duró su ciclo, sólo se produjeron limitados vaivenes y acomodos coyunturales.

V

# Las elecciones locales de 2021 y las perspectivas del gobierno de Luis Arce

## Introducción

La elección de octubre de 2020 y la posesión de Luis Arce y David Choquehuanca como presidente y vicepresidente cerraron el paréntesis de provisionalidad que se abrió con la renuncia de Morales, la llegada al gobierno de Áñez y la sobresaltada organización de los comicios de 2020. Igualmente, implicaron el regreso del MAS al poder, por primera vez sin la figura de Morales.

La gestión de Arce se inició en condiciones muy distintas de las que tuvo Morales en 2006, con diferencias de contexto relevantes para comprender las perspectivas de la gestión.

Al mismo tiempo, en el primer cuatrimestre se celebró la elección departamental, regional y municipal. Esa cita estaba inicialmente programada para marzo de 2020, poco después de la presidencial de 2019. Sin embargo, fue postergada y vinculada al cumplimiento de los comicios generales, pues una ley promulgada en diciembre de 2019 señaló que sería convocada 48 horas después de la posesión del presidente. Esa fórmula abierta para contemplar una segunda vuelta presidencial se reveló lo suficientemente flexible como para incorporar la inesperada prórroga de los comicios generales, consecuencia de la pandemia.

Constituyó el primer enfrentamiento electoral después de la presidencial y, al mismo tiempo, clausuró el ciclo electoral pues se asignaron todos los cargos electivos de representación popular, tanto del Ejecutivo y Legislativo nacional como de los niveles locales. Sus datos indicaron la primera valoración de la gestión de Arce, pero su análisis requiere un marco amplio.

Este capítulo presenta las perspectivas iniciales del gobierno de Arce y un estudio sucinto de las principales cifras e implicaciones de los comicios de 2021.

## El inicio del gobierno de Luis Arce

El retorno del MAS al gobierno se dio en un ambiente distinto al de 2005. Las diferencias revelan tanto el contexto como la propia evolución del MAS y son fundamentales para comprender la acción y las perspectivas del gobierno de Arce.

En 2005, Morales llegó al poder rodeado de expectativa y esperanza, que desbordaban su apoyo electoral. Su "estado de gracia" se extendió, incluso, al círculo de electores opositores, que reconocían la fortaleza del triunfo (primer presidente elegido con mayoría absoluta) y la importancia de un gobierno que se colocaba bajo el manto de la histórica reivindicación indígena por acceder a los espacios de poder. Esa buena voluntad también fue perceptible en el exterior, donde Morales gozó de una estima sin relación con el peso de Bolivia en el concierto internacional. El MAS enarbolaba un proyecto de transformación social y político, que se encarnaba en las promesas de la Asamblea Constituyente, acto refundador de la sociedad y del Estado. Por último, tras las turbulencias de principios de siglo, que vapulearon el crédito de los partidos hasta entonces gobernantes, la coyuntura económica cambiaba de signo y empalmaba con la curva ascendente de uno de los mejores ciclos económicos de la historia sudamericana.

Paradójicamente, aunque Arce superó el primer porcentaje de Morales, no contó con el mismo entorno propicio. En la polarización áspera, los grupos opuestos al MAS tenían escaso ánimo

de conceder el habitual "estado de gracia" a la administración entrante, y fracciones de su propio electorado, en particular urbano, otorgaban el beneficio de la duda que aguardaban el curso de las medidas y acciones para tomar posición.

La coyuntura también era opuesta. Arce asumió el mandato en el contexto de una economía contraída, la misma que hundió la candidatura de Áñez, y con una expectativa de pronto restablecimiento sin costo social, como prometió el MAS (una diferencia de envergadura con 1985, cuando el electorado estaba dispuesto a sacrificios y las mismas candidaturas señalaban como ineludible una etapa ardua antes de recuperar el crecimiento). Se sumó el reto la pandemia. Si el MAS tomó posesión del gobierno en la fase descendente de la primera ola, pronto enfrentó la segunda –enero– y la tercera olas –mayo–, cuyos picos de contagios y fallecidos rebasaron los de la primera.

Si la convergencia de la crisis económica y sanitaria definió un escenario de entrada complejo, su ventaja fue que 2021 anunciaba el rebote general de la economía tras la contracción del año previo, en tanto que la fabricación y distribución internacional de la vacuna permitió contener los efectos más dañinos del coronavirus.

En el mismo sentido, la mayoría del MAS en la Asamblea, un componente básico para la gobernabilidad institucional, le permitió encarar la gestión con fortaleza y marcó una línea de continuidad con la segunda y tercera gestiones de Morales (en la primera, la oposición consiguió una ligera mayoría en el Senado). En efecto, la victoria de Arce tuvo su correlato en la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados como muestra el cuadro 3.

**Cuadro 3**
**Número de senadores y de diputados por organización política, 2020-2025**

| Organización política | Senadores | Diputados |
|---|---|---|
| MAS | 21 | 75 |
| CC | 11 | 39 |
| Creemos | 4 | 16 |

Fuente: Elaboración propia con información del OEP.

El MAS contó con la mayoría absoluta, pero no alcanzó los dos tercios, mayoría calificada requerida para distintas designaciones en la Asamblea. Empero, logró que parlamentarios elegidos con bandera opositora se alinearan con su bancada, acercándose al umbral.

El mismo MAS era distinto. Si en 2005 y 2009 impuso el discurso del cambio, desde 2014 privilegió el mensaje de la estabilidad y la continuidad. En 2020, insistió en la dimensión restauradora más que en imágenes de cambio: el restablecimiento del crecimiento –donde la figura y el discurso de Arce eran fundamentales– y la recuperación de la presencia indígena en el poder. Ofreció el regreso al período previo, cerrando el paréntesis del gobierno de Áñez.

Aún más, los juegos de poder interno quedaron alterados durante el año fuera del poder. Los movimientos sociales se posicionaron con fuerza, expresaron su desconfianza con la clase media urbana y hasta criticaron al entorno de Morales, sin que el cuestionamiento alcanzara al expresidente, ni quedara en entredicho su lugar como eje articulador y definidor en la galaxia heterogénea que conforma al MAS. Morales regresó a Bolivia apenas Arce asumió funciones. Se afincó en su bastión del trópico cochabambino, desde donde asumió el liderazgo del partido, la conducción de la campaña de los comicios de 2021, marcó el tono de las líneas políticas del gobierno y permaneció como la figura más polarizadora (a modo de ejemplo, en la encuesta Delphi de la Fundación Friedrich Ebert, de marzo de 2022, Morales aparecía, de lejos, como el político que más "promueve el enfrentamiento", seguido por Camacho).[10]

Arce tenía poca baza en ese juego de corrientes internas, escasa llegada propia a los sectores fundamentales de la organización y un margen acotado de autonomía. Posesionó un gabinete sin mayores figuras de notoriedad pública. Nombró varios ministros con un perfil más técnico, vinculados con su gestión de ministro de economía, y dejó latitud para que los movimientos sociales propongan o escojan autoridades. El círculo cercano a Morales recibió cargos diplomáticos.

10 Véase: www.fes.de

En política, el gobierno inició su gestión manteniendo la polarización al volcar un esfuerzo significativo para imponer, judicialmente, la versión del MAS sobre los hechos de 2019. En ese sentido, reivindicó la limpieza de la elección presidencial de 2019, denostando la auditoría de la OEA; al mismo tiempo que denunció que Morales fue víctima de un golpe de Estado; sindicó al conjunto de sus opositores de haber participado en la trama golpista y calificó la gestión de Áñez como "gobierno de facto". Negándole legitimidad a la sucesión, abrió un frente contra la OEA, la UE y la Iglesia católica por su papel en el cambio de gobierno.

Esa retórica se endureció con procesos judiciales tras los comicios locales de 2021, exaltando la aplicación de la justicia. Áñez fue detenida el 12 de marzo de 2021 junto a algunos de sus exministros y militares de alta graduación, acusados del "golpe de Estado" y de las "masacres" en Senkata y Sacaba. Otras autoridades del gobierno de transición fueron procesadas por distintas causas o buscaron asilo.

El endurecimiento del lenguaje y las acciones gubernamentales resonaron positivamente en su base electoral más comprometida, pero provocaron la reacción airada de la oposición que denunció una "persecución política" y negó cualquier tipificación como golpe de Estado a la renuncia de Morales. Por su parte, la comunidad internacional (OEA, UE, Estados Unidos, varios países latinoamericanos y organizaciones de derechos humanos) expresó sus inquietudes por esa evolución que minaba los intentos de tender puentes entre los actores y puso en duda la idoneidad e independencia de la justicia para garantizar juicios apegados a la legalidad y al debido proceso.

En economía, Arce no modificó las líneas macroeconómicas definidas durante el período de Morales y prolongadas por Áñez, más allá de derogar algunas medidas de la gestión precedente, calificadas de neoliberales, como la libre exportación de productos agroindustriales, chocando con el sector privado. La prioridad otorgada a la pronta recuperación de la economía fue notoria en el rechazo tajante a la cuarentena rígida propugnada desde sectores médicos y algunos grupos de oposición durante la segunda ola de la pandemia, en enero de 2021.

En efecto, en el frente de la salud, descartó las medidas de confinamiento y apostó sus cartas a la vacunación. A principios de 2021, el país recibió los primeros contingentes de vacunas. La implementación inicial de un ambicioso plan de vacunación de adultos tropezó con dificultades por la demora en la entrega de las vacunas, complicaciones logísticas, insuficiencias del sistema de salud para administrar todas las dosis, así como por la reserva de ciertos segmentos, en especial rurales, para vacunarse. A partir del segundo semestre de 2021, la vacunación se consolidó, la pandemia retrocedió y la vida colectiva se encaminó hacia la normalización.

Con ese telón de fondo, la flamante gestión de gobierno pasó su primer test político en las elecciones departamentales y municipales de marzo de 2021.

## La elección departamental, regional y municipal de 2021

### La convocatoria a la elección y la configuración del escenario político y de las candidaturas

La elección de 2021 se situó en una línea de continuidad con respecto de los comicios generales de 2020, aunque también presentó singularidades. El vínculo era inevitable, desde la misma convocatoria, apenas 48 horas después de la posesión de Arce. Sin embargo, a la elección le costó afianzarse entre las prioridades ciudadanas, marcadas más bien por la incierta recuperación económica, el embate de la segunda ola del coronavirus y el sentimiento de que la elección presidencial ya había marcado el rumbo político del país.

Como en 2020, resurgió el debate sobre la postergación de la fecha de la elección, dado el incremento de contagiados y fallecidos. Se posicionaron a favor de la postergación el Comité Cívico de Santa Cruz; autoridades municipales fuera de competencia, en especial el alcalde paceño Luis Revilla; candidatos que no figuraban a la cabeza de las encuestas; algunas asociaciones médicas.

Esa exigencia halló menos eco en la sociedad que el año precedente. La elección perdió el halo de evento extraordinario que podía ser un acelerador y multiplicador de contagios. Más allá de la preocupación, existía voluntad para recuperar, en la medida de lo posible, los marcos de la cotidianeidad. Asimismo, se percibía el desgaste de gestiones locales extendidas por casi seis años y que en algunos municipios derivó en una notoria inestabilidad institucional.

El TSE sostuvo la fecha establecida, apelando a la experiencia de la presidencial, que mostró que la elección no tuvo una incidencia negativa en el curso de la pandemia. Mantuvo los protocolos de seguridad sanitaria y propuso uno adicional para las campañas, de libre suscripción para las organizaciones. A diferencia de 2020, cuando todos los países latinoamericanos postergaron sus comicios, en 2021 se mantuvieron los calendarios en Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú, Argentina y Chile (Alcántara, 2021: 29-43).

El proceso electoral arrancó a la sombra del inicio de la gestión de Arce y sólo adquirió una personalidad fuerte en las semanas previas a la jornada de votación, cuando las campañas se activaron, aunque sin despliegues significativos en el terreno. La atención ciudadana se centró en las demandas de inhabilitación contra candidatos con liderazgo en las encuestas. La cuestión jurisdiccional alcanzó una alta tensión, en especial alrededor de Manfred Reyes Villa en Cochabamba, cuya candidatura fue duramente cuestionada por el oficialismo. Al final, fue habilitado, al igual que otros candidatos que, tras los comicios, ocuparon los primeros sitiales (entre otros, en Santa Cruz, la alcaldesa Angélica Sosa, Johnny Fernández-UCS y Gary Añez-C-A;[11] en La Paz, César Dockweiler-MAS y Santos Quispe-Jallalla para la gobernación; en Beni, Alejandro Unzueta para la gobernación y Christian Cámara para la Alcaldía de Trinidad, ambos del MTS, etc.).

La elección local tuvo líneas de continuidad con los comicios generales, en particular la disputa entre el MAS y las fuerzas contrarias al gobierno. Contribuyeron la voluntad –y la capacidad– del

11 Comunidad Ciudadana Autonomía para Bolivia (C-A).

MAS de presentar candidatos en prácticamente todas las plazas en disputa: gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías, concejos municipales y cargos regionales, además sin alianzas (en 19 municipios, con características rurales, periféricas y poco pobladas, el MAS fue el único partido que presentó una fórmula). Para las candidaturas relevantes, es decir gobernaciones y alcaldías capitalinas o de las principales ciudades, Morales asumió el papel protagónico en la selección de los nombres, en una tarea no exenta de contrariedades para el expresidente, enfrentado a la heterogénea galaxia que conforma al MAS. Incluso, se produjeron escisiones de consideración: en El Alto, la marginada expresidenta del Senado, Eva Copa, se presentó con los colores de la agrupación ciudadana Jallalla La Paz.

Sin embargo, a diferencia de la presidencial, la polarización no se conjugó en términos tan sencillos y nítidos. De hecho, el abanico se abrió porque organizaciones que en 2020 se abstuvieron, se retiraron antes de la jornada de votación o participaron con un perfil bajo detrás de una sigla que las mimetizó, recobraron individualidad. Asimismo, las agrupaciones de alcance municipal o departamental concurrieron a una la elección consustancial a su naturaleza.

En simultáneo, los contendientes nacionales de 2020 exhibieron su fragilidad. CC, que agregó el voto presidencial, confirmó que esa votación no reflejaba ni un liderazgo indiscutido en el campo opositor ni la fortaleza de una organización que era, en el mejor de los casos, incipiente. En lugares donde consiguió resultados fuertes, como las capitales departamentales o en Beni y Tarija, no tuvo candidatos y si los tuvo, éstos no descollaron. Con matices, algo similar sucedió con Creemos. Sin duda, para la Gobernación de Santa Cruz, Camacho partió con ventaja, pero no presentó candidato para la alcaldía de la capital del departamento y tampoco pudo impulsar postulantes fuera de Santa Cruz.

En ese contexto, cada organización se promovió donde sentía opciones de cosechar buenos resultados, ofreció la sigla a algún candidato con perspectivas o simplemente para que enarbolara su sigla. La multiplicidad de agrupaciones ciudadanas con un alcance departamental o municipal diversificaba la paleta: en cada alcaldía

y en cada gobernación se constituyó una oferta política específica, tanto más porque la legislación autoriza alianzas por municipio.

La presión del electorado opositor para que se forjen candidaturas de unidad contra el MAS, tan visible en 2020, se diluyó, aunque sin desaparecer. Al final, en las capitales y en las principales ciudades intermedias, ciertos candidatos se consolidaron como figuras de oposición al MAS y se beneficiaron de la dinámica del voto útil. La sigla por la cual postulaban era secundaria, podía ser la de una agrupación ciudadana sin trayectoria, una alianza de organizaciones o una sigla prestada para la ocasión. Ese proceso se observó, entre otros muchos ejemplos, con el exministro de Áñez, Iván Arias, en La Paz (Por el Bien Común Somos Pueblo, PBCSP - agrupación ciudadana), el exalcalde y exprefecto Manfred Reyes Villa, en Cochabamba (Súmate - coalición), o los candidatos a las alcaldías de Trinidad y Cobija que postularon con el MTS, partido con el cual no tenían vínculos hasta la postulación.

La fragmentación y la dispersión, visibles en la oposición, también erosionaron al oficialismo. Incluso en bastiones donde apabulló sin contrapesos, el MAS resintió el impacto de esa vivacidad de agrupaciones que quiebran su hegemonía por disputas de liderazgo local o por voluntad de expresar sensibilidades de grupos que, en el plano nacional, continúan respaldándolo.

El cuadro 3 muestra la fragmentación (limitada) de la competencia por las gobernaciones, con un promedio de 8.5 fórmulas por departamento, con un mínimo de 6 (Santa Cruz y Pando) y un máximo de 14 (La Paz). En la competencia municipal, la dispersión fue mayor en las alcaldías más pobladas y menor en las de población escasa, incluyendo casi una veintena de casos con un solo aspirante.

Asimismo, la elección de 2021 tuvo un gusto de final de era. Las figuras que dominaron la vida municipal de las capitales o en las gobernaciones estuvieron ausentes, por distintas razones. Tras dos o más mandatos, se retiraron Rubén Costas, primer prefecto elegido de Santa Cruz (2006-2021); Luis Revilla, alcalde de La Paz (2010-2021); Percy Fernández, alcalde de Santa Cruz (2005-2019) (ya alejado del cargo por enfermedad); otros, por complicaciones en su gestión que derivaron en la renuncia anticipada o en la

decisión de no presentarse (José María Leyes en Cochabamba, 2015; gobernadores y alcaldes del MAS que dimitieron en las jornadas de noviembre de 2019). Algunos dieron el salto a la arena nacional, como el alcalde tarijeño Rodrigo Paz, elegido senador de CC en 2020. Pocos buscaron conservar el puesto o la reelección, como la alcaldesa cruceña Angélica Sosa, los gobernadores de La Paz, Félix Patzi, y el de Tarija, Adrián Oliva. Sus resultados desalentadores confirmaron ese fin de época.

**Cuadro 4**
**Cantidad de organizaciones inscritas para gobernaciones por departamento (situación al 7 de marzo de 2021)**

| Departamento | Organizaciones inscritas para la elección de gobernación |
|---|---|
| Chuquisaca | 6 |
| La Paz | 14 |
| Cochabamba | 9 |
| Oruro | 11 |
| Potosí | 9 |
| Tarija | 7 |
| Santa Cruz | 6 |
| Beni | 9 |
| Pando | 6 |

Fuente: Elaboración propia con información del OEP.

La campaña transcurrió, en general, con escasa fuerza. Si bien la pandemia no inhibió el proselitismo, lo restringió, tanto por la precaución de los candidatos como por el escaso ánimo de militantes y simpatizantes de arriesgarse en la segunda ola. Además, la mirada social censuraba las campañas que irrespetaban las medidas básicas de protección sanitaria. El deterioro económico tampoco favoreció que los recursos fluyan hacia las campañas. Por último, es conocido el efecto de que las elecciones locales que llegan poco después de una presidencial favorecen poco la movilización de las estructuras partidarias e, incluso, del electorado.

Los candidatos del MAS se apoyaron en la fortaleza partidaria recientemente probada y el gobierno procuró apuntalarlos

asociándolos con el inicio del proceso de vacunación o vinculando las opciones de progreso local con la alianza con el gobierno central. Por su parte, los candidatos de la oposición, desprovistos de aparato, subrayaron sus méritos personales y trataron de consolidar el voto útil de la oposición contra el MAS en la circunscripción correspondiente.

## Perspectiva general de los resultados

El análisis de la elección 2021 presenta una dificultad en el abordaje metodológico. En sentido estricto, más que una elección se trata de múltiples elecciones; en primer lugar, porque hay dos grandes niveles de competencia (departamental y municipal) y porque la oferta en cada departamento y en cada municipio es específica. Este estudio se centra en el nivel departamental, el menos afectado por las condiciones peculiares de la competencia; en ese sentido, es el nivel más político; sin embargo, también se hacen referencias a los comicios municipales para una comprensión cabal de las dinámicas políticas.

El cuadro 5 condensa la información de las principales organizaciones en la competencia departamental. El mapa 7, por otra parte, indica los ganadores por municipio, con las prevenciones señaladas.

El MAS –único partido con presencia en todos los departamentos–, ganó la elección. Logró tres triunfos departamentales en primera vuelta (Cochabamba, Oruro, Potosí) e ingresó a la segunda ronda en cuatro, donde, a la postre, fue derrotado. A nivel nacional, aventajó con holgura a la segunda fuerza, Creemos, que se impuso con autoridad en Santa Cruz, la única plaza donde participó. El MAS y Creemos fueron los únicos partidos que superaron la barrera del 10% de los votos, a nivel nacional.

Jallalla y PBCSP debieron su tercer y cuarto lugar nacional, respectivamente, a su buen rendimiento en La Paz, que aún permanece –por poco margen– como el departamento con mayor cantidad de electores. El candidato de Jallalla, Santos Quispe, ganó la Gobernación de La Paz en la segunda vuelta. El MTS hizo el esfuerzo por presentarse en siete departamentos. Ganó dos, uno en primera vuelta (Beni) y otro (Pando) en segunda ronda. Quedó en

la quinta casilla, apenas por encima de Súmate, que resultó segundo en Cochabamba. Cierran el tablero de las fuerzas que lograron al menos 2% de los sufragios válidos, Chuquisaca Somos Todos (CST), líder de la primera vuelta en Chuquisaca y vencedor en la segunda, así como Unidos Tarija, que se alzó con la Gobernación de Tarija en la ronda decisiva. Varias organizaciones intentaron tener presencia nacional, pero el porcentaje acumulativo fue inferior a 2%, incluyendo a C-A, articulada alrededor de CC.

El dato central es la estabilidad de la distribución de las cifras departamentales. El MAS realizó su mejor actuación en 2010 (42.5%), descendió a 36.8% en 2015 y remontó ligeramente en 2021 (38.5%). Son fluctuaciones menores para una década. Hasta la pauta de presencia mostró continuidades de 2015 a 2021, incluyendo la victoria en primera vuelta en Cochabamba, Oruro y Potosí. En el recuento final, quedó con esas tres gobernaciones, lo que supuso su peor desempeño en términos de control de gobernaciones desde 2010 –y equivalente a 2005–.

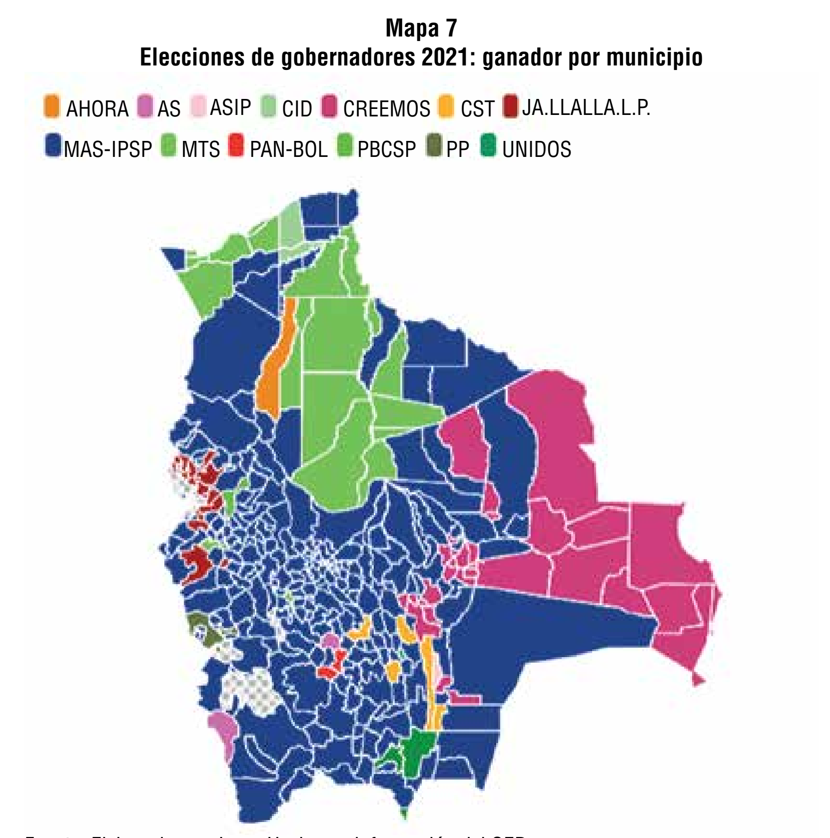
**Cuadro 5**
**Resultados de la elección departamental de 2021**
**(organizaciones con 2% o más sobre votos válidos)**

| Organización política[12] | Porcentaje sobre votos válidos | Porcentaje sobre votos emitidos | Departamentos en competencia |
|---|---|---|---|
| MAS | 42.5 | 38.5 | 9 |
| Creemos | 15.5 | 14 | 1 |
| Jallalla | 7.1 | 6.4 | 1 |
| PBCSP | 6.3 | 5.7 | 1 |
| MTS | 4.9 | 4.4 | 7 |
| Súmate | 4.8 | 4.4 | 1 |
| Chuquisaca Somos Todos (CST) | 2.2 | 2 | 1 |
| Unidos Tarija | 2 | 1.8 | 1 |

Fuente: Elaboración propia con información del OEP.

12 En 2015, el MAS obtuvo 36.8% y CST el 2% de los votos emitidos. Las otras organizaciones participaron por primera vez.

**Mapa 7**
**Elecciones de gobernadores 2021: ganador por municipio**




Fuente: Elaborado por Jorge Hevia con información del OEP.

Las otras fuerzas, cubriendo un abanico ideológico extenso, bordearon la mitad del voto (los blancos y nulos suman 9.4%). Aparentemente, hay novedades. Creemos debutó en el segundo lugar con 14%. Sin embargo, esa cifra guarda relación con el 11.7% y 18.1% que Verdes y Demócratas obtuvieron, respectivamente, en 2010 y 2015, en ambas ocasiones construidos sobre el triunfo de Rubén Costas en la Gobernación de Santa Cruz (Costas logró 49% y 55.1%, y Camacho 52.4%). La diferencia estribó en que Demócratas presentó candidatos en otros departamentos, incluso obtuvo el segundo lugar en Cochabamba en 2015.

En 2015, el tercer lugar lo alcanzó Sol.bo (13%), con un único pero contundente triunfo en La Paz, de la mano de Patzi, quien luego fundó el MTS. En 2021, ese porcentaje se repartió entre Jallalla, PBCSP y MTS, siempre articulado alrededor de la votación para la Gobernación de La Paz, con el extra del MTS en Beni y Pando para redondear entre los tres partidos un 16.5%. En otros términos, siglas y rostros nuevos, pero pocos cambios de fondo en la geografía y la sociología del voto. El cuadro requiere matices regionales, aunque sobre este tablero general.

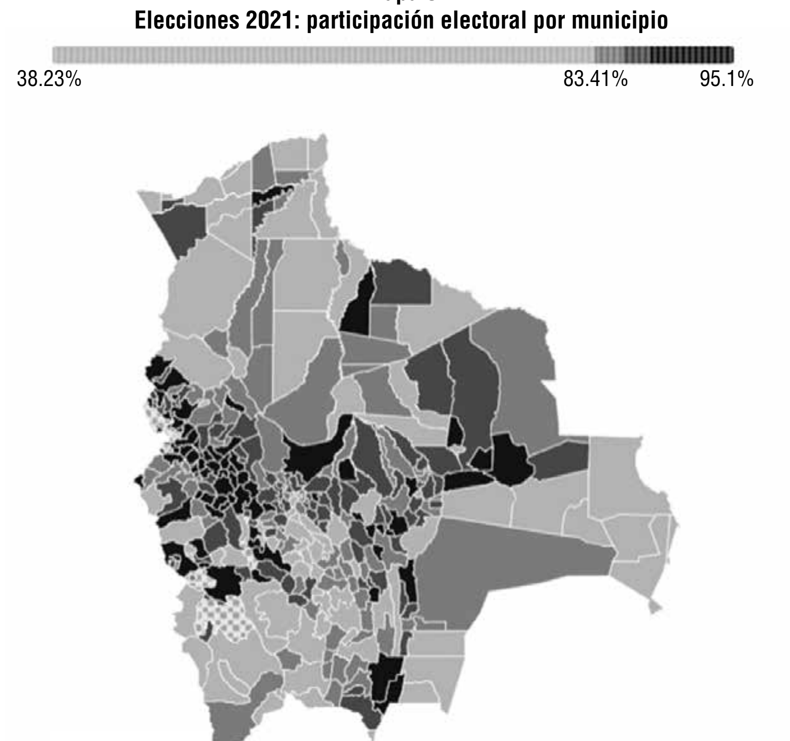
## La sólida participación electoral del 7 de marzo

La elección departamental y municipal registró una participación de 86%. El porcentaje fue nuevamente significativo, algo por debajo del registrado en los comicios de 2020 (-2.4 puntos) y ligeramente mayor al de los comicios locales de 2015 (+0.3 puntos).

Esa fortaleza participativa destaca aún más por tres razones. En una dimensión internacional, las elecciones subnacionales suelen registrar una participación bastante menor que las presidenciales o parlamentarias –dependiendo de cuál sea la más relevante en cada sistema político– (Romero Ballivián, 2021: 273-281). Asimismo, se aparta de la tendencia a la desmovilización en los comicios celebrados poco después de la elección central, coincidente con la primera etapa de un gobierno, cuando los ciudadanos sienten que ya se expresaron políticamente y no necesitan tanto hacer escuchar su voz (Parodi, 1992: 269-285). Por último, esa asistencia se produjo durante la pandemia, disuasiva para ciertas franjas del electorado, si bien la votación ocurrió en una fase descendente de contagios.

Esta participación tuvo variaciones regionales menores, que siguieron las pautas de los comicios generales –por lo tanto, no se repiten los esquemas explicativos–, como se observa en el mapa 8.

**Mapa 8**
**Elecciones 2021: participación electoral por municipio**




Fuente: Elaborado por Jorge Hevia con información del OEP.

El occidente del país conservó la participación más alta, con el pico en el departamento de La Paz (88.4%), gracias al efecto locomotora del altiplano y de El Alto (90%), más que de la ciudad de La Paz (86.6%). Esa línea se repitió en Oruro (87%), con guarismos significativos como los de Pazña (89.3%) o Huanuni (88.1%). En el otro extremo, la participación descendió hasta 81.1% en Pando, lastrada por Cobija (80.6%), así como en Beni (83%), donde las ciudades norteñas de Riberalta, Guayaramerín y Santa Ana del Yacuma bajaron el promedio.

Tanto el electorado del MAS como el proclive a la oposición se movilizaron. La polarización pudo más que el desgaste de la sucesión de comicios (los terceros en año y medio). Los votantes

no abandonaron la partida para respaldar su opción política o frenar al adversario. El MAS procuró consolidar su triunfo de 2020, disminuyendo al mínimo la recuperación de la oposición, en tanto que las diversas fuerzas contrarias intentaron contraponerse conquistando alcaldías de las capitales, ciudades intermedias y ciertas gobernaciones.

Más allá de la competencia, pesa el sentido cívico. Esto lo ilustran los municipios sin competencia, en los que sólo terció una fórmula (la del MAS). Así, en Arque, la concurrencia fue de 86.1% y en el bastión cocalero de Villa Tunari llegó a 89.3%. Las eventuales –y limitadas– reticencias frente a la oferta disponible se canalizaron a través de los votos nulos antes que en un alejamiento del ritual colectivo. Ciertamente, la falta de competencia debe matizarse pues concernió a la escala municipal, no a la departamental, celebrada en simultáneo.

En la segunda vuelta, realizada el 11 de abril, únicamente en cuatro departamentos (Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando) y sólo para el cargo de gobernador, la participación disminuyó entre cinco y seis puntos. Por ejemplo, en Chuquisaca, pasó de 84.4% a 78.9%. La experiencia latinoamericana muestra que ésta es una situación común en la segunda vuelta: franjas del electorado de organizaciones perdedoras tienden a abstenerse pues no se identifican con ninguna de las opciones en liza. La excepción correspondió a Tarija (-2.6 puntos, de 83.6% a 81%), probablemente porque fue el departamento donde el choque en la segunda vuelta fue entre el MAS y una fuerza claramente identificada con la oposición clásica, vale decir, se inscribió en la dinámica de la polarización.

## Alcances y límites de la victoria del MAS

El MAS fue el ganador de la elección departamental y municipal de 2021. Lo era, en cierta medida, desde el registro de las candidaturas, al ser la única fuerza que inscribió postulantes para las nueve gobernaciones y para todos los gobiernos municipales. Salvo excepciones, en todas las circunscripciones peleaba los puestos altos. Ninguna organización se acercó a semejante demostración

de fuerza, corroborando el colapso del sistema de partidos tradicional y las dificultades de las nuevas organizaciones por montar estructuras nacionales.

En el nivel departamental, ganó en la primera vuelta Cochabamba (52.3%), Oruro (39.9%) y Potosí (36%), distritos donde repitió su triunfo, sin presentar a los mismos candidatos de 2015. Corroboró la fortaleza de su organización, independientemente de los candidatos. Alcanzó la segunda vuelta en los cuatro departamentos donde hubo balotaje –Chuquisaca (33.7%), La Paz (35.9%), Tarija (34.9%), Pando (37.3%)–, aunque, al final, fue vencido en todos. Cayó derrotado en Santa Cruz (35.9%), gobernación que nunca ha podido ganar, y en Beni (19.4%), donde había ganado en 2015, en condiciones polémicas (tras la anulación de toda la plancha de UD, considerada favorita).

En el nivel municipal, el MAS tiñó de azul 240 de los 336 municipios, lo que equivale a 71.4%, en un masivo dominio territorial. En 19 municipios (5.6% del total) lo hizo con la comodidad de ser el único partido en la boleta: 10 en Cochabamba, 5 en Oruro, 3 en Potosí y 1 en La Paz, vale decir, en el occidente y centro del país. El perfil de esas alcaldías coincide: rural, aislado, de escasa población y pocos jóvenes, agricultura de subsistencia, preeminencia de las lenguas aymara y quechua –sin embargo, Villa Tunari, en el corazón del bastión cocalero del MAS, se aleja de ese patrón–. Representaron el extremo de una hegemonía que vira al unipartidismo. Sin ese predominio, su presencia se ramificó hacia la Amazonía (por ejemplo, en Nueva Esperanza, Gonzalo Moreno y El Sena, en Pando); las colonias agrícolas y la extensión urbana de la capital en Santa Cruz (San Julián, Cuatro Cañadas, Fernández Alonso en el primer caso; El Torno, en el segundo); el Chaco (Huacaya, Caraparí, Villamontes y otros).

Esta contundencia geográfica tuvo su reverso en la demografía: el MAS perdió en 7 de las 9 capitales (arañó dos triunfos en Sucre y Oruro, aprovechando la dispersión del voto opositor) y en las principales ciudades intermedias: Montero, Quillacollo, Huanuni o Riberalta, además de El Alto, el segundo municipio más poblado

del país. En la mayoría de los casos obtuvo porcentajes inferiores a los de 2015, ratificando las dificultades crecientes del MAS para atraer al electorado urbano.

El desequilibrio entre lo geográfico y lo demográfico se confirma en el recuento de votos. Los candidatos a alcaldes del MAS sólo reunieron 33.1% de los votos válidos, el peor desempeño desde 2010 (Ortuño, 2022: 26-28).

El resultado de 2021 puede compararse con la presidencial de 2020 y la elección departamental de 2015. Ambos contrastes son pertinentes para una mejor aprehensión de los datos.

Con respecto al éxito de la elección general de hacía apenas un cuatrimestre, el desempeño del MAS luce débil, por la pérdida de 13.8 puntos, con caídas en casi todos los departamentos, particularmente aguda en La Paz (-29.7 puntos). Con todo, en el nivel municipal hubo una correlación de 0.91 entre la votación del MAS en 2021 y su desempeño histórico (López y Capobianco, 2021: 107). Hubo poco ánimo del electorado de ofrecer una recompensa especial al desempeño de la gestión de Arce, aunque tampoco se percibió una intención de sancionarla.

En efecto, existe una brecha estructural entre la votación general y la votación local del MAS. Entre 2009 y 2010 fue de 18 puntos; entre 2014 y 2015, la diferencia llegó a 21 puntos, la más acentuada. La distancia de 2021 fue la más corta, pero también la votación de Arce fue la menor del MAS en una elección general en el período considerado (2009-2021).

En el escenario nacional, el MAS constituye un bloque sólido, dueño de uno de los polos que estructuran la política boliviana. El paso a la cancha local pone en juego dinámicas que ilustran las características del partido como una galaxia variopinta de grupos que convergen en una sigla única a nivel nacional, con intereses distintos que se dan vía libre en la disputa del poder local. Se suman controversias y rivalidades de líderes que provocan que muchos de los descartados para llevar la camiseta oficial busquen otras vías para competir: la organización no siempre acierta a elegir al más popular o apreciado en la localidad. Por último, existen

sensibilidades políticas, afines al MAS en la presidencial, pero que desean manifestarse con personalidad propia en el ámbito local. El zócalo electoral del MAS se disgrega.

A modo de ejemplo, San Andrés de Machaca, en el altiplano paceño, es un bastión del MAS: en la presidencial, le otorgó 86.9% de los sufragios, la segunda fuerza, CC consiguió apenas 2.2%. Allí mismo, en la municipal, el MAS perdió ante el Cabildo de Ayllus Originarios de San Andrés de Machaca (CAOSAM), más acorde a la sensibilidad local. En ese mismo distrito, el candidato a gobernador ganó, pero casi 50 puntos por debajo de Arce (37.3%). Sufrió la competencia de organizaciones que utilizan una retórica, propuestas y símbolos cercanos a los del mismo MAS y que poseen liderazgos de extracción popular: Jallalla de Santos Quispe, hijo de Felipe Quispe, uno de los dirigentes históricos del altiplano paceño (33.1%), y el MTS del gobernador Patzi (5.8%), además de una sangría importante en votos blancos y nulos (15.5%), indicativos de campañas que llegan débilmente a zonas periféricas. Las fuerzas ideológicamente antagónicas al MAS obtuvieron votaciones testimoniales.

También las rencillas personales alejan a líderes carismáticos que concretan sus aspiraciones fuera y contra el MAS. Emblemática fue la candidatura de Eva Copa en El Alto. El segundo municipio más poblado de Bolivia había dado una victoria contundente al MAS en 2020 (74.3%). Cuando Copa fue descartada, Jallalla le ofreció una sigla para competir y dejar mal parada a su antigua organización, gracias a un triunfo contundente (64.1%). Los alcaldes elegidos en Trinidad y Cobija con el MTS tuvieron una trayectoria similar, igual que Regis Richter quien derrotó al MAS en la segunda vuelta departamental en Pando (Canelas, 2022: 159-160).

Ya se mencionó la estabilidad departamental del MAS, así como el leve ascenso entre 2015 y 2021. El incremento nacional mostró contrastes regionales. Progresó en La Paz (+8.4 puntos), Santa Cruz (+6.4) y Tarija (+4.4), en tanto que, en los otros seis departamentos, cedió posiciones. Esta división tuvo una nota paradójica: mejoró en áreas donde, en el mejor de los casos, alcanzó la segunda vuelta, y disminuyó donde triunfó, si bien las caídas más

pronunciadas se produjeron en el Beni (-15.7) y Pando (-24.1), que no figuraron entre las de adhesión inicial al proyecto del MAS.

## Alcances y límites de las victorias de la oposición

La fragmentación de la elección local permite, a diferencia de la presidencial, que muchas fuerzas se consideren (legítimamente) ganadoras. En ese sentido, la oposición al MAS también reivindicó victorias, tanto departamentales como municipales. Fueron triunfos dispersos, porque ninguna organización tuvo el despliegue suficiente para una cobertura nacional –si bien se inscribieron listas en varios departamentos, sólo en uno, en el mejor de los casos, lograron un resultado significativo, con la excepción del MTS, ganador en Beni y Pando, así como en las alcaldías de Trinidad y Cobija–.

En ese sentido, la reestructuración partidaria de la oposición sufrió un retroceso. Los baluartes del antiguo sistema de partidos, el MNR o ADN, confirmaron su marginalización, con mínima capacidad para presentarse de manera autónoma, en el mejor de los casos sumándose en coaliciones donde tenían poca visibilidad. Se agotaron los proyectos que pretendieron dar el salto al plano nacional desde una sólida implantación local. Demócratas, sin la candidatura de Costas en la gobernación cruceña, y tras los fracasos en las presidenciales de 2019 y 2020, sumó cinco victorias municipales, de perfil discreto, en Santa Cruz. Sol.bo se redujo a porcentajes mínimos en la alcaldía y en la gobernación paceñas. Las organizaciones que se presentan como nacionales, en el sentido de que no se vinculan con un esquema departamental o municipal, como UN o la misma CC, cosecharon cifras bajas.

Más que organizaciones, el electorado opositor escogió personalidades, varias de las cuales se arroparon con siglas apenas conocidas hasta ese momento o con las que no tenían vinculación previa al registro de candidaturas, o armaron coaliciones a las que le pusieron un rótulo para la circunstancia.

Apoyaron candidatos que habían ganado popularidad en la administración municipal (por ejemplo, Óscar Montes, elegido gobernador de Tarija o Manfred Reyes Villa, electo alcalde de

Cochabamba tras un paréntesis de casi 20 años [Mayorga, 1997]), notoriedad en la gestión nacional (Iván Arias, exministro de Áñez, en La Paz; Horacio Poppe, exdiputado, en Sucre), reputación por su lucha contra la pandemia (Christian Cámara y Alejandro Unzueta, vencedores en la Alcaldía de Trinidad y en la Gobernación de Beni, respectivamente) o en las movilizaciones contra el MAS (Johnny Llally, vencedor en la Alcaldía de Potosí o, con características singulares, Luis Fernando Camacho, en Santa Cruz). Incluso respaldaron figuras que militaron o estuvieron cerca al MAS, así fuera hacía muy poco, si aparecían como los rivales más sólidos del gobierno, como en Pando, con las candidaturas del MST para la Alcaldía de Cobija (Ana Lucia Reis) y la gobernación (Regis Richter).

A diferencia de los postulantes del MAS, que partían del piso electoral del partido y al cual debían añadir cualidades propias para preservarlo o aumentarlo, los aspirantes de la oposición sólo contaban con el esfuerzo y recursos propios y con la apuesta de apelar a la concentración del voto útil contra el MAS como estrategia fundamental.

En el caso de Luis Fernando Camacho, hay una clara pasarela entre la presidencial 2020 y los comicios departamentales 2021. Creemos logró 13.2% en el primer caso y 14% en el segundo, con el mérito de que, en el último, sólo participó en Santa Cruz. En ese departamento, venció en la presidencial y en la gobernación, incrementando el apoyo de 42.6% a 52.4%. Aglutinó con facilidad un voto con fuerte identidad cruceña, sin deber batallar contra las eventuales dudas que generaba su postulación presidencial por el voto útil –que ahora le favoreció–. El voto por Creemos en la franja de gobernador pudo acompañarse de éxitos municipales propios (en siete alcaldías), pero también fue compatible con el apoyo a otras fuerzas con anclaje local, como Demócratas e, incluso, Unidos –que presentó su propio candidato para la gobernación–.

En cambio, el segundo lugar de CC en 2020 se diluyó. Ni en las plazas donde consiguió sólidas victorias logró presentar candidaturas con posibilidades de éxito. En el plano departamental, quedó en 0.9%. Los datos municipales tampoco le ofrecieron satisfacciones.

En Sucre y Cochabamba, donde Mesa obtuvo 58.3% y 46.1%, respectivamente, los candidatos de C-A se estancaron en 9.9% y 0.9%; en La Paz, su candidato desistió para no fragmentar el voto opositor. Paradójicamente, el mejor rendimiento lo consiguió en Santa Cruz, con el periodista Gary Añez que quedó segundo. Su debilidad rural fue ratificada.

En cambio, agrupaciones que no concursaron en 2020 figuraron entre las más votadas a nivel nacional, a menudo gracias a un solo buen resultado regional. El debutante Jallalla consiguió el tercer lugar a nivel nacional (6.4%), por su segundo lugar en La Paz, habilitante para competir en la segunda vuelta (22.8%). La agrupación llevaba la marca de Felipe Quispe, histórico dirigente indígena y a quien las encuestas otorgaban el primer lugar; tras su fallecimiento, la candidatura fue asumida por su hijo Santos Quispe. Jallalla no pertenece al espectro de la oposición clásica al MAS. Es más bien heredero del katarismo, un movimiento con raíces hondas en el altiplano paceño de lengua aymara (Hurtado, 1986; Romero Ballivián, 2003: 281-317). Ese origen le permitió disputar, palmo a palmo, la votación rural al MAS. Su más resonante éxito municipal fue la victoria en El Alto, de la mano de Eva Copa, invitada tras haber sido apartada por el MAS (64.1%).

Una situación estadística similar corresponde a Por el Bien Común Somos Pueblo (PBCSP), cuarto en Bolivia (5.7%), gracias a su tercer lugar en La Paz (20.3%). Su candidato, Rafael Quispe, una de las pocas figuras indígenas con visibilidad en la oposición, generó una mancuerna con Iván Arias, elegido alcalde del municipio de La Paz. El voto rural de Quispe fue residual, salvo en algunos lugares específicos que demostraron simpatía por Mesa, como Chulumani.

Singular fue el caso del MTS (4.4%). Su fundador y principal figura, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, fracasó en su reelección (3.9%). Sin embargo, ofreció la sigla a figuras ajenas a la organización, a veces antiguos militantes del MAS –como el mismo Patzi– que no habían conseguido la nominación de ese partido. Esta estrategia dio resultados, con la victoria en Beni (36.6%), el exitoso paso a la segunda vuelta en Pando (35.4%) y un tercer lugar

en Cochabamba (6.8%). En el ámbito municipal, el MTS logró dos victorias en ciudades capitales: Trinidad (26.9%) y Cobija (42.4%).

En todos los casos, el laxo vínculo con los candidatos ofrece pocas perspectivas a los partidos para impulsar un proyecto de bases sólidas. Los ganadores asumieron que los méritos de la victoria les correspondían a ellos, con prescindencia de la sigla que los cobijó, y las organizaciones políticas no tuvieron posibilidad de fijar ninguna línea a las autoridades entrantes. En varios casos, al cabo de unos pocos meses, la ruptura entre los alcaldes y las organizaciones estaba consumada.

# Conclusión: el ciclo electoral 2020-2021 y los desafíos de la democracia boliviana

La elección 2020 –y, con ella, el ciclo que engloba la elección 2021– fue la más compleja de la historia democrática de Bolivia. Estuvo en juego una salida pacífica e institucional que apuntalara una democracia frágil o, en su defecto, un desenlace de aristas conflictivas, con potencial de violencia.

Desde 1982, Bolivia había atravesado circunstancias adversas para las elecciones. La zozobra marcó la presidencial de 1985. El primer gobierno democrático se rindió ante la conjunción de la inflación, el descontrol social, el conflicto con el sindicalismo y la ingobernabilidad política. Tras una extensa negociación, el presidente Siles accedió a recortar su mandato para que se adelanten los comicios generales. En la gravedad de la crisis, los actores coincidieron en que la elección era la ruta para resolverla y la organización política e institucional, complicada por las serias perturbaciones de la economía, avanzó con consenso.

En 2005, otra vez se adelantó una elección general como consecuencia de una crisis. El modelo económico liberal y el esquema de gobernabilidad sustentado en pactos partidarios, construido desde 1985, se tambaleaba ante los cuestionamientos de los movimientos sociales y regionales que desbordaban los marcos institucionales. Las elecciones emergieron como el canal indispensable e indiscutible y fueron encargadas a un organismo

electoral que había asentado su legitimidad desde su reconstrucción institucional en 1991.

A la luz de esos precedentes, los comicios de 2020 presentan diferencias que configuran un escenario de mayor complejidad. El desenlace de las jornadas de octubre y noviembre de 2019 (el rechazo a los resultados, el conflicto en las calles, la renuncia de Morales, la anulación de los comicios y la convocatoria a nuevas elecciones, la recomposición del organismo electoral) se produjo "tras" y "con" confrontaciones, incluyendo episodios de violencia que agudizaron la polarización. La rivalidad social, regional y política se acentuó por la sensación de una disputa irresuelta, a diferencia de 1985, cuando la izquierda llegaba exhausta y dividida; y de 2005, cuando las formaciones liberales perdían fuelle.

A un lado y al otro del escenario político existían reticencias para reconocer las credenciales democráticas de los adversarios y el proceso electoral de 2020 se anticipaba como un parteaguas para dirimir una disputa que había quedado, en cierto sentido, en suspenso. Se agravaron la incertidumbre y la ansiedad: en los días previos a la jornada de votación se multiplicaron los pronósticos sobre un posible desenlace violento y un desconocimiento de los resultados por parte de los derrotados que ahondarían la crisis en vez de resolverla.

A esas tensiones se agregó que la misma fórmula electoral, como mecanismo de resolución, quedara en entredicho. Tanto en 1985 como en 2005 –por razones distintas–, el papel del árbitro electoral no planteaba mayores debates; tras 2019, la legitimidad del órgano y del proceso electoral, como tales, estaba severamente cuestionada. Aunque la renovación concertada de las autoridades electorales constituyó un paso crucial para encarrilar la nueva elección, la suspicacia sobre la existencia de mecanismos fraudulentos quedó instalada en amplias franjas de la sociedad y varios sectores atizaron los recelos cuestionando el padrón, el diseño de las circunscripciones, la legalidad de la participación de partidos o candidatos, etc.

La irrupción de la pandemia complicó todas las tareas preparatorias logísticas y técnicas que debían desarrollarse en condiciones atípicas de funcionamiento de la sociedad. Más aún, la definición de la fecha para la jornada de votación se convirtió en objeto de

ásperas confrontaciones, e incluso llegó a ponerse en riesgo la celebración de los comicios en 2020.

Como no había ocurrido antes, actores políticos e institucionales de primer orden procuraron dilatar o suspender el proceso, encontrando eco en movimientos de la sociedad y en grupos atemorizados de asistir a sufragar. No existían precedentes de una actitud tan ambigua sobre el espacio electoral, lo que dio lugar a una presión también sin precedentes sobre el Órgano Electoral.

Considerando ese contexto, la realización de la elección representó un logro en sí mismo. Esto, junto con una jornada electoral pacífica y sin inconvenientes técnicos, la participación alta y los resultados nítidos –un ganador con mayoría absoluta que casi duplicó la votación del segundo–, facilitó que los resultados fueran reconocidos por los contendientes. La comunidad internacional validó el proceso y la sociedad lo aceptó. La fase postelectoral se llevó a cabo sin conflictos. Así, la elección general cumplió su propósito inicial: la posesión de un gobierno y una Asamblea dotados de legalidad y legitimidad. Por lo tanto, contribuyó a reafianzar las bases de la democracia, desgastadas por los prolegómenos y la misma crisis de 2019-2020.

Los comicios locales de 2021 contribuyeron en este mismo sentido, hasta con un efecto acentuado por la amplia redistribución del poder. Se repitió una jornada sin contratiempos técnicos y tranquila, más allá de incidentes circunstanciales –y de raigambre local– en algunas localidades de Santa Cruz y Pando. La participación alcanzó cotas muy altas.

Si la elección general consagró un vencedor único y todavía en el terreno local el MAS permaneció como la mayor fuerza nacional, las derrotas en la mayoría de las capitales y de las gobernaciones provocó un remezón. Por su parte, aunque derrotada en la gran mayoría de los municipios y sin ninguna fuerza emergiendo en posición de contrapeso al gobierno, la oposición venció en varias de las plazas más relevantes: siete de las nueve capitales y El Alto, además de seis gobernaciones. Incluso, la oposición se repartió premios en una gama extensa de sensibilidades, desde escisiones de ese partido hasta proyectos de corte conservador.

El ciclo electoral 2020-2021 demostró que la democracia boliviana tuvo la capacidad, a pesar de los múltiples desafíos, de hallar los procedimientos para dirimir la titularidad del poder en condiciones pacíficas e institucionales. Dio aire fresco al juego político, ayudó a reconstruir la confianza ciudadana en la competencia electoral y renovó la legitimidad de las autoridades.

Sin embargo, la resolución del componente electoral de la crisis política –el factor más inmediato y con mayor potencial de provocar situaciones conflictivas o violentas– no implicó necesariamente la atenuación de los otros problemas. Bolivia enfrenta, como los otros países, una crisis socioeconómica como consecuencia de la pandemia y del desgaste del modelo de crecimiento. El funcionamiento de la sociedad se encuentra perturbado y casi no hay áreas que hayan salido indemnes.

Tampoco resolvió desafíos pendientes, entre los cuales figuran las garantías para un sostenido desempeño de imparcialidad de los árbitros de la competencia política, así como para la preservación de los espacios del disenso y el pluralismo; la reforma del sistema de justicia; la equidad mínima en la competencia en los comicios con reelección presidencial consecutiva; la consolidación de los espacios de autonomía de los niveles locales de gobierno; la reconstrucción del sistema de partidos o el apuntalamiento de valores democráticos (Romero Ballivián, 2015: 147-178).

La polarización permanece viva y constituye un caldo de cultivo para la contestación política, regional y social, cuyo cauce resulta difícil de prever. Las huellas de los conflictos de 2019 no se han borrado, tanto más cuando sus sedimentos antiguos abarcan los campos político, social, regional y cultural. Existen limitados espacios para construir diálogos y pocas instituciones se sitúan al margen de esa rivalidad, pues hasta las que por mandato constitucional debieran ser independientes o autónomas parecen depender de los poderes de turno. Los derroteros de la democracia boliviana no se vislumbran sencillos en un panorama internacional marcado por el debilitamiento global de la democracia (IDEA Internacional, 2021: 1-6).

## Anexo
## Elecciones generales 2019: datos oficiales por organización política y departamento

| Partido | Chuquisaca | La Paz | Cochabamba | Oruro | Potosí | Tarija | Santa Cruz | Beni | Pando | Exterior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS | 128.657 | 887.271 | 659.188 | 139.189 | 179.874 | 123.715 | 550.058 | 74.708 | 25.627 | 120.647 | **2.889.359** |
| CC | 134.338 | 497.844 | 369.156 | 95.414 | 119.697 | 130.526 | 741.166 | 74.617 | 23.271 | 54.568 | **2.240.920** |
| PDC | 24.385 | 178.132 | 79.970 | 39.192 | 38.042 | 34.374 | 108.849 | 15.164 | 4.440 | 16.499 | **539.081** |
| BDN | 5.954 | 19.892 | 17.312 | 4.763 | 12.210 | 8.349 | 149.026 | 37.249 | 2.033 | 3.379 | **260.316** |
| MTS | 1.991 | 53.133 | 4.996 | 3.729 | 4.745 | 1.078 | 3.935 | 1.455 | 467 | 1.295 | **76.827** |
| MNR | 1.666 | 5.399 | 2.625 | 1.156 | 2.005 | 5.619 | 12.997 | 8.353 | 1.198 | 1.291 | **42.334** |
| PANBOL | 3.578 | 13.026 | 6.343 | 3.485 | 3.065 | 1.443 | 5.623 | 899 | 378 | 1.982 | **39.826** |
| UCS | 1.572 | 6.443 | 2.937 | 1.437 | 2.486 | 1.304 | 6.625 | 971 | 235 | 1.272 | **25.283** |
| FPV | 1.685 | 8.037 | 3.641 | 1.132 | 2.372 | 1.305 | 3.987 | 841 | 207 | 696 | **23.725** |
| Válidos | 303.826 | 1.669.177 | 1.145.988 | 289.497 | 364.496 | 307.713 | 1.582.266 | 214.257 | 57.856 | 201.629 | **6.137.671** |
| Blancos | 8.259 | 22.216 | 13.362 | 4.502 | 11.310 | 6.362 | 18.825 | 5.740 | 1.130 | 1.867 | **93.507** |
| Nulos | 14.299 | 59.614 | 38.149 | 11.249 | 21.254 | 14.193 | 53.823 | 8.016 | 2.248 | 6.455 | **229.337** |
| Emitidos | 326.384 | 1.751.007 | 1.197.499 | 305.248 | 397.060 | 328.268 | 1.654.914 | 61.234 | 61.234 | 209.951 | **6.460.516** |
| Inscritos | 370.680 | 1.910654 | 1.325.896 | 335.777 | 452.047 | 377.600 | 1.863.543 | 72.580 | 72.580 | 341.001 | **7.315.364** |

Fuente: Elaboración propia con información del OEP.

# Bibliografía

Alberoni, Francesco (1992). *Genesis*. Ramsay: París.

Alcántara Sáez, Manuel (2021). "América Latina 2021-2021: Votos y jueces en tiempos de pandemia", en *Revista Euro Latinoamericana de Análisis Social y Político*, año 2, N.° 3, pp. 29-43. Disponible en: http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/relasp/article/view/679/603

Aguilar, Susana; Chuliá, Elisa (2007). *Identidad y opción: dos formas de entender la política*. Madrid: Alianza.

Aguilera, Victoria; Marca, Juan Pablo (2020). "Circunscripciones especiales indígenas de Bolivia", en *Artículo Primero*, 21, pp. 54-66.

Alemán, Luis Víctor (2013). "La movilización de los diecinueve días: la identidad colectiva potosina y su resignificación", en *Temas Sociales*, 33, pp. 57-77.

Ascarrunz, Julio (2015). "La relación nacional-departamental en Bolivia: una mirada multinivel al nuevo escenario político del país", en *Politai*, 6, 10, pp. 39-59.

Banco Mundial (2022). *Finanzas al servicio de la recuperación equitativa*. Washington: Banco Mundial.

Barbieri, Daniel; Cachés, Javier; Reina, Augusto (2021). "Popularidad presidencial durante la pandemia" en *Diálogo político* (www.dialogopolítico.org).

Bárcena, Alicia (2021). “Efectos socioeconómicos de la COVID-19 en América Latina y el Caribe y perspectivas de recuperación”, en *Pensamiento Iberoamericano* 1/2021, pp. 62-87. Disponible en: https://www.somosiberoamerica.org/wp-content/uploads/2021/03/CAP2-ALICIA-BARCENA.pdf

Bellot, Carlos (2021). “Análisis jurídico-constitucional de los hitos importantes en los procesos electorales extraordinarios 2020-2021 en Bolivia”, en *Democracia en vilo*, La Paz: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pp. 113-142.

Börth Irahola, Carlos (2009). “Cuarenta días que conmovieron a Bolivia y un pacto político forzado”, en Romero, Carlos; Börth Irahola, Carlos; Peñaranda, Raúl, *Del conflicto al diálogo: Memorias del acuerdo constitucional*. La Paz: FES-ILDIS Y FBDM, pp. 49-106. Disponible en: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/07244.pdf

Brockmann, Robert (2020). *21 días de resistencia: La caída de Evo Morales*. La Paz: Libros de Bolivia.

Canelas, Manuel (2022). “Bolivia 2019-2021: de la épica ordinaria y el regreso al (¿nuevo?) orden”, en Souverain, Jan y Exeni, José Luis (coords.), *(Re)configuración del campo político en Bolivia: Balance y horizontes del ciclo electoral 2020-2021*, La Paz: Friedrich Ebert Stiftung, pp. 123-162.

Carranza, Narda; Chuquillanqui, Manuel (2020). “Primarias en América Latina: hacia una tipología tridimensional”, en *Elecciones*, 19, pp. 85-108.

Casas, Kevin; Zovatto, Daniel (2011). “Para llegar a tiempo: apuntes sobre la regulación del financiamiento político en América Latina”, en Gutiérrez, Pablo; Zovatto, Daniel (coords.), *Financiamiento de los partidos políticos en América Latina*, México, D. F.: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Organización de los Estados Americanos (OEA), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pp. 17-67.

Centellas, Miguel (2017). “Does ‘ethnic’ voting explains electoral support for the MAS?”, en *Revista boliviana de Ciencias Políticas*, 1, (1), pp. 51-78.

Centro Carter (2021). "Informe elecciones generales 2020 (resumen ejecutivo)", en *Andamios*, 10, pp. 92-93.

Córdova, Julio (2020). "Vivencias en la polarización y en los conflictos sociales de octubre-noviembre de 2019", en Laserna, Roberto (dir.), *Polarización y conflicto (midiendo los riesgos de la violencia)*, Cochabamba: CERES, pp. 31-42.

Corte IDH (Interamericana de Derechos Humanos) (2021). "Opinión Consultiva OC-28/21 de 7 de junio de 2021". Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_28_esp.pdf

Do Alto, Hervé (2011). "Un partido campesino en el poder", en *Nueva Sociedad*, 234, pp. 95-111.

Dworkin, Ronald (2008). *La democracia posible: Principios para un nuevo debate político.* Barcelona: Paidós.

Fernández, Gustavo (2013). "Espejos y espejismos: la relación de América Latina con Estados Unidos", en *Nueva Sociedad*, 246, pp. 78-86.

Flores, Imer (2009). *Democracia y polarización: ¿(in)compatibilidad?* Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Freidenberg, Flavia (2016). "La reina de las reformas: las elecciones internas a las candidaturas presidenciales en América Latina", en Freidenberg, Flavia; Muñoz-Pogossian, Betilde (edits.), *Reformas a las organizaciones de partidos en América Latina 1978-2015*, Lima: Pontificia Universidad Católica de Perú, pp. 31-91.

Fukuyama, Francis (2019). *Identidad: La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento.* Barcelona: Deusto.

Fundación Konrad Adenauer (2009). *Reflexión crítica a la nueva Constitución Política del Estado*. La Paz: Fundación Konrad Adenauer.

Gamboa, Franco (2009). *Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia*. La Paz: Fundación Konrad Adenauer.

García Linera, Álvaro *et al.* (2001). *Tiempos de rebelión*. La Paz: Muela del diablo.

Gonzáles, Inés (2013, comp.). *Biografías: historias de vida en la Asamblea Legislativa Plurinacional*. La Paz: Fundación Friedrich Ebert, IDEA, Gente común.

Haro, Ana (2013). "Bolivia, las elecciones de 2009: tomando posiciones para el desarrollo de la Constitución", en Alcántara, Manuel; Tagina, María Laura (coords.). *Elecciones y política en América Latina 2009-2011*. México, D. F.: Porrúa, Instituto Federal Electoral, pp. 235-272.

Heras, Carlos (2021). *Partidos de oposición en el proceso de cambio boliviano (2006-2019)* [Tesis de maestría en el Colegio de México].

Hurtado, Javier (1986). *El katarismo*. La Paz: Hisbol.

IDEA Internacional (2021). *The Global State of Democracy 2021*. Estocolmo: IDEA Internacional.

Inglehart, Ronald (1993). *La transition culturelle dans les sociétés industrielles avancées*. Paris: Economica.

Instituto Nacional Electoral (2016). *El voto extranjero en 18 países de América Latina*. Ciudad de México: Instituto Nacional Electoral.

Instituto Nacional Electoral; Centro de Asesoría Promoción Electoral (2020). *El COVID-19 y las elecciones en América Latina*. Ciudad de México: INE, IIDH-CAPEL.

Jáuregui, Luciana (2021). "El MAS-IPSP en la transición postevista", en *Democracia en vilo*, La Paz: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pp. 173-202.

Komadina, Jorge (2008). "La estrategia simbólica del Movimiento al Socialismo", en *Tinkazos*, 23-24, pp. 183-196.

Komadina, Jorge (2013). "Culturas políticas, democracia interna y conflicto en el Movimiento al Socialismo", en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. *Partidos políticos del Estado Plurinacional*. La Paz: Tribunal Supremo Electoral, PNUD, Embajada de Suecia, pp. 11-42.

Lafleur, Jean Michel (2012, dir.). *Diáspora y voto en el exterior (la participación política de los bolivianos en su país de origen)*. Barcelona: CIDOB.

Laserna, Roberto (2004). *La democracia en el* ch'enko. La Paz: Milenio.

Laserna, Roberto (2020, dir.). *Polarización y conflicto (midiendo los riesgos de la violencia)*. Cochabamba: CERES.

Latinobarómetro (2022). *Informe 2021 (adiós a Macondo).* Santiago: Latinorabómetro.

Lazarte, Jorge (2008). *Derrumbe de la "res-pública": los procesos electorales en Bolivia: 2002, 2004, 2005*. La Paz: Plural.

Lehoucq, Fabrice (2020). "Bolivia's Citizen Revolt", en *Journal of Democracy*, 31, 3, pp. 130-144.

Levitsky, Steven; Ziblatt, Daniel (2020). *Cómo mueren las democracias*. Ciudad de México: Ariel.

Loayza, Rafael (2011). *Eje del MAS: Ideología, representación social y mediación en Evo Morales Ayma*. La Paz: Fundación Konrad Adenauer.

Loayza, Rafael (2021). "Bolivia: el imaginario racial 'blanco' bajo el gobierno de los 'indios'", en *Nueva Sociedad*, 292, pp. 96-106.

López, Rafael; Capobianco, Susana (2021). "La hipótesis nula (estudio de los factores que influyeron en la elección nacional 2020", en *Democracia en vilo*, La Paz: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pp. 573-112.

Mamani, Pablo (2021). "Subjetividades sociales. Ciudad de El Alto y elecciones 2019-2020", en *Democracia en vilo*, La Paz: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pp. 239-274.

Martin, Pierre (2001). *Comprendre les évolutions électorales.* Paris: Presses de Sciences Po.

Mayorga, Fernando (1997, coord.). *¿Ejemonías? Democracia representativa y liderazgos locales: Percy Fernández, Manfred Reyes Villa, Mónica Medina*. La Paz: PIEB.

Mayorga, Fernando (2020, coord.). *Crisis y cambio político en Bolivia.* La Paz: UMSS, Oxfam Bolivia.

Mayorga, Fernando; Rodríguez, Benjamín (2015). *Democracia participativa y crisis política: Análisis de los resultados del referéndum revocatorio de mandato popular 2008*. La Paz: Tribunal Supremo Electoral.

Mayorga, Fernando; Rodríguez, Benjamín (2016). *Urnas y democracia directa: Balance y referéndum 2016*. La Paz: Tribunal Supremo Electoral.

Mayorga, René Antonio (2004). "La crisis del sistema de partidos políticos: causas y consecuencias", en *Partidos políticos en la región andina: entre la crisis y el cambio*. Lima: IDEA, pp. 27-49.

Mesa, Carlos (2008). *Presidencia sitiada: Memorias de mi gobierno*. La Paz: Gisbert.

Monrroy, Edgar (2020). "Elecciones primarias de candidaturas presidenciales del binomio presidencial", en *Andamios*, 9, pp. 127-133.

Morales, Juan Antonio (2021). "Estatismo del siglo XXI en el gobierno del Movimiento al Socialismo", en *Bolivia, siglo XXI: De la República al Estado Plurinacional*, La Paz: Harvard Club de Bolivia, pp. 135-162.

Observa Bolivia (2020). *Informe de observación electoral ciudadana (elecciones generales Bolivia 2020)*. La Paz: Observa Bolivia.

Organización de los Estados Americanos (2020). "Informe final de análisis de integridad electoral", en *Andamios*, 9, pp. 57-125.

Organización de los Estados Americanos (2021). "Informe elecciones generales 2020 (resumen ejecutivo)", en *Andamios*, 10, pp. 71-88.

Ortuño, Armando (2022). "El ciclo 2020-2021 desde la geografía electoral: complejidad territorial y diversidad del voto", en Souverain, Jan y Exeni, José Luis (coords.), *(Re)configuración del campo político en Bolivia (balance y horizontes del ciclo electoral 2020-2021)*, La Paz: Friedrich Ebert Stiftung, pp. 1-47.

*Página Siete* (29 de septiembre de 2019). "Según la encuesta, 68% cree que habrá fraude electoral".

*Página Siete* (13 de octubre de 2019). "Recta final de infarto".

*Página Siete* (2 de diciembre de 2019). "70% de los encuestados afirman que hubo revuelta social y no un golpe".

*Página Siete* (2019). *La revolución de las pititas (34 crónicas periodísticas sobre la caída de Evo Morales)*. La Paz: *Página Siete*.

*Página Siete* (26 de enero de 2020). "Encuesta: el 45% de consultados confían en la presidenta Añez", p. 4.

Parodi, Jean Luc (1992). "La double consultation de mars 1992, à la recherche d'un modèle", en Habert, Philippe; Perrineau,

Pascal; Ysmal, Colette, *Le vote éclaté*. Paris: Le Figaro, Presses de la Fondation Nationale del Science Politiques (PFNSP), pp. 269-285.

Peralta, José Orlando (2021). *Rebelión y pandemia (proceso político-electoral en Bolivia 2019-2020)*. La Paz: Plural.

Pereira, René (2011). *Perfil migratorio de Bolivia*. Buenos Aires: Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Pérez, Miguel Ángel (2009). "Análisis de los resultados electorales del referéndum nacional constituyente 2009", en *Opiniones y Análisis*, 98, pp. 71-99.

Pérez Guadalupe, José Luis; Grundberger, Sebastián (2018, edits.). *Evangélicos y poder en América Latina*. Lima: Fundación Konrad Adenauer, Instituto de Estudios Social Cristianos.

Pinillos, Cintia *et al.* (2022, comps.). *La democracia a prueba: los años que votamos en pandemia en las Américas*. Buenos Aires: CLACSO, UNR.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015). *Informe Nacional de Desarrollo Humano. El nuevo rostro de Bolivia: Transformación social y metropolización*. La Paz: PNUD.

Rivière, Gilles (2004). "La Iglesia evangélica pentecostal en las comunidades aymaras del altiplano", en Sppeding, Alison (comp.), *Gracias a Dios y a los achachilas: la sociología de la religión en los Andes*, La Paz: ISEAT-Plural, pp. 259-294.

Roca, José Luis (1999). *Fisonomía del regionalismo boliviano*. La Paz: Plural.

Romero Ballivián, Salvador (2003). *Geografía electoral de Bolivia*. La Paz: Fundemos.

Romero Ballivián, Salvador (2007). *El tablero reordenado: Análisis de la elección presidencial 2005*. La Paz: Corte Nacional Electoral.

Romero Ballivián, Salvador (2015). "Díez desafíos de la democracia boliviana", en *Journal de comunicación social*, 2, La Paz: Universidad Católica Boliviana (UCB), pp. 147-178.

Romero Ballivián, Salvador (2016). "El sistema de partidos en Bolivia (1952-2015): del partido hegemónico al partido

predominante", en Flavia Freidenberg (edit.). *Los sistemas de partidos en América Latina (1978-2015)*. México, D. F.: UNAM, INE, pp. 271-339.

Romero Ballivián, Salvador (2018). *Diccionario biográfico de parlamentarios 1979-2019*. La Paz: Fundación Konrad Adenauer, FUNDAPPAC.

Romero Ballivián, Salvador (2021). *Elecciones en América Latina*. La Paz: IDEA, Tribunal Supremo Electoral.

Ruiz, María Angélica (2021). "Evolución histórica del crecimiento del Padrón Electoral Biométrico. Mitos y realidades", en *Andamios*, 10, La Paz: Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia (OEP), pp. 111-136.

Shavelzon, Salvador (2013). *El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia: etnografías de una Asamblea Constituyente*. La Paz: Plural, CLACSO, IGWIA, CEJIS.

Sosa-Villagarcía, Paola; Hurtado, Verónica (2021). "COVID 19 and presidential popularity in Latin America", en *Revista Latinoamericana de Opinión Pública*, 10, 2, pp. 71-91.

Svolik, Martin (2019). "Polarization versus Democracy", en *Journal of Democracy*, 30, (3), pp. 20-32.

Treminio, Ilka; Muñoz Portillo, Juan Manuel (2019). "La reelección presidencial en Centroamérica: estrategias desesperadas de retención del poder", en Romero Ballivián, Salvador; Castellanos, Julieta (dirs.), *Encrucijadas de la democracia en Honduras y América Central.* Tegucigalpa: UNAH, NDI, pp. 101-122.

Tribunal Supremo Electoral (2021). *Informes de observación y acompañamiento electoral - elecciones generales 2020*. La Paz: Tribunal Supremo Electoral.

Unión Europea (2021). "Informe elecciones generales 2020 (resumen ejecutivo)" en *Andamios*, 10, pp. 88-91.

UNIORE (2021). "Informe elecciones generales 2020 (resumen ejecutivo)", en *Andamios*, 10, pp. 94-97.

Vargas, Francisco (2021). "Participación y representación política de los pueblos indígenas. Análisis de las circunscripciones especiales indígenas", en *Andamios*, 10, La Paz: OEP, pp. 53-67.

Varnoux, Marcelo (2015). "Los cambiantes escenarios políticos en Bolivia: de las elecciones generales de 2014 a las elecciones sub-nacionales y referéndums departamentales en 2015", en *Anuario Latinoamericano de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales*, 2-2015.

Velasco, Ximena *et al.* (2021). "Latin America Erupts: When does Competitive Authorianism take root?", en *Journal of democracy*, 32, 3, pp. 63-77.

Vergara, Alberto (2015). *La danza hostil: poderes subnacionales y Estado central en Bolivia y Perú, 1952-2012*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Wahman, Michael (2017). "Nationalized Incumbents and Regional Challengers: Opposition and Incumbent Party Nationalization in Africa", en *Party Politics*, 23, 3, pp. 309-322.

Zamora, Belén; Fernández, Ivanna; Peña, Karen (2021). "La paridad en el proceso electoral boliviano", en *Tejedoras*, 2, pp. 28-37.

Zuazo, Moira (2009). *¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la política en Bolivia*. La Paz: Friedrich Ebert Stiftung.

# Sobre el autor

Salvador Romero Ballivián es doctor en Ciencias Políticas del Instituto de Ciencias Políticas de París (Sciences Po). Fue vocal y vicepresidente de la Corte Departamental de La Paz-Sala Provincias (1995-1998), vicepresidente y presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) (2004-2008) y presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) (2019-2021).

Ha sido director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL-IIDH), así como el primer director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras (2011-2014). Fue parte de numerosas misiones de observación electoral en América Latina con la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y el Centro Carter. Dirigió en dos oportunidades (2018, 2021) el Proyecto de acompañamiento técnico al proceso electoral mexicano organizado por CAPEL-IIDH con los órganos electorales de ese país. Ha trabajado como consultor internacional para distintos organismos e instituciones. Por otra parte, ha ejercido la docencia en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y en la Universidad Católica Boliviana (UCB), y ha impartido clases en cursos cortos en varias universidades latinoamericanas. Desde 2022, dirige el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) en Paraguay.

Es autor, entre otras, de las siguientes obras: *Elecciones en América Latina* (2021), considerado un título de referencia en la materia; *Geografía electoral de Bolivia* (2003); *Razón y sentimiento: La socialización política y las trayectorias electorales en la elite boliviana* (2003); *Atlas electoral latinoamericano* (2007, en coautoría); *Diccionario biográfico de parlamentarios 1979-2009* (2018). Ha publicado decenas de artículos y capítulos académicos en América Latina y Europa.

Este libro propone un análisis del ciclo electoral 2020-2021 que va más allá del propio ciclo, pues lo sitúa en una mirada más larga, en torno a cambios y continuidades relevantes de la dinámica electoral boliviana. Constituye, por ello, un valioso aporte para entender la disputa política considerando no sólo variables electorales, sino también sociales y territoriales.




ISBN: 978-9917-605-67-6
9 789917 605676